

**UNIVERSIDAD DE PANAMA
CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO DE LOS SANTOS
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS
MAESTRIA EN DERECHO PROCESAL**

TESIS

**“EL HABEAS DATA COMO MECANISMO
EFICAZ DE PROTECCION DEL DERECHO
A LA INTIMIDAD Y LA LIBERTAD
DE INFORMACION”**

**PRESENTADO POR
SOLIS CORDOBA, SELIVETH LARIZA
7-700-458**

2011

DEDICATORIA

A mi hijo JHAZEEL XAVIER VEGA SOLIS quien llego a mi vida para llenarla de alegria,
luz, fuerza y motivacion para seguir adelante

A mi compa era fiel RITSY ESTELA (Q E P D) quien durante muchos a os estuvo a mi lado
brindandome su compania y carino

AGRADECIMIENTO

Ante todo quiero agradecerle a Dios Todopoderoso por darme la vida brindarme la luz y fuerza interior para lograr realizar todas mis metas

A mis padres Efrain Solis y Maritza C de Solis por ayudarme a realizar todos mis sueños y estar siempre presentes para apoyarme y no dejar que me rindiera nunca Además gracias por enseñarme que la mejor herencia que pueden dar los padres a sus hijos es una buena educación

A mi esposo Xavier Vega por el amor paciencia, comprensión y apoyo que me brindo para lograr terminar esta tesis

A todas aquellas personas que de una u otra forma me brindaron todo su apoyo

ÍNDICE

	Página
DEDICATORIA	II
AGRADECIMIENTO	III
INTRODUCCIÓN	XI
CAPITULO I EL PROBLEMA	1
1 1 ANTECEDENTES	1
1 2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	4
1 3 JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACION	5
1 4 ALCANCES Y LIMITES DEL PROBLEMA	6
1 4 1 ALCANCES	6
1 4 2 LIMITES	6
1 5 OBJETIVOS GENERALES Y ESPECIFICOS	7
1 5 1 OBJETIVOS GENERALES	7
1 5 2 OBJETIVOS ESPECIFICOS	7
1 6 HIPOTESIS	7
CAPITULO II MARCO TEORICO	8
2 1 CONSIDERACIONES PREVIAS	9
2 1 1 DERECHO A LA INFORMACION	9
2 1 1 1 INFORMACION DE ACCESO LIBRE	12
2 1 1 2 INFORMACION PERSONAL O CONFIDENCIAL	15
2 1 1 3 INFORMACION DE ACCESO RESTRINGIDO	19
2 1 2 DERECHO A LA INTIMIDAD O PRIVACIDAD	23
2 1 3 DERECHO A LA PROTECCION DE DATOS	26
2 1 3 1 CONCEPTO	29
2 1 3 2 NATURALEZA JURIDICA	30
2 1 3 3 BIENES JURIDICOS TUTELADOS	31
2 1 3 4 OBJETO	32
	VII

2 1 3 5 CONTENIDO	33
2 1 4 DERECHO INFORMATICO	33
2 1 4 1 CONCEPTO	33
2 1 4 2 NATURALEZA JURIDICA	34
2 1 4 3 CARACTERISTICAS	35
2 1 4 4 AUTONOMIA	36
2 1 4 5 INSTITUCIONES	37
2 2 CONCEPTO DE HABEAS DATA	37
2 3 NATURALEZA JURIDICA	40
2 4 EL BIEN TUTELADO	40
2 5 PRESUPUESTOS	41
2 6 FINALIDAD	41
2 7 ANTECEDENTES HISTORICOS DEL HABEAS DATA	42
2 8 ASPECTOS PROCESALES GENERALES	45
2 8 1 COMPETENCIA	45
2 8 2 PRETENSION	46
2 8 3 LEGITIMACION	46
2 8 3 1 LEGITIMACION ACTIVA	46
2 8 3 2 LEGITIMACION PASIVA	46
2 8 4 REQUISITOS PARA LA INTERPOSICION	47
2 8 4 1 PLAZO	47
2 8 4 2 LA PRESENTA LA PERSONA AFECTADA	48
2 8 4 3 FORMALIDADES	48
2 8 4 4 AGOTAMIENTO DE LA VIA GUBERNATIVA	48
2 9 ASPECTOS PROCESALES SOBRE EL PROCEDIMIENTO	49
2 9 1 JUICIO SUMARIO	49
2 9 2 MEDIDAS CAUTELARES	49
2 9 3 NOTIFICACION	49
2 9 4 EFECTOS DEL HABEAS DATA	50
2 10 EL ESTADO CONSTITUCIONAL DE DERECHO	50
2 11 LOS DERECHOS FUNDAMENTALES Y SU PROTECCION	51
2 12 EL HABEAS DATA EN PANAMA	57

2 12 1 CONSIDERACIONES PREVIAS	57
2 13 LA ACCION DE HABEAS DATA EN EL ORDENAMIENTO JURIDICO PANAMENO	62
2 13 1 RECONOCIMIENTO DE LA ACCION SU ALCANCE Y FINALIDAD	67
2 13 2 LOS TIPOS O CLASES DE INFORMACION A LA QUE SE PUEDE TENER ACCESO	69
2 13 3 LOS TIPOS O CLASES DE HABEAS DATA	72
2 13 4 MOTIVO DE LA ACCION DE HABEAS DATA	74
2 13 5 FUNCIONARIO O PERSONA CONTRA LA CUAL SE PROMUEVELA ACCION DE HABEAS DATA	75
2 13 6 TRIBUNAL COMPETENTE PARA CONOCER DEL HABEAS DATA	76
2 13 7 FORMALIDADES PARA PROMOVER LA ACCION DE HABEAS DATA	77
2 13 8 EL PROCEDIMIENTO DE LA ACCION DE HABEAS DATA	78
2 13 9 SANCIONES	84
2 14 CONSIDERACIONES FINALES DEL HABEAS DATA EN PANAMA	88
2 15 JURISPRUDENCIA	91
 CAPITULO III MARCO METODOLOGICO	 97
3 1 TIPO DE INVESTIGACION	98
3 1 1 INVESTIGACION EN CIENCIAS SOCIALES	98
3 1 2 INVESTIGACION EN CIENCIAS JURIDICAS	98
3 2 FUENTES Y SUJETOS DE INFORMACION	99
3 2 1 FUENTES MATERIALES	99
3 2 1 1 FUENTES PRIMARIAS	100
3 2 1 2 FUENTES SECUNDARIAS	100
3 2 1 2 1 CONTENIDO BIBLIOGRAFICO	100
3 2 2 SUJETOS DE LA INFORMACION	100
3 3 VARIABLES	101
3 3 1 VARIABLE INDEPENDIENTE	101
3 3 1 1 DEFINICION CONCEPTUAL	101
3 3 1 2 DEFINICION INSTRUMENTAL	102
3 3 1 3 DEFINICION OPERACIONAL	102

3 3 1 3 1 INDICADORES	103
3 3 2 VARIABLE DEPENDIENTE	104
3 3 2 1 DEFINICION CONCEPTUAL	104
3 3 2 2 DEFINICION INSTRUMENTAL	104
3 3 2 3 DEFINICION OPERACIONAL	105
3 3 2 3 1 INDICADORES	105
3 4 DESCRIPCION DE INSTRUMENTOS	105
3 5 DISEÑO DE LA INVESTIGACION	106
 CAPITULO IV ANALISIS DE LOS RESULTADOS	 108
4 1 PRESENTACION DE RESULTADOS	109
 CAPITULO V PROPUESTA	 138
5 1 JUSTIFICACION	140
5 1 OBJETIVOS	140
5 3 CUERPO DEL TRABAJO	140
 CONCLUSIONES	 145
RECOMENDACIONES	148
ANEXOS	150
BIBLIOGRAFIA	190

INTRODUCCION

El Estado constitucional de derecho se caracteriza, en su esencia, por la existencia de una Constitución cuya primacía sobre el resto de las demás normas jurídicas no se discute prevaleciendo esta sobre las mismas. Constituye dicha norma jurídica, el marco jurídico político dentro del cual han de desenvolverse tanto gobernantes como gobernados sus actuaciones. A favor de estos últimos se establecen y reconocen una serie de derechos fundamentales que han de ser respetados por las autoridades sin que les sea permitido ejercer injerencias innecesarias en el desarrollo de los derechos así previstos.

En el evento que ello no sea así cuando los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución sean desconocidos, infringidos o violentados, se podrán hacer valer a través de las garantías con miras a brindar protección a los distintos derechos previstos y regulados en tal norma suprema.

Por tanto, el establecimiento del Estado Constitucional va a responder en última instancia a una concepción garantizadora de los derechos fundamentales en la medida en que en este se establezca un sistema de garantías y tutela o protección a favor de la esfera de libertad de los individuos que componen la sociedad y que sirven de límite al ejercicio del poder político de las autoridades.

Dentro de esta concepción es en la que se enmarca el Habeas Data, el cual se trata de una de las garantías constitucionales de más reciente incorporación al sistema de garantías que caracteriza al Estado constitucional de derecho.

Es a esto a lo que ha venido a responder la Ley N 6 de 22 de enero de 2002 y el artículo 44 de la Constitución por la cual además de consignar el derecho que se tiene tanto al acceso de la información pública como la que tiene el carácter de personal viene a regular el Habeas Data como garantía por la cual será posible enfrentar y remediar las violaciones a uno u otro derecho

El desarrollo de esta tesis La Acción de Habeas Data como mecanismo eficaz para la protección del Derecho a la Intimidad y el Derecho a la Información se ubica en ese sentido colocando al Habeas Data como el instrumento que nace o se origina ante la creciente necesidad de revestir a la persona humana, de una protección frente a los adelantos tecnológicos cuando estos puedan representar una amenaza o lesión en su derecho a la intimidad cuando respecto a éste lo que requiere ser protegido son los datos personales de quien reclama la tutela

En el desarrollo del tema se ha considerado en el Capítulo II Marco Teórico hacer una referencia aunque sucinta de lo que es el derecho a la información sus modalidades el derecho a la intimidad y privacidad el Estado Constitucional de Derecho el concepto de Habeas Data, que como garantía constitucional está regulada y reconocida en el Derecho Comparado

Se analiza como está regulada la acción de Habeas Data en la Ley N 6 de 22 de enero de 2002 y en el artículo 44 de la Constitución Además se examina su alcance

finalidad clase o tipo de informacion a la que se puede tener acceso lo tipos de habeas data, el motivo de la acción la persona contra quien se interpone el tribunal competente las formalidades el procedimiento para interponerla y las sanciones que le corresponden a los funcionarios que no suministren la información

Dentro del capítulo III Marco Metodológico utilizamos un estudio descriptivo de los aspectos mas relevantes del tema que investigamos respecto a su origen aplicacion y evolucion utilizando como fuente de información libros revistas registros judiciales folletos legislación nacional y extranjera, internet y encuestas aplicados a agentes del sistema judicial

En el capítulo IV se encuentra el analisis e interpretación de los resultados los cuales estan presentados en cuadros y graficas Mientras que en el capítulo V presentamos nuestras propuesta conforme a la investigación realizada

Por ultimo esperamos que las conclusiones y recomendaciones a las cuales hemos llegado dentro de este trabajo contribuyan al marco de discusion en un tema de tanta relevancia como lo es precisar o fijar los contornos y el significado de una garantia constitucional como lo es el Habeas Data

CAPITULO PRIMERO
EL PROBLEMA

1 ASPECTOS GENERALES DEL PROBLEMA

1.1 Antecedentes del Problema

Desde tiempos inmemoriales el factor información se ha constituido en la base del desarrollo de diversas civilizaciones

En la actualidad la información ocupa un lugar importante debido al avance de la tecnología, la acumulación de datos y la cibercarretera, que transmiten necesariamente un exceso de información producto de la proliferación del uso de las computadoras

El derecho a la información se presenta hoy día como un derecho típico de la sociedad tecnológica en su doble aspecto de derecho a informar y a ser informado

Este doble derecho adquirió su importancia y significado porque la comunicación humana alcanzó su cuarta fase de desarrollo que dio origen al cuarto sector de la economía, el de la información que se añade a los tres anteriores (agricultura, industria y servicios)

Ante esta nueva realidad se hizo necesario que los países regularan el manejo, archivo, procesamiento y divulgación de información que sobre las personas constaban en registros o bancos de datos de entidades públicas y privadas

Fruto de esto se crea en Panamá la Ley N.º 6 de 22 de enero de 2002 que dicta normas para la transparencia en la gestión pública y establece la acción de Habeas Data y

en ese mismo sentido se considera necesario elevar a rango constitucional esta acción así como la protección de datos personales la cual se materializa mediante el acto legislativo N° 1 del 27 de julio del 2004 en los artículos 42, 43 y 44 las cuales constituyen una de las principales iniciativas legislativas en los últimos años en materia de reconocimiento de derechos fundamentales al establecer un mecanismo o instrumento claro y breve para lograr el acceso a la información en manos de agentes del Estado y demás instituciones que incluye la Ley. Por primera vez se establece un procedimiento especial, sumario e informal para controlar las decisiones que sobre esta materia ofrezcan los custodios y responsables de la información a los solicitantes control que por competencia le corresponde a los más altos tribunales de justicia, al dimitir las acciones de Habeas Data.

Esta Ley en el ámbito de los derechos privados busca salvaguardar derechos personalísimos inherentes y esenciales del ser humano como lo es el derecho a la intimidad y a la privacidad. En el campo de los derechos públicos se establece la obligación que tiene el estado de informar en cuanto a su gestión y de dotar de un instrumento jurisdiccional que ponga freno a las arbitrariedades de aquellos funcionarios públicos que desconociendo el derecho que se tiene a la información por parte de toda persona, ya sea de acceso público o de carácter particular termina negando el conocimiento de la misma.

En cuanto a la protección de la esfera íntima de la persona dentro del cambio de modelo de la sociedad tradicional a la sociedad de la información que ante el desarrollo

de las telecomunicaciones la informática, y el intercambio casi incontrolado de todo tipo de información lo que posibilita el acceso remoto a bases y bancos de datos que pueden contener información personal surge la acción de Habeas Data como un mecanismo necesario para proveerle a las personas el derecho a la autodeterminación es decir el derecho de poder decidir y controlar el uso de la información que le pertenece es pues en este sentido a lo que se limita esta investigación

1.2 Planteamiento del Problema

Nos concentraremos en analizar el tratamiento que se le da a la información pública y privada mediante el almacenamiento de bancos de datos y los inconvenientes que ello genera por el uso abusivo de la informática

El hecho de que en un sistema de cómputo el tratamiento de la información se dé con suma rapidez crea las condiciones para que puedan ser vulnerados derechos fundamentales como el de la intimidad el honor etc

Para poder utilizar adecuadamente el derecho de información se tiene el deber de controlarlo estableciendo los límites dentro de los cuales deben desarrollarse las actividades de recolección tratamiento o almacenamiento de datos personales especialmente los hechos por medios informáticos

El instrumento que se utiliza para proteger los datos personales de los ciudadanos y el derecho de acceso a información pública o libre frente al uso masivo de la información se conoce con el nombre de Habeas Data. Surge de esta forma la pregunta que en un conjunto constituye el problema de la investigación ¿Es la acción de Habeas Data un mecanismo eficaz de protección del derecho a la intimidad y a la libertad de información?

1.3 Justificación de la Investigación

Debido al desarrollo de las tecnologías de la información se ha producido una revolución que afecta todos los sectores de la sociedad. El intercambio fácil, masivo e ilimitado de la información produce múltiples efectos, pero para nuestro estudio nos basaremos en dos: la posibilidad de que la información confidencial o personal pueda ser accedida por terceros con facilidad afectando la intimidad y privacidad de su titular, y la obligación del Estado de poner a disposición de todos la información de carácter público ya sea a través del internet o de otros medios de comunicación, permitiendo el acceso a las bases de datos públicos sin obstáculos, siendo esta una herramienta poderosa para combatir la corrupción a través de la transparencia pública.

Este nuevo modelo de sociedad implica riesgos especialmente al derecho de intimidad y la privacidad. Esto ha hecho que se desarrolle lo que se conoce como el derecho a la autodeterminación informativa, o tutela de datos, que es la facultad de toda persona para ejercer el control sobre la información personal que le concierne.

Nuestra investigación es conveniente ya que con la acción de Habeas Data los particulares se benefician en el sentido de que se les respeta sus derechos humanos a la intimidad se les protege de los abusos excesos y arbitrariedades que con el mal uso de la información puedan lesionar los derechos de la personalidad como otros derechos constitucionales motivados por una información tergiversada, falsa o discriminatoria que conste en un banco de datos

1 4 Alcances y Limites del Problema

1 4 1 Alcances

El estudio y razonamiento jurídico a realizar se ubicará principalmente dentro del nuevo contexto que establece la Constitución Política de la República de Panamá, y configurado por la Ley N° 6 de 22 de enero de 2002 por la cual se regula en nuestro ordenamiento jurídico de la acción de Habeas Data

El alcance de esta acción vincula a toda la población nacional y a todas aquellas personas que mantengan algún tipo de información personal o confidencial de cualquier índole así como el derecho de acceso a los bancos de datos o registros oficiales que contengan información pública de acceso libre

1 4 2 Limites

La presente investigación está limitada a la Constitución Política de la República de Panamá (Artículo 44) y a la Ley N° 6 de 22 de enero de 2002 la cual establece las normas por las cuales se regula la acción de Habeas Data

1 5 Objetivos Generales y Específicos

1 5 1 Objetivos Generales

- I Determinar si la acción de Habeas Data constituye un mecanismo eficaz de la protección del derecho a la intimidad y la libertad de información
- II Confeccionar una propuesta con alternativas de mejoras que contribuyan a hacer más eficaz el procedimiento utilizado dentro de la acción de Habeas Data, como instrumento de protección del derecho a la intimidad y la libertad de información

1 5 2 Objetivos Específicos

- I Aplicar instrumentos que permitan obtener información referente a la acción de Habeas Data frente al derecho de acceso a la información y el derecho a la intimidad
- II Valorar la eficacia de la acción de Habeas Data mediante el análisis de la información obtenida
- III Analizar el régimen constitucional legal y jurisprudencial sobre la acción de Habeas Data

1 6 Hipótesis

Nuestra hipótesis para este trabajo es La acción de Habeas Data es un mecanismo eficaz de protección del derecho a la intimidad y la libertad de información

CAPITULO SEGUNDO

MARCO TEÓRICO

2 MARCO DE REFERENCIA

2 1 Consideraciones Previas

2 1 1 Derecho a la Información

En la actualidad la información ocupa un lugar preponderante y vanguardista debido al auge y desarrollo de la actividad informática, producto de la proliferación del uso del computador. La información se convierte así en un derecho de doble aspecto: informar y ser informado. En ese sentido el autor Vittorio Frosini en su obra *Informática y Derecho* manifiesta lo siguiente:

El derecho a la información se presenta hoy como un derecho típico de la sociedad tecnológica, cuyo sistema nervioso está constituido por los medios de comunicación de masas en su doble aspecto de derecho a informar y a ser informado. Este aspecto dual del derecho adquirió su importante significado porque la comunicación humana ha alcanzado su cuarta fase de desarrollo que dio origen al sector cuaternario de la economía: el sector de la información que se añade a los tres anteriores (agricultura, industria y servicios) (FROSINI VITTORINO 1998 pag)

De la dualidad del derecho a la información: informar y ser informado, surgen inconvenientes para la sociedad y sus congregados: la difusión mal intencionada, atentar contra el honor y honra del ser humano, la falsa información, la información no autorizada, entre otros. Se cuenta dentro de los inconvenientes que enfrentan la sociedad en relación con el derecho de información.

La regulación del factor información para establecer adecuadamente sus límites y alcances a través de preceptos constitucionales, penales y de derechos humanos (derecho

a la intimidad honor imagen) principalmente para hacerle frente a los avatares de la prensa o periódicos y medios de información en general no es el objeto del actual análisis

Nuestro estudio se concentra en analizar el tratamiento que se le da a la información privada y publica, mediante el almacenamiento de datos en bancos de datos automatizados y los inconvenientes que ello genera por el uso abusivo de la informática

El hecho de que en su sistema de computo el tratamiento de la información a través de la memorización almacenamiento control cotejo e intercambio de datos personales se dé con suma rapidez crea las condiciones para que puedan ser vulnerados derechos fundamentales tales como el derecho a la intimidad al honor a la imagen etc

Así a fin de canalizar adecuadamente el derecho de información surge paulatina y gradualmente otro elemento el deber de controlarlo estableciendo los límites dentro de los cuales deben desarrollarse las actividades de recolección tratamiento o almacenamiento de datos personales especialmente aquellas llevadas a cabo por medios informáticos

En Panamá, la Ley N° 6 de 22 de enero de 2002 reconoce este derecho en el numeral 2 del artículo 1 al establecer que este consiste en Aquel que tiene cualquier persona de obtener información sobre asuntos en trámite en curso en archivos en

expedientes documentos registros decisión administrativa o constancias de cualquier naturaleza en poder de las instituciones incluidas en la presente Ley

De esta disposición resaltan tres aspectos importantes que se derivan del derecho de libertad de información los que tienen que ver con a) lo puede aducir cualquier persona ya sea esta, por tanto natural o jurídica, nacional o extranjera b) el ejercicio del mismo permitirá recabar o requerir información ya sea de casos en trámite o curso o cuando está ya este en archivos documentos decisiones administrativas o en constancias de cualquier naturaleza,) y se podrá ejercer con respecto a la información que este en poder o custodia de las instituciones incluidas o las que se refiere a la Ley 6 de 2002

Se entiende por información según el artículo 1 numeral 4 de la ley citada todo tipo de datos contenidos en cualquier medio documento o registro impreso óptico electrónico químico físico o biológico

De lo anterior se reconoce el derecho de acceso a la información cuyo ejercicio va a permitir el poder acceder y por tanto conocer y que se le suministre a toda persona aquella información que haya solicitado o requerido

La Ley 6 de 2002 establece el derecho mencionado y distingue los tipos de información a las que se podrá acceder así como la que tendrá el acceso restringido

A continuacion presentamos un breve análisis de los tipos de información de la que trata la Ley N° 6 de 22 de enero de 2002

2.1.1.1 Información de Acceso Libre

El numeral 6 del artículo 1 de la Ley N° 22 de enero de 2002 dispone que por información de acceso libre se entiende Todo tipo de información en manos de agentes del Estado o de cualquier institución pública que no tenga restricción

De lo anterior observamos que la información así entendida será aquella que estando en manos o en poder de agentes del Estado o que cualquier institución pública va a condición de ser acceso público salvo que se trate de información que presente restricciones para su acceso

Distintas son las particularidades o características que a este tipo de información respecta y que consiste en las siguientes

En la información de carácter público o de acceso libre impera el principio de publicidad el cual está reconocido en la Ley 6 de 2002 cuando dispone en el numeral 11 del artículo 1 que ‘toda información que emana de la administración pública es de carácter público Al ser una información en la que va a prevalecer este principio traerá como resultado el que siendo esta la regla se ha de entender que excepcionalmente se podrá negar el acceso a la información que habiendo emanado del Estado y estando en su

custodia, no es de acceso libre por mas que este en manos del Estado o de algunas de sus instituciones aunque hay que entender que este caso ha de ser la excepción

Por ser información de acceso libre y de carácter publico toda persona tiene derecho a solicitarla, sin que tenga que justificar o motivar su requerimiento Esta particularidad la regula así el artículo 2 de la Ley 6 de 2002 cuando deja establecido que 'toda persona tiene derecho a solicitar sin necesidad de sustentar justificación o motivación alguna

El requerimiento o solicitud de esta informacion se formulara o se hará por escrito en papel simple o por medio de correo electronico en este ultimo caso cuando la institucion correspondiente disponga del mismo mecanismo para responderlo aspectos que hace alusión el artículo 5 de la Ley 6 de 2002

El escrito en el que se haga la solicitud de la información no estará sometido a requisitos de formalidades de procedibilidad es decir para que se le de tramite por la institucion a la que se le requiera la misma El artículo 5 de la Ley en mención señala en cuanto a este aspecto que el escrito a petición de la información se formulara sin formalidad alguna lo que significa que no estará condicionado a que se cumpla con formalidades generales ni especificas para que se atienda su petición Lo unico que exige la Ley 6 de 2002 en su artículo 6 es que en estas peticiones se determine el nombre del solicitante su numero de cédula de identidad personal que consigne su dirección

personal o de su oficina y número de teléfono donde pueda ser localizado y en cuanto a si se trata de una persona jurídica la que hace la solicitud se deberá detallar los datos de inscripción y los datos personales de su representante legal

La información solicitada deberá ser suministrada por el funcionario obligado a ello en treinta días calendarios los que comenzaron a correr a partir de la fecha de la presentación de la solicitud aspecto este al que se refiere el artículo 7 de la Ley 6 de 2002 De igual forma que esté ante la petición de una información de manejo complejo o extenso se deberá hacer saber por escrito de esta situación a la persona que formuló dicha solicitud pudiendo así el funcionario de que se trate y en este caso en específico extender el término para recopilar la información solicitada el cual no podrá exceder de treinta días calendarios adicionales La necesidad de extender el término original se deberá notificar dentro de los primeros treinta días en que se presentó la solicitud de la información

Otro aspecto relevante tiene que ver con la obligación que va a existir por parte del funcionario a quien requiere una información no es custodio o no la posee En este supuesto dispone el artículo 7 ya citado que así lo deberá informar y si el funcionario tiene conocimiento de que otra institución tiene o pueda tener en su poder dichos documentos o documentos similares estará obligado a indicárselo al solicitante

Por ultimo otros aspectos que tienen que ver con la información de acceso libre se refieren a la constancia de su entrega y lo que tiene que ver en el supuesto que la misma ya este disponible. A uno y otro aspecto tratan los párrafos finales del artículo 7 de la Ley 6 de 2002. Así y en cuanto a lo primero se señala que se debiera prever de un mecanismo claro y simple de constancia de la entrega efectiva de la información al solicitante información que puede ser suministrada a través de correo electrónico cuando se disponga de tal facilidad lo que dependera que la solicitud se hubiere efectuado por medio de esta vía.

En relacion a lo segundo se dispone que cuando la informacion solicitada 'ya este disponible al publico en medios impresos tales como libros compendios tripticos archivos publicos de la administración así como tambien en formatos electronicos disponibles en internet o en cualquier otro medio se le hará saber a la persona que la solicito la fuente el lugar y la forma en que puede tener acceso a dicha informacion previamente publicada.

2.1.1.2 Información de Carácter Personal o Confidencial

No toda información en poder del Estado va a ser de acceso libre y por tanto no toda persona podrá reclamar derecho a ella lo que constituye como anotamos la excepcion de la regla. Uno de estos supuestos se producirá cuando se este ante informacion de tipo personal la que es calificada como de carácter confidencial y ello porque su acceso va a estar condicionado y si se quiere limitado. Dicho de otro modo

cuando de información personal se trate su acceso solo estará permitido a la persona titular de dicha información y excepcionalmente a ciertos funcionarios por razón de sus funciones

El profesor Rigoberto Gonzalez Montenegro nos dice que

La confidencialidad en el manejo y custodia de esta información va en función del derecho que estará implicado cuando de datos o información personal se trate siendo éste para algunos el derecho a la intimidad aunque existen posiciones doctrinales que con relación a este tema aducen el reconocimiento de un nuevo derecho consistente en el derecho a la autodeterminación informativa (GONZALEZ 2004 Pág)

Esta clase de información aparece regulada en el numeral 5 del artículo 1 de la Ley 6 de 2002 en donde se deja establecido lo que según este texto legal debe ser considerado como información confidencial

Todo tipo de información en manos de agentes del Estado o de cualquier institución pública que tenga relevancia con respecto a los datos médicos y psicológicos de las personas la vida íntima de los particulares incluyendo sus asuntos familiares actividades maritales y orientación sexual su historial penal y policivo su correspondencia y conversaciones telefónicas o aquellas mantenidas por cualquier otro medio audiovisual o electrónico así como la información pertinente a los menores de edad Para efectos de esta Ley también se considera como confidencial la información contenida en los registros individuales o expedientes de personal o de recurso humano de los funcionarios

La información así considerada o calificada de confidencial tiene que ver con lo que en la doctrina se conoce como datos sensibles por lo que éstos representan o

significan para la persona con respecto a la cual se les ha recabado que debe quedar su conocimiento ajeno al público

Existen particularidades o características en relación a la información calificada de confidencial la que versa sobre información o datos personales de una persona en concreto y que permiten identificarla como tal y que requiere ser aislada del conocimiento público entre las cuales tenemos

Uno de los aspectos de mayor significado lo constituyen sin lugar a dudas el derecho de acceso que se tiene a la información o dato personal y ello porque el titular de tal información o dato es la persona con respecto a cuya información o dato personal se ha recabado no interesa quien tenga en su poder lo que se solicita o requiere ya sea que esta haya sido recabada o que haya sido suministrada voluntariamente por la propia persona puesto que se trata del derecho de acceso que se va a tener con relación a la información o dato personal de la persona que reclama su conocimiento

La Ley 6 de 22 de enero de 2002 reconoce este derecho cuando en su artículo 3 dispone que

Artículo 3 Toda persona tiene derecho a obtener su información personal contenida en archivo registros o expedientes que mantengan las instituciones del Estado y a corregir o eliminar información que sea incorrecta, irrelevante incompleta o desfasada, a través de los mecanismos pertinentes

Del artículo citado se colige el derecho que se le reconoce a toda persona de tener acceso a su información personal ya sea que ésta, este o se encuentre en archivo registros o expedientes en poder o posesión de las instituciones del Estado

A esta información o dato personal o que se tenga conocimiento de que ésta ha sido recabada y se encuentra en archivo registros o expedientes de entidades estatales tendrá derecho a su acceso es decir el titular de la información o dato personal tendrá derecho a su acceso sin importar que este en poder del Estado puesto que esta no pierde por ello su condición de información o dato personal

La información o dato que atañe a la persona en particular su rasgo distintivo ha de ser precisamente su no divulgación y desconocimiento público a objeto de preservar el derecho a la intimidad de la persona de cuya información o dato personal se trata

La Ley 6 del 22 de enero de 2002 en su artículo 13 dispone que

Artículo 13 La información definida por la presente Ley como confidencial no podrá ser divulgada, bajo ninguna circunstancias por agentes del Estado En el caso de que la información de carácter confidencial sea parte de procesos judiciales las autoridades competentes tomarán las provisiones debidas para que dicha información se mantenga reservada y tengan acceso a ella únicamente las partes involucradas en el proceso judicial respectivo

La norma establece que por ser información o por tratarse de un dato personal cuyo conocimiento en un caso u otro no debe estar expuesto a ser de conocimiento

publico es por lo que al calificarsele de confidencial dicha información o dato personal no deba ser divulgada y el hecho de haber sido recabada por funcionarios del Estado o se le haya suministrado a instituciones estatales no va a implicar que tal informacion o dato personal pueda ser divulgada por quienes la posean o la tengan en su poder máxime si está se ha recabado o suministrado para una finalidad en concreto El principio que impera en el manejo de esta informacion es el de la confidencialidad o privacidad de la misma

Otro aspecto importante con respecto a este tipo de informacion es lo que establece el articulo 3 de la Ley N 6 de 2002 ya que esta disposicion además del derecho de acceso a la informacion o dato personal se preve que al tener conocimiento u obtenida esta se podrá solicitar se corrija o elimine la informacion personal en aquellos casos en los que esta sea incorrecta, irrelevante incompleta o desfasada lo que se podrá requerir a través de los mecanismos pertinentes como concluye señalando el articulo citado

2 1 1 3 Información de Acceso Restringido

La Ley N 6 de 2002 en el articulo 1 numeral 7 deja previsto que se entiende por este tipo de información Al disponer lo siguiente

Articulo 1 Para efectos de la aplicación e interpretación de esta Ley los siguientes términos se definen así

1

7 Informacion de acceso restringido Todo tipo de informacion en manos de agentes del Estado o de cualquier institución publica,

cuya divulgación haya sido circunscrita únicamente a los funcionarios que la deban conocer en razón de sus atribuciones de acuerdo con la Ley

De lo transcrito resaltan aspectos que van a tratar de este tipo de información de acceso restringido

- Está en manos o poder de agentes del Estado o de cualquier institución pública
- El conocimiento acceso o divulgación de esta quedará circunscrita o restringida solo a estos funcionarios
- Estará condicionado todo esto a lo que disponga en la Ley lo que significa que tanto lo que ha de considerarse información restringida como quien o quienes tendrán acceso a la misma y que ha de considerarse como tal deberá hacerse de acuerdo con la Ley lo que elimina la posibilidad que se pueda calificar cualquier información como acceso restringido Impera en estos casos el principio de legalidad al ser la ley en la que se deja señalado la información que puede ser calificada como de acceso restringido

En conclusión la información de acceso restringido va a ser aquella cuyo acceso estará limitado en principio sólo a los funcionarios que por razón de las funciones que le han sido atribuidas están en poder de la misma y que le compete a la ley fijar su condición de tal quedando su divulgación o conocimiento circunscrita a los funcionarios correspondientes

Lo atinente a la información de acceso restringido se hace en el artículo 14 el que da cuenta del tiempo durante el cual no se podrá divulgar este tipo de información el supuesto en el que ello sí podrá ser factible los casos de la información que se ha de considerar como de acceso restringido entre otros aspectos a los que pasamos a referirnos

Se dispone en el precepto legal en mención que la información definida por esta Ley como de acceso restringido no se podrá divulgar por un periodo de diez años los que de acuerdo a lo que se establece en el artículo en cita comenzarán a contarse a partir de su calificación como tal

Sí bien la información calificada como de acceso restringido va a tener como resultado el que su divulgación y conocimiento quede limitado o circunscrito únicamente a los funcionarios que la deban conocer o acceder en función de sus atribuciones dicha restricción será temporal en la medida en que tal impedimento se fija por un periodo de diez años Pasado este tiempo se entiende que lo que se quería mantener en secreto deberá ponerse a disposición o del conocimiento público

Lo importante en todo caso es que como rasgo distintivo de la información de acceso restringido además del secreto con que debe mantenerse la información de acceso restringido es que ello va a ser temporal al fijarle la ley el periodo durante el cual tendrá la condición de tal el que superado se podrá acceder a la misma entendiéndose en este

caso que por cualquier persona. Lo que durante el tiempo de su restricción estaba vedado su conocimiento público transcurrido este ya no se podrá limitar o impedir su acceso por parte de quien así la requiera.

La Ley N° 6 de 22 de enero de 2002 en su artículo 14 se deja establecido además que

En caso de que las autoridades correspondientes consideren que deba continuarse el carácter de restringido de la información detallada en este artículo corresponderá a los Órganos Ejecutivo, Legislativo o Judicial según sea el caso emitir Resoluciones por las cuales se prorrogará hasta por un máximo de diez años adicionales la restricción sobre la información mencionada en este artículo. En ningún caso el carácter de restringido podrá superar los veinte años contados a partir de la primera clasificación.

Por la naturaleza de la información de que se trata, va a ser posible al permitirlo así la propia Ley que el período de restricción en cuanto al acceso a ésta se amplíe lo que se podrá hacer por diez años más. Se ha de entender que la motivación en extender el período de restricción no ha de ser el simple interés y deseo de la autoridad de mantener en secreto el conocimiento de lo que en un momento determinado existieron razones suficientes para calificar como información de acceso restringido ya que de lo contrario operaría lo que en el citado precepto se preve y a lo que se aludirá en su oportunidad.

Las razones para ampliar el lapso original a diez años más deberán quedar plasmadas o consignadas por parte de quien adopte tal medida lo que debe hacerse en

una resolución que corresponderá emitirla a los Órganos Ejecutivo Legislativo o Judicial segun sea el caso como se deja previsto en el articulo en mención

Lo importante es que aun cuando se extienda el termino original éste no podra sobrepasar los veinte anos contados a partir de la primera clasificacion

2 1 2 Derecho a la Intimidad o Privacidad

El derecho a la intimidad o privacidad no constituye un nuevo derecho o instituto juridico por el contrario existe y fue regulado desde la época del Derecho Romano en donde se protegia el honor y la violación al domicilio conceptos que posteriormente fueron heredados por legislaciones que han seguido la concepción juridico romana como la nuestra

A juicio del profesor panameño EDGARDO VILLALOBOS en su obra Introduccion a la Informática el derecho a la intimidad adquiere realmente importancia cuando es objeto de abuso y desconocimiento lo cual hizo necesario que las naciones pensaran en protegerlo juridicamente Un antecedente de esta realidad nos las explica este autor en los siguientes terminos

Segun los tratadistas la llamada de advertencia sobre la violación de la intimidad se inició con el conflicto Derecho a informar Vs Derecho a la Privacidad como resultado del articulo The Right to Privacy de Samuel Warren y Luis Brandeis en 1890 publicado en la revista Harvard Law Review en Boston En el era negado el derecho a difundir noticias sobre la vida privada de una persona para informar a los lectores El articulo nació por los inconvenientes personales que la prensa le producía a Brandeis al

relatar con referencias personales y detalles de poco gusto de sus fiestas familiares rebosando la tolerancia con los comentarios hechos sobre la boda de su hija. Lo novedoso de este artículo es que separó el concepto de intimidad de la propiedad, lo convierte en un derecho autónomo. Los conceptos de *The Right to Privacy*, *the right to be alone*, *diritto alla riservatezza* o el derecho de ser dejado en paz entran en el acervo jurídico.

Esta concepción nueva del derecho a la privacidad hizo que se elevara a categoría constitucional la protección de estos derechos. Así, las constituciones y las leyes recogieron esta protección. Nuestra Constitución no fue a menos, también recogió la protección a la intimidad. (VILLALOBOS 1997 Págs 117-118)

Cabe señalar que el derecho a la intimidad llega a alcanzar en diversas legislaciones, incluyendo la nuestra, importantes penales y civiles, entendiéndose como tales los delitos contra el honor y la sanción pecuniaria e indemnización por los daños morales ocasionados.

Ahora bien, entrando en materia de definiciones, LUIS MANUEL MEJAN conceptúa la intimidad de la siguiente forma:

El conjunto de circunstancias, cosas, experiencias, sentimientos y conductas que un ser humano desea mantener reservado para sí mismo, con libertad de decidir a quien le da acceso al mismo, según la finalidad que persiga, que impone a todos los demás la obligación de respetar y que solo puede ser obligado a develar en casos justificados cuando la finalidad perseguida por la revelación sea lícita. (MEJAN 1994 Pág. 15)

Algunos autores prefieren advertir la diferencia que existe entre los conceptos intimidad y privacidad, tal es el caso de la autora Pilar Gómez Pavón, quien sostiene lo siguiente:

Estos dos aspectos se manifiestan y pueden ser vulnerados de diferentes maneras. El primero, vida privada, sería el derecho de todo ser humano a disponer de momento de soledad, recogimiento y quietud. Eso es indispensable para el pleno desarrollo, para su paz interna, para su descanso y para su creatividad artística e intelectual. El otro aspecto, intimidad, hace relación al derecho de exclusión. Mientras que al primero se le ataca mediante ruidos, hostigamiento, etc., al segundo por observación directa, o cualquier otro método para conseguir la información de manera irregular (GÓMEZ PAVÓN 1989, Pág. 12).

Independientemente de esta confrontación doctrinal traída a discusión por la Dra. Pavón, la misma no tiene relevancia frente al hecho de que la privacidad y la intimidad se le considera tanto en la doctrina como en la legislación como un derecho de rango constitucional, es decir, el derecho que tiene toda persona a que sea respetada su vida privada y familiar, el derecho a no ser objetos de injerencias, atisbo u hostigamiento en la vida íntima. En lo que respecta a nuestro país, abordaremos este tema más adelante.

Para el autor argentino OSCAR PUCCINELLI, El Habeas Data en Iberoamérica, la protección de datos personales es una mutación evolutiva del derecho de privacidad, advirtiendo que la protección de datos personales no se circunscribe o limita solamente a este derecho de privacidad. El autor agrega que

La mayoría de los autores coinciden aunque sin decirlo así, en que el derecho a la protección de datos personales es una suerte de mutación evolutiva del derecho a la privacidad, que hoy no se agota en ella, pues cumple una función tutelar de este y de muchos otros derechos no comprendidos en su concepto, y que si se admitiese su limitación a la privacidad, no se podría proteger adecuadamente los datos relativos a las personas jurídicas.

A nuestro criterio el derecho de protección de datos personales así como el instrumento jurídico creado para ejercerlo llamado Habeas Data, que veremos más adelante recogen básicamente el derecho a la intimidad

Está claro en la doctrina que es objeto de discusión Algunos autores como Pablo Lucas Murillo diferencia el derecho de protección de datos del derecho a la intimidad argumentando entre otras cosas que los datos que se protegen no tienen por qué ser íntimos siendo suficiente con que se trate de datos personales aunque sean inocuos Así este autor prefiere hablar de el derecho a la autodeterminación informativa (Informática y protección de datos personales Madrid Centro de Estudios Constitucionales 1993 obra citada por PUCCINELLI pág 82)

Por otro lado aun cuando la protección de datos personales recoge el derecho de intimidad o privacidad no se agota totalmente en este derecho ya que encontramos otros derechos que igualmente resultan protegidos como es el caso del derecho a la no discriminación por sexo raza, credo etc que también tienen fundamento constitucional

2 1 3 Derecho a la Protección de Datos

El derecho a la protección de datos es relativamente de reciente consagración y existe consenso general en la doctrina al ubicarlo dentro del conjunto de los derechos de tercera generación Por supuesto que en una materia cuya regulación es de reciente data, tanto en Europa como en América, resulta natural que la doctrina discrepe en algunos

aspectos. Es entendible que eso ocurra en una materia en la que no todo está dicho ni escrito y que por su constante evolución y adecuación debido a las realidades experimentadas por el mundo actual esclavo de los avances tecnológicos y científicos exige que los estudiosos del tema cuestionen, formulen y reformulen sus propias afirmaciones o teorías así como las ajenas.

Así por ejemplo hoy día se discute si las expresiones derecho de protección de datos a la protección de datos significan lo mismo. Para OSCAR PUCCINELLI el autor latinoamericano que mejor y más profundamente ha estudiado esta materia en los últimos años y al que haremos referencia especialmente en lo relacionado al derecho comparado existe una diferencia entre esos conceptos. En tal sentido manifiesta lo siguiente:

Denominaremos provisoriamente y con fines didácticos derecho de la protección de datos al conjunto de normas y principios que destinados o no a tal fin y con independencia de su fuente son utilizados para la tutela de los diversos derechos de las personas individuales o jurídicas que pudieran verse afectados por el tratamiento de datos nominativos. Excede así por propia definición el estrecho marco del derecho informático que se limitaría a regular aspectos vinculados a la tecnología informática.

Por otro lado entendemos por derecho a la protección de datos (Data protection en inglés, Datenschutz en alemán) la facultad conferida a las personas para actuar per se y para exigir la actuación del Estado a fin de tutelar los derechos que pudieran verse afectados por virtud del acceso, registro o transmisión a terceros de los datos nominativos a ella transferidos. Y adoptaremos esta denominación genérica que como veremos tendrá sus especificaciones por haber sido así bautizado en las normas internacionales sobre la materia a fin de unificar las distintas fórmulas utilizadas para denominarlo (libertad informática, derecho a la autodeterminación informativa o

informatica, informacion control habeas data etc)
(PUCCINELLI Pag 65)

Aun cuando el citado autor explica la diferencia que existe a su juicio entre derecho de la proteccion de datos y derecho a la proteccion de datos otros autores para referirse a la misma materia utilizan expresiones como libertad informatica, derecho a la autodeterminacion informativa o informatica informacion control habeas data etc

Al margen de las diferencias conceptuales existentes en la doctrina sobre la denominación de la materia, lo importante es tener claro el significado de este derecho El derecho a la protección de datos es la facultad que tiene toda persona, en la eventualidad que pueda verse afectada por virtud del acceso registro o transmisión por terceros de los datos a ella referidos de exigir del Estado la tutela jurisdiccional respectiva, ya sea para que se modifique extinga, rectifique o actualice la informacion de indole personal

De las anotaciones anteriores podriamos tambien colegir que lo perseguido por el derecho a la protección de datos es la tutela de datos entendiéndose por tales aquellos elementos circunscritos o aislados que hacen referencia a una persona y la tutela de la información que surge al unir o entrelazar estos datos o elementos Tutela que por demas debe hacerse frente a ciertas actividades de acceso registro tratamiento transferencia, etc que en la mayoría de los casos resulta no autorizada u obtenida de manera ilegítima

Este derecho a la protección de datos adquiere vigencia frente a cualquiera que realice las actividades ya señaladas de acceso registro tratamiento transferencia, etc cuando los datos o la información personal pueda trascender a terceros Así encontramos normas generales o específicas de rango constitucional o legal que regulan el tratamiento de datos y han establecido ciertas reglas para la recolección de la información

En esa tarea hemos podido observar que el instrumento o medio de defensa tutelador de Derecho a la Protección de datos más empleado y regulado en la mayoría de las naciones es el Habeas Data Por ello se hace necesario por no decir obligante poner especial interés en el análisis de este instituto porque constituye hasta la fecha, la principal y en muchos países la única herramienta o mecanismo de defensa que tienen las personas para ejercer su derecho a la protección de sus datos personales frente a los adelantos y desarrollo de la informática

2 1 3 1 Concepto

El derecho a la protección de datos es la facultad conferida a las personas para actuar per sé para exigir la actuación del Estado a fin de tutelar los derechos que pudieren verse afectados por virtud del acceso registro o transmisión a terceros de los datos nominativos a ella referido

Las leyes de protección de datos personales tienen como fin y objetivo reconocerle el derecho al individuo para que pueda ejercer una acción para conocer el

dato de carácter personal que se guarde y si esa información fuese errónea tiene el derecho a su rectificación para protegerse de esa nueva forma de violación a la intimidad

Así también ha quedado plasmado en nuestra Constitución Nacional al ser incluido la protección de datos mediante el Acto Legislativo N° 1 de 27 de julio de 2004 cuyos artículos nos permitimos citar

Artículo 42 Toda persona tiene derecho a acceder a la información personal contenida en base de datos o registros públicos y privados y a requerir su rectificación y protección así como su supresión de conformidad con lo previsto en la Ley

Esta información solo podrá ser recogida para fines específicos mediante consentimiento de su titular o por disposición de autoridad competente con fundamento en lo previsto en la Ley

Artículo 43 Toda persona tiene derecho a solicitar información de acceso público o de interés colectivo que repose en bases de datos o registros a cargo de servidores públicos o de personas privadas que presten servicios públicos siempre que ese acceso no haya sido limitado por disposición escrita y por mandato de la Ley así como para exigir su tratamiento leal y rectificación

2.1.3.2 Naturaleza Jurídica

El derecho a la protección de datos encuentra su fundamento en la necesidad de tutelar bienes jurídicos que pueden verse afectados por el tratamiento de datos nominativos mediante una regulación con pautas propias que exceden del marco de

aquellos derechos a los que pretenden proteger. Por ello se entiende que es un derecho de carácter instrumental y autónomo.

Es de carácter instrumental porque sirve de medio para la tutela de los derechos implicados, pero no pierde la categoría de derecho, pues no alcanza a reunir las notas típicas de la moderna concepción de las garantías.

Nuestra Constitución la considera un derecho tal como quedó expuesto en los artículos 42 y 43 al considerarse que toda persona tiene derecho a acceder a la información personal y a solicitar información de acceso público o de interés colectivo contenida en base de datos o registros públicos o privados que presten servicios públicos para requerir su rectificación y protección así como su supresión.

2.1.3.3 Bienes Jurídicos Tutelados

Según PUCCINELLI (1999, pág. 72) sin perjuicio de que existen otros bienes que podrían verse lesionados a partir del tratamiento de datos nominativos, los bienes jurídicos usualmente mencionados al abordar esta problemática son:

- Los principios, valores, dignidad, libertad e igualdad.
- El derecho de propiedad. El dato constituye un elemento de la identidad de la persona, por lo que es de su propiedad en el sentido de que tendría ciertos derechos sobre su uso.
- El derecho a la identidad. El dato es un elemento de la identidad de la persona que en conjunto con otros datos sirve para identificarla, por lo que este

derecho se ubica dentro del de propiedad. En ese sentido, la persona tiene derechos sobre el uso de su identidad porque sus señales particulares, relaciones de propiedad y familia, etc., todos son aspectos de personalidad equivalentes a una huella digital que no debe ser desvirtuada por la elaboración de perfiles de datos que crearían una especie de persona virtual cuya imagen permitiría perjudicar a la persona real.

- El derecho a la privacidad o intimidad. La categoría de protección de datos ha surgido para aplicarse a nuevas realidades jurídicas que solo parcialmente pueden ser descritas a través de la noción de intimidad o sea, esta solapado con una parte importante del derecho individual a la intimidad.

Como anota PUCCINELLI, la intimidad no agota el contenido del derecho a la protección de datos, pues las normas adjetivas de defensa de los datos personales, como el habeas data, son ajenas al derecho a la intimidad en sí, así como a su defensa.

2.1.3.4 Objeto

El derecho a la protección de datos tiene como objetivo tutelar un conjunto de bienes jurídicos que son específicamente atacados por las actividades de recolección, tratamiento y transmisión de los datos nominativos. Tales bienes son tutelados mediante una serie de principios, derechos y garantías que suelen establecerse en normas específicas que lo regulan.

2 1 3 5 Contenido

La protección de datos No se les protege per se se tutelan datos entendiendolos como elementos circunscritos y aislados (v gr nombre o nacionalidad) aunque en realidad lo que se protege es la información que pudiera surgir de la relación existente entre los datos almacenados

Se protege también el registro de ciertos datos para evitar que los mismos sean almacenados en sitios donde puedan luego ser tomados por terceros distintos del registrador o que se mantengan registrados de manera incorrecta o que haya un tratamiento ilegítimo de los datos registrados es decir se busca que los datos se mantengan tal como se encuentran registrados y no sean interconectados con otros o sometidos a operaciones de transformación que lleven a la configuración de perfiles virtuales de la persona, sin que exista causa justificada

Finalmente se protege la transferencia no autorizada de los datos es decir que los datos no sean proporcionados a terceros sin autorización expresa del interesado o por mandato legal

2 1 4 Derecho Informático

2 1 4 1 Concepto

El derecho informatico es definido como

un conjunto de normas y principios que tienen por objeto regular definir interpretar y estudiar los aspectos en que la

tecnología informática se relaciona con las distintas instituciones jurídicas (LUZ CLARA 1990 Pag 30)

Esta rama del derecho es la encargada de regular las actividades que se llevan a cabo por medio de la informática con miras a la no violación de la información que en ella se maneja, evitando la infiltración de terceros. Contrarresta aquellas actuaciones que afectan o pueden conculcar los derechos fundamentales consagrados en diversas leyes, reglamentos, decretos inherentes a la tutela de los individuos que forman parte de un Estado de Derecho.

Con el Derecho Informático se busca la protección de las relaciones que se efectúan por medio de la red informática, regulando las relaciones entre la tecnología y la información integrándola en aquellas actividades progresivas que envuelven las relaciones patrimoniales, la prevención y sanción de conductas que afectan bienes jurídicamente tutelados, celebración de contratos informáticos, el habeas data, entre otras.

2.1.4.2 Naturaleza Jurídica

El Derecho Informático posee naturaleza mixta al regular normas jurídicas de Derecho Público y de Derecho Privado.

Se dice que el derecho bajo estudio es una rama del Derecho Público porque regula los datos informatizados de carácter internacional (Derecho Internacional), igualmente la libertad informática y defensas de libertades individuales frente a posibles

agresiones de aquellos que conocen y utilizan la tecnología con fines delictivos (Derecho Constitucional) y cuando ataque aspectos de la delincuencia informática fraudes electrónicos (Derecho Penal)

Actúa como rama del Derecho Privado al regular aspectos de la contratación informática (Derecho Civil) comercio electrónico (Derecho Comercial) igualmente cuando el notario da fe de los actos que se realizan a través de la red informática (Derecho Registral o Notarial)

2.1.4.3 Características

El Derecho Informático posee características propias que lo definen como las siguientes

- La informática constituye el objeto inmediato y la información su objeto mediato
- Su naturaleza es mixta ya que atendiendo a las relaciones que se llevan a cabo puede provenir como rama del Derecho Público o Privado
- Considerado como un cuerpo coherente capaz de responder adecuadamente a los problemas de la informática
- Proporciona estabilidad al aprovechar las nuevas tecnologías que incluye la informática logrando las condiciones imprescindibles de control seguridad eficiencia y justicia, que exige la sociedad como factor primordial de las interacciones económicas sociales y políticas

- Aborda los contratos informáticos la protección legal del software los delitos que se cometan utilizando la informática, el comercio electrónico entre otros
- Su objeto es el análisis de la normatividad jurídica que regula los bienes informáticos
- No permanece estático pues conforme avanza la informática, igual actualiza sus normas estableciendo una unidad de reciproca tecnología y conocimiento

2 1 4 4 Autonomía

Hay autores que aun debaten si el Derecho Informático constituye o no una rama autónoma del Derecho

Hay elementos que nos permiten afirmar que el Derecho que nos ocupa es autónomo pues requiere de

- **Autonomía Legislativa** Se refiere a la sanción de leyes por la Asamblea de Diputados que acredita la regulación del Derecho Informático en base a leyes y decretos que se relacionan a la misma los artículos 203 del Código de Comercio el 1 de la Ley 43 de 31 de julio de 2001 7 de la Ley 23 de 1 de junio de 2001 y el 2 de la Ley 11 de 22 de enero de 1998
- **Autonomía Académica o Didáctica** Se establece que para que un derecho sea autónomo deben existir asignaturas propias congresos seminarios que tengan como base el Derecho Informático Observamos en consecuencia, que

en diversas universidades del país se dicta el curso de Informática Jurídica o Derecho Informático que da a conocer sus diversas aplicaciones

- **Autonomía Judicial Jurisprudencial** Conlleva el establecimiento de tribunales especializados en Derecho Informático fallos y resoluciones concernientes a la materia. Si bien no se cuenta en Panamá con estos estrados especializados judiciales independientes o especializados si hay magistrados y jueces que conocen la materia, quienes al resolver un conflicto que se relacione a ella, lo hacen conforme a la legislación sancionada para ello además han sido capacitados sobre este tópico (seminarios y conferencias)

2 1 4 5 Instituciones

El Derecho Informático al ser autónomo posee instituciones integrales y propias que lo hacen único e independiente del resto de las ramas del derecho son ellas el documento electrónico el comercio electrónico la delincuencia informática la firma digital o electrónica, circulación monetaria por medios informáticos y el Habeas Data, siendo este último el que será desarrollado a profundidad en el presente trabajo investigativo

2 2 Concepto de Habeas Data

El concepto Habeas data significa aquí está el dato así como el Habeas Corpus que significa aquí está el cuerpo

Segun el jurista argentino ENRIQUE M FALCÓN el Habeas Data viene a ser Un remedio urgente para que las personas puedan obtener a) El conocimiento de los datos a ellos referidos y de su finalidad que consten en registros o bancos de datos publicos o privados y b) En su caso para exigir la supresión rectificación confidencialidad o actualización de aquellos (FALCÓN 1996 Pág 7 8)

Segun OSCAR PUCCINELLI el Habeas Data es el remedio legal que le asiste a toda persona para exigir extra judicial o judicialmente la exhibicion de registro en los cuales estén inscritos sus datos personales o familiares para saber sobre su exactitud y dado el caso exigir la rectificación o la supresión de datos no veraces confidenciales o exigir la actualización de ellos (PUCCINELLI 1999 Pag 12)

El jurista mexicano Ernesto Villanueva, explica que el derecho del Habeas Data o la autodeterminacion informativa consiste en la garantia que tiene toda persona para conocer todos los registros archivos bases o bancos de datos personales donde se contengan informaciones relativas a ella, así como el derecho que le asisten para corregir o actualizar en su caso los datos en cuestión (VILLANUEVA 2002 Pág 50)

El constitucionalista panameño Rigoberto González Montenegro conceptua que se trata de una garantia constitucional o lo que es lo mismo de un instrumento de protección, de defensa o tutela, previsto para asegurar la eficacia de uno de los derechos que se consagran en la constitución el derecho de intimidad en su modalidad de los datos

personales y que es reconocido a favor del individuo o de la persona humana en su condición de miembro de una sociedad o comunidad (GONZALEZ 2002 Pág 33)

Heriberto Arauz Sánchez otro panameño que se ha interesado en el tema considera que el Habeas Data es una garantía, instituida constitucional o legalmente no es un derecho dirigida a tutelar el derecho de los ciudadanos a proteger sus datos personales por un lado y por el otro su derecho a tener acceso a información pública que se encuentre en bancos de datos (ARAUZ 2002 Pag 48)

En fallos de 23 de abril de 2002 la Corte Suprema de Justicia, ha definido la acción de Habeas Data, como un instrumento protector de defensa o tutela, a un derecho fundamental específico el derecho a la intimidad que surge como consecuencia del avance de las nuevas técnicas de recopilación almacenamiento y procesamiento de información (REGISTRO JUDICIAL ABRIL 2002 Pag 92 97)

Los conceptos anteriores coinciden en definir el Habeas Data como un mecanismo protector del derecho a la intimidad es decir lo que doctrinalmente se conoce como Habeas Data Propio

El Habeas Data Impropio es otra modalidad del Habeas Data, que tiene como objetivo garantizar la libertad de información consultando los archivos registros y bancos de datos que se encuentran en registros oficiales o entidades públicas para hacer

valer el derecho a acceso a la informacion publica o de acceso libre No obstante este tema los veremos en los tipos de Habeas Data que preve nuestra legislación

2 3 Naturaleza Juridica

No existe en la doctrina y en el derecho comparado uniformidad respecto a la naturaleza juridica de esta institucion

Legislaciones de algunas naciones como la de Colombia consideran al habeas data como un derecho individual o fundamental Otros califican a este instituto como un medio meramente instrumental que se materializa a través del ejercicio de una accion de tutela ante las autoridades jurisdiccionales competentes

Lo cierto es que el habeas data es una garantia, es un remedio legal un instrumento procesal consagrado o bien por la Constitución o por la ley para defender ciertos derechos fundamentales principalmente el de la intimidad en Panama, tal como quedó previsto en el articulo 44 de la Constitucion Nacional se trata de una garantia fundamental

2 4 Bien Jurídico Tutelado

Lo constituye el derecho a la intimidad segun la mayoria de la doctrina cientifica, definido como la facultad de decidir por uno mismo y sin presiones de que forma y con quien se puede compartir los hechos propios de la vida, salvo orden judicial

El derecho a la intimidad viene a consistir por tanto nos indica el profesor Rigoberto Gonzalez Montenegro como derecho constitucional reconocido y tutelado en aquella esfera o ámbito estrictamente personal o íntimo de la persona humana el cual debe estar excluido del conocimiento de terceras personas a fin de evitar o impedir intervenciones innecesarias o en todo caso arbitrarias en dicha esfera de privacidad con miras a preservar su dignidad como individuo (GONZALEZ 2002 Pag 39)

2 5 Presupuestos

El habeas data que pretende lograr un equilibrio entre la información que necesita la sociedad para su funcionamiento democrático y el derecho que posee todo individuo a la protección de los datos e informaciones que le conciernen requiere en primer lugar que existan los bancos de datos surgidos o que son producto de las modernas tecnologías como también archivos o registros no informatizados en segundo lugar que en estos se recabe almacene procese y se distribuya la información que poseen y que en tales registros archivos o bancos de datos y por otra parte que existan datos que atañen o incumben a la persona que reclama, en un inicio el acceso a esta información para tomar control de la misma

2 6 Finalidad

En los países europeos y algunos latinoamericanos por su alto grado de desarrollo tecnológico ha surgido en el mundo informático una institución jurídico procesal que busca proteger al individuo del acecho y peligro que representa el mundo tecnificado de

las computadoras a sus derechos y libertades Surge el habeas data con la finalidad de prevenir los posibles daños emergentes de la violación de los derechos a la intimidad y vida privada y sancionar aquellos que habiendo producido daños a la integridad de la persona, no hubiesen reparado o corregido el mismo lo que busca es la configuración de un derecho que proteja la actividad personal

Por consiguiente lo que se pretende es proporcionar a toda persona sobre la cual se posee información de su incumbencia y que ha sido informatizada en un banco de datos o recabada en registros o archivos no informatizados de una garantía constitucional de índole jurisdiccional que le permita el acceso a dicha información cuando esta le ha sido negada con la finalidad de tener conocimiento de ella, controlar la misma, restringir su acceso a terceras personas corregir lo que no este actualizada o solicitar se suprima la que le sea lesiva o en todo caso se mantenga su confidencialidad

2.7 Antecedentes Históricos del Habeas Data

La evolución histórica del habeas data corresponde con la salida al mundo de los derechos de la tercera generación que comprende al hombre su calidad de vida, su interrelación con los otros y su espacio en la sociedad

Los derechos de la primera generación que correspondieron a las primarias concepciones del Estado moderno que parten de la Revolución Francesa de fines del siglo XVIII y se encuentran referidas a la libertad igualdad y fraternidad

La Revolución Industrial y la concentración de capitales de fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX unidas a nuevas concepciones destinadas a la regulación e intervención del Estado a quien no se lo admitía más como mero espectador y las nuevas corrientes de pensamientos con contenidos comunitarios y clasistas determinaron un nuevo cúmulo de declaraciones derechos y garantías que se fueron sancionando y que implicaban un acceso a una situación que fue identificada como de justicia social. Estas manifestaciones están relacionadas a las declaraciones de derechos en función social y a la Doctrina Social de la Iglesia de los años sesenta.

La finalización de la Segunda Guerra Mundial determinó la división estratégica del mundo entre las potencias vencedoras y también dio nacimiento político a una conflagración de poder tecnológica y política denominada guerra fría en la cual no hubo conflicto armado directo entre las potencias pero sí en las sociedades periféricas y produjo grandes procesos de descolonización. El avance de tecnología, con el pretexto de una vida mejor se originó como contrapartida una serie de prejuicios y problemas trascendentes e impensados que hacen dubitable la vida futura en el planeta en un plazo aproximado de doscientos años. Tanto poder tecnológico de investigación junto con un poder de destrucción concentraciones de capitales y peligros de supervivencia dieron lugar a la tercera generación de declaraciones derechos y garantías referidas al uso racional de la tecnología de los recursos naturales y del espacio aéreo. La finalización de la guerra fría que se puede identificar con la caída del Muro de Berlín trajo aparejado el nuevo fenómeno de la globalización que sólo puede ser posible por la existencia de

una tecnologia de ultima generacion que permite el flujo constante e ininterrumpido de información entre todas las partes del mundo En cuanto al hombre la preservación de las garantias adquiridas y el reconocimiento de otras en funcion de la falta de equiparacion entre las grandes empresas y el pequeño consumidor o usuario que en soledad careceria de toda posibilidad de reconocimiento y actuación Los derechos y garantias de tercera generacion se presentan como respuesta al fenómeno de la contaminacion de las libertades

El habeas data viene a responder a una necesidad del hombre comun de oponerse a la información falsa, arbitraria o discriminatoria que se encuentre en cualquier base de datos sin interesar la importancia de la misma El control sobre algun tipo de informacion contenida en ciertas bases de datos no se trata de un interes meramente nacional o circunscripto a unos pocos paises o regiones sino que por el contrario es un problema y una hipotesis de conflicto para el mundo entero de ahí la legislacion dictada en la materia

Ya por el reconocimiento de derechos o por el avance de la tecnologia la necesidad legislativa resulta impostergable tanto en lo referido al resguardo de la intimidad usos y abusos respecto de la información personal desactualizaciones etcetera

2 8 Aspectos Procesales Generales

Los aspectos procesales de esta garantía varían de legislación en legislación ello se debe fundamentalmente además de las realidades culturales económicas y sociales que distinguen a cada sociedad a lo novedoso para un Estado el derecho de protección de datos

2 8 1 Competencia

De las legislaciones extranjeras se extrae que en términos generales el habeas data se rige por el mismo procedimiento

La acción se podrá instaurar ante el Juez de primera instancia del ramo civil en el lugar donde tenga su domicilio el demandante o donde se ubican los archivos informáticos o en el que corresponda al domicilio del demandado a elección del demandante

En muchas legislaciones a pesar que el habeas data se considera una garantía constitucional se le atribuye competencia a jueces de circuito civiles en otras a la jurisdicción constitucional con aplicación analógica de las disposiciones del amparo de garantías constitucionales

Como se aprecia no existe homogeneidad en materia de competencia, pero ello se debe a las distintas posiciones respecto a la naturaleza de la institución

2 8 2 Pretensión

Este elemento juega un papel importante ya que es aquí donde el afectado requiere del aparato jurisdiccional del Estado la protección de los datos que sobre su persona constan en los registros o archivos demandados sea por que los estime lesivos dañinos o discriminatorios

2 8 3 Legitimación

2 8 3 1 Legitimación Activa

Gran parte de la doctrina extranjera ha señalado que la acción de habeas data puede ser interpuesta por persona natural o jurídica

En Argentina se encuentran facultados para instaurarla personas jurídicas y naturales o sus tutores curadores o sucesores en líneas directas o colaterales hasta segundo grado En cambio en Colombia, España y Portugal solo es la persona natural que se siente lesionada en sus derechos a la intimidad o al buen nombre por un tercero la que puede ejercer la acción para solicitar la protección de datos personales

2 8.3 2 Legitimación Pasiva

La tutela jurisdiccional ofrecida por el Estado para aquellos que se sientan afectados por el registro de informaciones contenida en archivos o en bancos de datos puede enderezar en contra de entes públicos y de particulares

Los argentinos propugnan para que resulten demandados en la acción de habeas data además del ente público los particulares

Quedan excluidos los medios de comunicación social aun cuando contengan datos personales siempre que sean almacenados con fines exclusivamente periodísticos los registros del órgano judicial los organismos de inteligencia y fuerzas de seguridad del Estado

2 8 4 Requisitos para la Interposición

En la legislación extranjera, para la interposición de la acción de habeas data se dan los siguientes requerimientos

2 8 4 1 Plazo

Ciertas legislaciones establecen un plazo para interponer la acción de habeas data, por ejemplo dentro de los quince días hábiles a partir de la fecha en que el acto fue ejecutado o debió producirse Sin embargo en Colombia y Brasil puede ser instaurada la acción de habeas data en todo momento y lugar

En Latinoamérica a nivel de la legislación la doctrina e incluso de jurisprudencia de los tribunales existen diferencias en torno al plazo para presentar la acción de habeas data

2 8 4 2 La Presenta la Persona Afectada

Puede interponer la acción de habeas data la persona natural a la cual se refieren los datos que se pretenden proteger dependerá de cada legislación si lo podrán hacer las personas jurídicas

2 8 4 3 Formalidades

Estará la acción de habeas data sujeta a las formalidades de una demanda escrita, por medio de abogado idóneo

2 8 4 4 Agotamiento de la Vía Gubernativa

Este requisito es tema de discusión tanto en la doctrina como en las legislaciones extranjeras comparadas

En la provincia Argentina de Jujuy se establece como requisito para la interposición del habeas data, que el interesado presente por escrito una solicitud ante la entidad estatal correspondiente y de no contestarle en cinco días podrá iniciar el proceso de habeas data En las legislaciones es de diez días

Se estima que debido a la propia naturaleza del habeas data, no debe exigirse el agotamiento de las vías ordinarias para su interposición

2 9 Aspectos Procesales Sobre el Procedimiento

2 9 1 Juicio Sumario

Todas las legislaciones son enfáticas al señalar la necesidad de que el procedimiento para la acción de habeas data sea sumarisimo (abreviado) debido a la naturaleza del derecho que pretende protegerse y los perjuicios que pueden ocasionarse si el procedimiento no es rapido

2 9 2 Medidas Cautelares

En el proceso de habeas data se permite la practica de medidas cautelares necesarias para hacer cesar de inmediato la amenaza, violacion o intromisión ilegítima en los datos personales y si el operador judicial considera que pueden ocasionarse daños con su ejecución solicita al actor que caucione lo suficiente para luego entonces decretarla

2 9 3 Notificación

La notificación de la demanda de habeas data debe surtirse al órgano publico o privado responsable del banco de datos adjuntándosele por el Tribunal solicitud de suministro de informacion de la existencia de datos especificos De no cumplir lo pedido el despacho jurisdiccional debe continuar con el impulso del proceso

La fase probatoria debe ser expedita y en el evento de práctica de pruebas éstas deben recaer sobre los hechos debatidos en la demanda El actor debe probar que el registro impugnado contiene informacion falsa inexacta, discriminatoria, de lo contrario acarrearía un fallo negativo

2 9 4 Efectos del Habeas Data

La resolución puede conceder o negar lo pedido. Si se concede, la orden consistirá en un mandamiento de inmediato cumplimiento sin dilación, dirigido al ente responsable del archivo, para que se abstenga de hacer lo que hacía o haga lo que negaba hacer.

El principal efecto es el de hacer cesar la actitud transgresora del derecho constitucional a la protección de datos.

En la sentencia puede condenarse en abstracto al responsable del banco de datos a la reparación del daño emergente causado al demandante.

En Colombia y Argentina se condena en costas al vencido en juicio, para evitar la mala fe y que se saturen los tribunales.

La sentencia tiene efectos retroactivos e inter partes y es recurrible en primera instancia. También posee efectos vinculantes para las partes, estando obligada la parte declarada culpable a resarcir el daño causado a la persona agraviada.

2 10 El Estado Constitucional de Derecho

Se caracteriza por la existencia de una Constitución que prevalece sobre el resto de las demás normas jurídicas, por tal razón constituye el ramo jurídico político dentro del cual se desenvuelven gobernantes y gobernados.

A beneficio de los gobernados se reconoce una serie de derechos fundamentales a nivel constitucional que deberán ser respetados por las autoridades de modo que si son desconocidos se podrán hacer valer anular o remover o contrario mediante distintas garantías previstas para protegerlos como es el Habeas Data, que busca la tutela del derecho a la intimidad y dentro de este la de los datos personales

En consecuencia, el establecimiento del estado constitucional responde a una concepción garantizadora de los derechos fundamentales pues en él se fija un sistema de garantía de tutela a favor de la libertad del hombre que sirve de límite al ejercicio del poder político de las autoridades

2 11 Los Derechos Fundamentales y su Protección

Una de las particularidades relevantes del Estado Constitucional de Derecho además del establecimiento de la Constitución lo es el reconocimiento de los derechos inherentes al ser humano

La importancia de la regulación de tales derechos denominados derechos Humanos fundamentales o constitucionales esta ligada a la suerte del estado de derecho

Del mismo modo se han incorporado nuevos mecanismos de protección de estos derechos como lo es el Habeas Data, permitiendo al titular de los mismos reclamar la

tutela ante los tribunales competentes fortaleciendose el Estado Constitucional de Derecho

Se admite entonces que el Habeas Data es una institución creada para la protección de derechos consagrados en la Constitución a beneficio del individuo especialmente de los datos informáticos evitando injerencias en su intimidad e igualmente obtener información

Al protegerse los datos personales manejados a través de medios informativos se tutela igualmente la intimidad de la persona. La intimidad estuvo siempre protegida en nuestro ordenamiento en disposiciones constitucionales y legales. Así encontramos los artículos 17, 26 y 29 de la Constitución Nacional que se refieren básicamente a la inviolabilidad del domicilio y de la correspondencia de igual forma, los artículos 575, 576 y 578 del Código de la Familia.

Se establece además que el bien jurídico tutelado por esta acción va desde el derecho a la intimidad hasta el derecho al honor pasando por el de identidad, imagen, reputación, etc., alcanzando importantes ribetes penales y civiles (delitos contra el honor, sanciones pecuniarias e indemnización por daños morales).

Como observamos en la actualidad el derecho a la intimidad se ha visto afectado y menoscabado fundamentalmente por la tecnología que mediante el uso permanente y

extendido de las computadoras y las bases de datos representa una amenaza constante para el hombre como individualidad

El derecho a la intimidad es el respeto a la personalidad humana del aislamiento del hombre de lo íntimo de cada uno de la vida privada de la persona física, innata, inherente y necesaria para desarrollar su vida sin entorpecimiento perturbaciones y publicidades indeseadas es un derecho personalísimo que debe estar excluido del conocimiento de terceras personas por otro lado en lo que concierne al derecho de acceso a la información que tienen las personas Habeas Data Impropio hay normas dispersas que abordan la materia, reconociendo y limitando el ejercicio de este derecho (artículos 837 del Código Administrativo 70 de la Ley 38 de 2000 168 Y 170 del Código Penal 722 del Código Fiscal y el 125 del Decreto N 194 de 16 de septiembre de 1997)

El derecho a la intimidad incorpora sentimientos emociones y pensamientos de la persona humana en tiempo presente pasado y futuro cierto y previsible así como ciertos aspectos de corporidad humana y algunos datos o informaciones personales obtenidos por cualquier medio manual mecánico o informático ha venido creciendo hasta nuestros días en el proceso lógico de evolución

Son múltiples las teorías y posiciones doctrinales que han esgrimido para delimitar el contenido del derecho a la intimidad y éste parte del planteamiento de delimitar conceptualmente la intimidad con la que llama noción actual de la privacy

porque considera que la intimidad y la vida privada contienen una carga emotiva que las hace equívocas, ambiguas y dificulta la precisión de su significado

Los elementos que caracterizan el derecho a la intimidad personal y familiar se hallan al reconocer

- El derecho a que toda persona a un nivel adecuado para sí y su propia familia, basado en el libre consentimiento
- Que la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad a la que se debe prodigar la más amplia protección y asistencia posible
- El derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental
- Que la educación se orienta al pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad
- El derecho a la vida cultural y el progreso científico

Ha existido a partir de los años setenta una revolución del Derecho a la Intimidad al punto que han surgido leyes protectoras de forma autónomas de otros derechos, mas no liberadas de la protección conjunta con el derecho al honor, la imagen y el buen nombre, ello debido a las normas de las nuevas tecnologías de la comunicación y de la información. Se habla entonces de la intimidad como un derecho al autocontrol de la información de una persona.

Las leyes antes referidas fueron dictadas entre 1973 a 1984 en Suecia, Norteamérica, Alemania, Suiza, Francia e Inglaterra, llamada proteccion de la privacy proteccion de datos etc

Diversos ordenamientos legales confunden la vida privada o intima con la honra o buena reputacion del individuo es el caso de la Constitucion Ecuatoriana (Art 23) la Nicaraguense (Art 26) la de México (Art 16) Paraguay (Art 10 11) Venezuela (arts 47 60) y Panamá (Art 26)

El primer texto constitucional europeo que escogió expresamente el derecho a la intimidad fue la portuguesa en 1976 (Art 26) luego la española de 1978 (Art 18)

El derecho a la intimidad como derecho fundamental tambien ha sido reconocido universalmente en el Art 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas de 1984 en el Art 8 de la Convencion Europea para la proteccion de los Derechos Humanos y de las libertades fundamentales de 1950

Tambien reconocen a la intimidad como un derecho fundamental e inherente de la dignidad de la persona, el Pacto Internacional de Derechos Economicos Sociales y Culturales el Convenio Europeo de Estransburgo de 1981 sobre protección de las personas con respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal y el

Consejo de Europa relativo al tratamiento y circulación de datos personales la transmisión electrónica o telemática de datos y la protección al derecho de la intimidad

El derecho a la información es de doble aspecto informar y ser informado consagrado en el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles o Pacto de San José

Todo ciudadano tiene derecho a conocer informarse acceder o transferir el contenido de los registros informáticos (ficheros o bancos de datos) en los que se hallen insertos datos de carácter personal relativos a él y que le conciernan llegado el caso podrá exigir la rectificación y la actualización de los datos sometidos a procedimiento informático

El derecho a la libertad de expresión comprende la libertad de buscar recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole sin consideración de fronteras (sean orales escritas impresas o artísticas etc) derecho que sólo podrá ser restringido por la ley para asegurar el respeto a la reputación protección a la seguridad nacional el orden público la salud o moral pública El derecho a la información tiene sus límites en el derecho a la intimidad

La sociedad afronta un inconveniente respecto a este derecho y corresponde a la discusión mal intencionada de la información sea falsa o no autorizada, pudiendo vulnerarse derechos fundamentales

En consecuencia el Habeas Data consiste en el derecho de toda persona de interponer la acción pertinente para tomar conocimiento de los datos a ello referidos y de su finalidad que consten en registros o bancos de datos públicos o los privados destinados a proveer informes y en caso de falsedad o discriminación exigir la rectificación confidencialidad o actualización de aquellos. Es decir que esta acción de Habeas Data se dirige predominantemente a proteger los datos personales de las personas.

Como podemos apreciar con el Habeas Data se protegen derechos civiles (intimidad información) que forman parte de los derechos de la primera generación en que se clasifican los Derechos Humanos.

2.12 El Habeas Data en Panamá

2.12.1 Consideraciones Previas

Antes de analizar la acción de Habeas Data, que ha sido incorporada recientemente en nuestra Constitución Nacional mediante Acto Legislativo No. 1 de 27 de julio de 2004 y por medio de la Ley 6 de 22 de enero de 2002, nos parece necesario hacer unas aclaraciones previas atinentes al derecho tutelado por esta acción. Se ha expresado que a través del Habeas Data, lo que se persigue es la protección del derecho a

la intimidad o a la no injerencia o conocimiento publico de aquellos datos denominados sensibles y que pueden verse manipulados en perjuicio de su titular por el llamado poder informático

La Licenciada Karla Maria Zaldivar nos dice que el Habeas Data tiene como proposito brindar tutela efectiva a lo que denomina la identidad informatica de la persona humana, con miras a que se le respete la integridad fisica, psiquica y moral en la medida en que como anota la jurista Zaldivar si bien no se le esta matando o hiriendo en el sentido fisico o natural de los terminos se le puede neutralizar y negar dicha integridad a partir de las posibilidades de control por medio electronico que ofrecen los recursos informaticos (ZALDIVAR 1996 Pag 3 4)

Es precisamente el derecho a la intimidad el que hasta, recientemente estuvo falto de la debida proteccion en nuestra legislacion y ello en parte ante la ausencia de una regulacion que previera un mecanismo como el Habeas Data Por tanto le asiste razon al profesor Edgardo Villalobos cuando nos dice que no hay que olvidar que La intimidad siempre estuvo protegida en nuestro ordenamiento El problema actual nos indica Villalobos es si está protegida la violacion a la intimidad a traves de la informatica (VILLALOBOS 1997 Pág 137)

En el sistema constitucional panameño se regulan los derechos que preservan aquella esfera de privacidad o de intimidad del individuo dentro de la cual se busca

impedir el que no sea objeto de intromisiones o injerencias lesivas a su imagen a su honor y a su decoro Tales derechos fundamentales tienen que ver con lo que el constitucionalista Dr César Quintero clasifica como Derechos del individuo en función privada consistente estos en aquellos que se circunscriben a la esfera primordialmente íntima y esencialmente particular de la persona humana (QUINTERO 1967 Pag 163)

Para el Doctor Rigoberto González Montenegro estamos en todo caso ante aquellos derechos por medio de los cuales lo que se busca es asegurar un espacio o ámbito dentro del cual la persona no se vea sometida al escrutinio o conocimiento público ni por parte del Estado como de los particulares Estos derechos de los que se deriva la intimidad son directamente tutelados de acuerdo a nuestro sistema de protección de los derechos fundamentales por la acción de amparo regulada en el artículo 50 de la Constitución y en el ámbito legal por medio del contencioso administrativo de protección de los derechos humanos de acuerdo a lo establecido en el numeral 15 del artículo 98 del Código Judicial sin que ello signifique que a través de los demás medios que brinda la jurisdicción contencioso administrativa, no se puedan hacer valer dichos derechos (GONZALEZ 2003 Pág 51)

Nuestra jurisprudencia también es clara al señalar mediante el fallo de 19 de septiembre de 1994 de la Sala Tercera de la Corte Suprema, en el que por razón de demanda contencioso administrativa de nulidad se sostenía, por una parte que nuestro ordenamiento jurídico consagra claramente el derecho a la intimidad específicamente en

el artículo II de la Convención Americana sobre Derechos Humanos aprobada mediante Ley 15 de 28 de octubre de 1977 y por la otra se declara ilegal la resolución e impugnada, la Resolución No 28 de 30 de julio de 1991 expedida por el Ministerio de Gobierno y Justicia, ya que la misma infringía el derecho a la intimidad al hacer extensiva la clasificación otorgada por los censores a las películas cinematográficas distribuidas a través del alquiler de videocintas. Sostenía la Corte en el fallo citado que

La intimidad de las personas y lo que dentro de esta área realicen los particulares debe quedar exento de las intromisiones o injerencias (sic) externas tanto de otros particulares como de la autoridad pública (REGISTRO JUDICIAL SEPTIEMBRE 1994)

Se entiende de lo que se lleva expuesto que el tema a debatir en cuanto al Habeas Data en nuestro país tiene que ver con la aprobación de la Ley No 6 de 22 de enero de 2002 y por la cual se incorpora a nuestro sistema de protección de los derechos fundamentales de la regulación de un mecanismo o garantía que viene a tutelar directa y concretamente el derecho a la intimidad con respecto al acceso manejo procesamiento y transmisión de los datos sensibles de las personas que se llevan en los bancos o bases de datos informatizados como en los archivos que no lo sean en manos o control del Estado

Nuestro máximo tribunal de justicia, la Corte Suprema, era consciente de la necesidad de contar con un instrumento que brindara protección a la confidencialidad con que deben ser manejados ciertos datos o información personal por lo que éstos o las mismas representan y significan

En fallo de 11 de julio de 1997 el Pleno de la Corte Suprema de Justicia consideraba lo siguiente

‘No se puede perder de vista que el Ministerio de Hacienda y Tesoro es el custodio legal de informaciones confidenciales de los contribuyentes en materia tributaria, lo que se establece a cargo del Ministerio del ramo el deber de salvaguardar los datos referente a la tributación de las personas naturales y jurídicas cuidando de manera especial la debida reserva de la informacion que se maneja en esa entidad recaudadora

Hay aqui un claro compromiso constitucional de implementar medios que garanticen la debida proteccion del derecho que tienen los contribuyentes a su intimidad y a la confidencialidad de sus declaraciones tributarias (Art 29 C N) (REGISTRO JUDICIAL JULIO 1997)

En ese sentido se hacia necesario la regulacion y establecimiento de un mecanismo de tutela de los datos personales informatizados o no Por ello el legislador patrio consideró importante incluir en la reforma constitucional mediante el Acto Legislativo No 1 del 27 de julio del 2004 el derecho que tiene toda persona a acceder a la informacion personal a solicitar informacion de acceso publico o de interes colectivo contenida en base de datos o registros publicos y privados que presten servicio publico

La proteccion de datos en nuestra Constitución Nacional se encuentra regulado en el Titulo III que trata sobre DERECHOS Y DEBERES INDIVIDUALES Y SOCIALES Capítulo 1 GARANTIAS FUNDAMENTALES especificamente en los articulos 42 y 43 los cuales nos permitimos citar textualmente

ARTICULO 42 Toda persona tiene derecho a acceder a la información personal contenida en base de datos o registros publicos y privados y a requerir su rectificación y protección así como su supresión de conformidad con lo previsto en la Ley

Esta información sólo podrá ser recogida para fines específicos mediante consentimiento de su titular o por disposición de autoridad competente con fundamento en lo previsto en la Ley

ARTICULO 43 Toda persona tiene derecho a solicitar información de acceso publico o de interés colectivo que repose en bases de datos o registros a cargo de servidores publicos o de personas privadas que presten servicios publicos siempre que ese acceso no haya sido limitado por disposición escrita y por mandato de la Ley así como para exigir su tratamiento leal y rectificación

De las normas copiadas observamos que la protección de datos constituye un derecho fundamental de las personas por cuanto que la misma tiene el derecho a que sus libertades sean respetadas entendiéndose por estas libertades principalmente la de la intimidad que se ve vulnerada cuando una persona no es capaz de autodeterminar su información así como también obtener información de acceso publico o de interés colectivo que repose en bases de datos o registros

2.13 La Acción de Habeas Data en el Ordenamiento Jurídico Panameno

Con la aprobación de la Ley No. 6 de 22 de enero de 2002 por la cual se adoptan las normas pertinentes para la transparencia en la gestión pública se vino a establecer o incorporar a nuestro ordenamiento jurídico la acción de Habeas Data, con lo cual se ha venido a actualizar y a la vez reforzar el sistema de garantías para la protección efectiva de los derechos fundamentales en Panamá

La Ley 6 de 2002 además del Habeas Data, se refiere a otros aspectos como lo son el reconocimiento de derecho de acceso a la información ya sea esta de carácter público como a los datos personales la obligación que tiene el Estado de informar en cuanto a su gestión la información que es de carácter confidencial y la de acceso restringido entre otras materias. Ello significa por ende que se está ante una ley que conjuga diversos temas relacionados entre sí.

El Habeas Data está regulado en el Capítulo Quinto denominado Acción de Habeas Data el cual abarca del artículo 17 al 19 inclusive aunque otras normas fuera del citado capítulo guardan relación con lo que en este se prevé y a los que nos referimos más adelante.

Cinco meses después de la sanción de la Ley No. 6 de 22 de enero del 2007 el Gobierno emitió el Decreto Ejecutivo No. 124 de 21 de mayo de 2002 por la cual se reglamenta la mencionada Ley supuestamente con miras a facilitar su aplicación garantizar el ejercicio del Derecho a la libertad de información y preservar principios fundamentales como el acceso público y la publicidad.

En cuanto a la reglamentación podemos mencionar lo siguiente:

- Para los efectos del artículo II de la Ley el artículo 8 del reglamento define persona interesada como aquella que tiene relación directa con la información que solicita,

- Las solicitudes se deberan hacer a los titulares de las dependencias publicas las cuales contarán con formularios que estaran a disposicion de los ciudadanos sin ningun costo para éstos al momento de pedir la información
- La informacion sobre un servidor publico contenida en la oficina de recursos humanos sera de carácter confidencial
- La clasificacion de una información como de acceso restringido le compete al titular de la institucion respectiva
- La aplicación de la Ley y del Decreto reglamentario será de obligatorio cumplimiento en todas las Instituciones Publicas del Estado

Consideramos que el mencionado reglamento colisionaba con la Ley de Transparencia ya que la misma es comprensible cabal y suficiente por lo que no era necesaria su reglamentacion Por ello esto fue discutido en diferentes foros y en los fallos de la Corte Suprema de Justicia, los salvamentos de voto en muchas ocasiones se dividian 5 a 4 y los Magistrados que salvaban el voto manifestaban que muchas veces el reglamento estaba por encima de la Ley

El rechazo de la opinion politica con relación al Decreto Ejecutivo No 124 del 21 de mayo de 2002 y la declaratoria de ilegalidad de los articulos 8 y 9 y la palabra necesarios contenida en el articulo 14 del citado Decreto por la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, trajo como consecuencia el dejarlo sin efecto mediante Consejo de Gabinete de 1 de septiembre de 2004

Sin animo de polemizar en asuntos politicos las criticas y cuestionamientos que se le hicieron al Gobierno de la Presidenta MIREYA MOSCOSO sobre la corrupcion de su mandato y los Fallos emitidos por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, habian echado al traste la verdadera intencion de la Ley de Transparencia, que era la de dotar a toda persona de un instrumento jurisdiccional que le permitiera poner remedio a la infracción o menoscabo a la informacion publica, o cuando se este ante una que le es de su incumbencia pretendiéndose ademas con esta garantia enfrentar y remediar las violaciones a uno u a otro derecho

Para muchos la Ley no era suficiente porque como senalamos el Decreto Ejecutivo estuvo por encima de la Ley ante esta situacion los Legisladores de la Republica de Panama presentaron un anteproyecto de reformas a la Constitución Nacional entre las cuales se encontraban incluir en la Constitución la proteccion de datos y la Accion de Habeas Data la cual fue aprobada conforme a los parámetros del articulo 308 de la Carta Magna, la cual establece que se puede reformar la Constitución mediante un Acto Legislativo aprobado en tres debates por la mayoria absoluta entre los Miembros de la Asamblea Legislativa en una legislatura y aprobado igualmente en tres debates por mayoria absoluta de los miembros de la mencionada Asamblea en la Legislatura inmediatamente siguiente

En efecto esta propuesta de reforma se concretizo en la legislatura siguiente mediante Acto Legislativo No 1 del 27 de julio de 2004 por la cual se establece la

Acción de Habeas Data, incluyéndola en la Constitución en el Título III que trata sobre
DERECHOS Y DEBERES INDIVIDUALES Y SOCIALES Capítulo 1 de las
GARANTIAS FUNDAMENTALES artículo 44 antes mencionado que reza así

ARTICULO 44 Toda persona podrá promover acción de Habeas Data con miras a garantizar el derecho de acceso a su información personal recabada en bancos de datos o registros oficiales o particulares cuando estos últimos traten de empresas que prestan un servicio al público o se dediquen a suministrar información

Esta acción se podrá interponer de igual forma para hacer valer el derecho de acceso a la información pública o de acceso libre de conformidad con lo establecido en esta Constitución

Mediante la acción de Habeas Data se podrá solicitar que se corrija, actualice rectifique suprima o se mantenga en confidencialidad la información o datos que tengan carácter personal

La Ley reglamentará lo referente a los tribunales competentes para conocer de Hábeas Data, que se sustanciará mediante proceso sumario y sin necesidad de apoderado judicial

El artículo en comento señala que la Acción de Habeas Data lo que persigue es tener conocimiento y acceso a los bancos de datos o registros oficiales o particulares a fin de corregir actualizar rectificar suprimir o se mantenga en confidencialidad la información o dato que tenga carácter personal dependiendo el caso que se trate con respecto a la información o datos que sobre la persona titular y legitimada para presentar tal garantía existe o para tener acceso a la información pública

La norma también dispone que la Ley reglamentará lo referente a los tribunales competentes para conocer del Habeas Data y refiera lo establecido en la Ley No 6 de 22

de enero de 2002 que se sustanciará mediante proceso sumario y sin necesidad de apoderado judicial

2 13 1 Reconocimiento de la Acción su Alcance y Finalidad

El artículo 44 de la Constitución Nacional establece Toda persona podrá promover acción de Habeas Data con miras a garantizar el derecho de acceso a su información personal recabada en bancos de datos o registros oficiales o particulares cuando estos últimos traten de empresas que prestan un servicio al público o se dediquen a suministrar información

En iguales términos el artículo 17 de la Ley No 6 de 22 de mayo de 2002 establece que

Artículo 17 Toda persona estará legitimada para promover acción de Habeas Data, con miras a garantizar el derecho de acceso a la información en esta Ley cuando el funcionario público o responsable del registro archivo o banco de datos en el que se encuentra la información o dato personal reclamado no le haya suministrado lo solicitado o si suministrado lo requerido se haya hecho de manera insuficiente o en forma inexacta

De la norma legal transcrita se colige que la acción de Habeas Data podrá ser promovida por toda persona a la que no se le haya suministrado la información o dato personal solicitado o cuando se haya hecho de forma deficiente Se entiende que toda persona a la que no se le haya suministrado la información o dato personal solicitado o cuando se haya hecho de forma deficiente Se entiende que la información no está restringida solamente a los ciudadanos panamenos sino también a toda persona, sea

esta nacional o extranjera, persona natural o jurídica, claro está de acuerdo a las restricciones que en la ley se señalan y según la información o dato personal que haya sido requerido

En ese sentido la Ley 6 de 2002 dispone o determina que la información que tenga el carácter de confidencial no podrá ser divulgada bajo ninguna circunstancia, por agentes del Estado según lo establece el artículo 13 del texto legal en mención. En el numeral 5 del artículo 1 de la Ley 6 en estudio al definir lo que se entiende por Información Confidencial deja establecido que esta es

Todo tipo de información en manos de agentes del Estado o de cualquier institución pública que tenga relevancia con respecto a los datos médicos y psicológicos de las personas, la vida íntima de los particulares incluyendo sus asuntos familiares, actividades maritales u orientación sexual, su historial penal y policivo, su correspondencia y conversaciones telefónicas o audiovisuales o electrónico así como la información pertinente a los menores de edad. Para efectos de esta Ley también se considera como confidencial la información contenida en los registros individuales o expedientes de personal o de recursos humanos de los funcionarios.

El numeral 7 del artículo 1 de la Ley 6 de 2002 define como información de acceso restringido aquella que está en manos de agentes del Estado o de cualquier institución pública, cuya divulgación haya sido circunscrita únicamente a los funcionarios que la deban conocer en razón de sus atribuciones de acuerdo con la ley. Para que una información sea considerada como de acceso restringido debe previamente ser declarada o calificada como tal por parte de funcionario competente como lo deja establecido el

artículo 14 de la ley en referencia, considerándose así entre otra la que tenga que ver con la seguridad nacional manejada por los estamentos de seguridad los asuntos que tengan que ver con procesos o sumarios que leven a cabo el Ministerio Público y el Órgano Judicial a los que sólo podrán acceder las partes del proceso etc

En base al artículo 14 que dice

Artículo 14 La información definida por esta Ley como de acceso restringido no podrá divulgarse por un periodo de diez años contados a partir de su clasificación como tal salvo que antes del cumplimiento del periodo de restricción dejen de existir las razones que justificaban su acceso restringido

La acción de Habeas Data no podrá por consiguiente promoverse por cualquier persona cuando de información confidencial se trate ya que en este caso solo estará legitimada la persona cuya información o dato personal le haya sido recabada y cuando se esté ante información de acceso restringido no procederá por persona alguna esta acción salvo que hayan transcurrido los diez años a los que puede estar sometida esta sin permitir su divulgación o cuando las condiciones que motivaron dicha clasificación hayan dejado de existir

2.13.2 Los Tipos o Clases de Información a la que se Puede Tener Acceso

El artículo 17 de la Ley 6 de 2002 dispone que la acción de Habeas Data es un mecanismo previsto con miras a garantizar el derecho de acceso a la información a la que se refiere la ley en mención y que la misma procede cuando la información o dato

personal reclamado no haya sido suministrado o lo haya sido en forma insuficiente o en forma inexacta (El artículo 44 de la Constitución Nacional establece los dos supuestos)

En virtud de lo anterior son dos los tipos o clases de información a la que se tiene derecho a tener acceso. Uno vendría a ser la de carácter general o pública, es decir la que esta en manos del Estado y la otra cuando tal información es de tipo personal al tratarse de una información o dato que habiendo sido recabado por una entidad o institución pública tiene que ver con una persona en particular.

En la primera se entiende que debe ser de acceso de cualquier persona, sin tener que alegar o sustentar justificación o motivación alguna como lo tiene señalado el artículo 2 de la ley en estudio. La segunda en la medida en que incumbe a una sola persona por ser una información o dato personal su acceso si bien no le estará vedado por tener derecho a conocer y tener control sobre la misma, o que ya si no será permitido es que a esta tenga acceso cualquier otra persona.

Los otros tipos o clases de información que aparecen recogidos en el artículo 2 de la Ley establece que

Artículo 2 Toda persona tiene derecho a solicitar sin necesidad de sustentar justificación o motivación alguna, la información de acceso público en poder o en conocimiento de las Instituciones indicadas en la presente Ley.

Las empresas privadas que suministran servicios públicos con carácter de exclusividad están obligadas a

proporcionar la información que les sea solicitada por los usuarios del servicio respecto de este

Por su parte en el artículo 3 dispone que

Artículo 3 Toda persona tiene derecho a obtener su información personal contenida en archivos registros o expedientes que mantengan las instituciones del Estado y a corregir o eliminar información que sea incorrecta irrelevante incompleta o desfasada, a través de los mecanismos pertinentes

De las normas transcritas se entiende que la legitimación para presentar y promover la Acción de Habeas Data va a tener que ver con lo siguiente

- La información de acceso público que este o se encuentre en poder o de conocimiento de instituciones del Estado las que incluyen toda agencia o dependencia de este ya sea que pertenezcan al Órgano Ejecutivo Legislativo Judicial al Ministerio Público o de las Entidades Descentralizadas Autónomas o Semiautónomas la Autoridad del Canal los Municipios Gobiernos Locales los patronatos y los organismos no gubernamentales en este último caso cuando hayan recibido o reciban fondos capital o bienes del Estado como se regula en el punto 8 de definiciones o términos del artículo 1 de la ley en estudio
- La información que esté en poder haya sido recabada por las empresas que aunque privadas o particulares suministran o llevan a cabo prestación de servicios públicos con carácter de exclusividad o se dedique a suministrar información caso en el cual la información que están obligados a

proporcionar será aquella que tenga que ver con la de los usuarios del servidor

- La información o dato personal que se haya recabado y que esté contenida en archivos registros o expedientes que estando en instituciones del Estado sea de índole personal y que atañe a quien la solicita o reclame

2.13.3 Los Tipos o Clases de Habeas Data

El tipo o clase de información a que da derecho a acceder vía la acción de Habeas Data, tal y como quedó previsto en la Ley 6 de 2002 y a lo que acabamos de referirnos se ha dado cabida en nuestro ordenamiento a las dos clases de Habeas Data, a los que alude Oscar Puccinelli citado por Rigoberto González Montenegro al reconocer la existencia de Habeas Data ‘tradicional o propio por el cual se busca mitigar los efectos perniciosos del poder informático sobre los derechos de las personas y la otra modalidad lo sería el Habeas Data no tradicional o impropio el que a decir del citado autor se relaciona con la pretensión de tutelar la libertad de recabar y transmitir información cuya misión es la de funcionar como mecanismos corrector de los abusos de quienes pretenden retacear indebidamente el acceso a las fuentes de información (generalmente el Estado) (GONZÁLEZ 2002 Pág. 60-61)

En el Habeas Data propio se garantizará el acceso a la información o dato personal de quien la reclama y por ser de su incumbencia y a través del Habeas Data

impropio lo que se persigue es dotar a toda persona que así lo haya solicitado el acceso a las fuentes de información de carácter público

Se instituye y regula por tanto en nuestro ordenamiento jurídico

un Habeas Data amplio al regularse este en sus dos modalidades y por los cuales tanto para la persona que solicita su información o dato personal como para quien la requiere es de índole general se dota a uno y otro de un instrumento jurisdiccional que viene a poner freno y remedio a los caprichos y arbitrariedades de aquellos funcionarios públicos que desconociendo el derecho que se tiene a la información por parte de toda persona, ya sea de acceso público o cuando lo sea de carácter particular se termina negando el conocimiento de la misma, (GONZALEZ 2002 p 61)

Es indudable que en Panamá, a diferencia de otras legislaciones nos dice el

Profesor RAMIRO ESQUIVEL

la acción de Habeas Data, no solo ha sido prevista como una herramienta para garantizar el derecho a la intimidad aunque limitado a las bases de datos privados también busca garantizar el acceso a los registros datos y archivos en manos de agentes del Estado y otras instituciones que por la función pública que desarrollan se han incluido entre las instituciones que les es aplicable la ley tutelando la libertad de información (ESQUIVEL 2004 Pág 113 114)

En ese mismo sentido lo ha reconocido el Pleno de la Corte Suprema de Justicia en fallo de 6 de junio de 2003 al señalar

Mediante el Habeas Data se pretende la tutela del derecho a la intimidad y la libertad de información En otros términos a través de la acción de Habeas Data, cualquier persona puede obtener si

información personal contenida, en archivos registros o expedientes que mantengan entidades publicas o que se elimine o corrija la informacion que sea incorrecta, irrelevante incompleta o desfasada, por lo que en este sentido constituye un mecanismo protector del derecho a la intimidad el cual explica la existencia de un ámbito propio y reservado frente a la acción y conocimiento de los demás necesario según las pautas de nuestra cultura para mantener una calidad de vida, También mediante la acción referida puede todo ciudadano solicitar y recibir de cualquier entidad publica, en el plazo legal (Artículo 7 de la Ley No 6) y con el costo que suponga lo pedido (Artículo 4 de la misma Ley) información de su interés siempre que ésta se enmarque en el respeto a la intimidad personal de los demás y que difusión no esté prohibida o sea de acceso restringido según la Ley www.organojudicial.gob.pa)

2.13.4 Motivo de la Acción de Habeas Data

El artículo 17 de la Ley No 6 del 22 de enero de 2002 se deja establecido en el Habeas Data se podrá promover cuando la información o dato personal no se le haya suministrado a quien la requirió o se suministró en forma insuficiente o de manera inexacta

Como se deduce van a ser tres los supuestos que de darse traerán como consecuencia el que se pueda interponer el Habeas Data, a saber

- Cuando ante la solicitud de una información sea esta de acceso público o de carácter personal el funcionario titular o responsable del registro archivo o banco de datos no haya suministrado lo solicitado
- Cuando pese a que lo requerido se suministró o fue de forma insuficiente

- Y cuando la informacion o dato ya sea publico o de caracter personal no es exacta o no corresponde a una información o dato correcto o ajustado a la verdad

En estos requerimientos lo que viene a fundamentar en ultima instancia el que se formule el Habeas Data, es la violacion desconocimiento o menoscabo del derecho que se tiene de acceso a la informacion o dato personal Como tal infracción es lesiva al derecho así reconocido es por lo que requiere se le brinde la tutela necesaria y efectiva a través de un mecanismo jurisdiccional lo que se logra con la accion de Habeas Data

2 13 5 Funcionario o Persona Contra la cual se Promueve la Acción de Habeas Data

La acción de Habeas Data tendrá como funcionario demandado en primer lugar el que es titular o responsable del registro archivo o banco de datos en el que se encuentra o se halla la informacion o dato personal requerido segun sea el caso

Reconocido así el derecho que tiene toda persona para solicitar y recibir informacion veraz y oportuna, en poder de las autoridades gubernamentales y de cualquier institucion y en especial cuando se trate de información personal de quien la reclama, ante el incumplimiento de proporcionar esta o cuando se haya suministrado de manera insuficiente o de forma inexacta, se promovera acción de Habeas Data contra el

funcionario que es el responsable de suministrar o permitir el acceso a la informacion o dato personal

Igualmente el Habeas Data también se podrá presentar contra quien es el custodio o responsable del manejo de la informacion que se recaba por parte de las empresas privadas que prestan o suministrar servicios publicos con carácter exclusivo o si se dedican a suministrar información

Esto ultimo tiene una gran relevancia, toda vez que amplia el marco de proteccion y supera así la tradicional concepcion en cuanto a considerar como unico infractor de los derechos fundamentales al Estado o a sus funcionarios en el ejercicio de sus funciones. Responde tal criterio a lo que en otras legislaciones ha venido a responder la accion de amparo frente a actuaciones de particulares

2 13 6 Tribunal Competente para Conocer del Habeas Data

La competencia para conocer de la accion de Habeas Data se establece en el articulo 18 de la Ley No 6 del 22 de enero de 2002 que dice

Articulo 18 La accion de Habeas Data será competencia de los Tribunales Superiores que conocen de la acción de Amparo de Garantías Constitucionales cuando el funcionario titular o responsabilidad registro o archivo o banco de datos tenga mando y jurisdiccion a nivel municipal o provincial

Cuando el titular o responsable del registro archivo o banco de datos tenga mando y jurisdiccion en dos o mas provincias o en

toda la Republica será de competencia del Pleno de la Corte Suprema de Justicia

De la norma transcrita se deduce que el conocimiento de la acción de Habeas Data es atribuida a la mas altas esferas jurisdiccionales del Órgano Judicial como lo vienen a ser los Tribunales Superiores de los Distritos Judiciales y la Corte Suprema de Justicia

En los Tribunales Superiores el Habeas Data será de competencia de los que conocen de la Accion de Amparo de los derechos constitucionales o fundamentales En el otro caso será al Pleno de este alto tribunal al cual correspondera dilucidar las causas que por razón de un Habeas Data se promueve ante esta, la Corte Suprema cuando el titular o responsable del registro archivo o banco de datos a quien habiéndose solicitado el acceso a alguno de los tipos de informacion o datos personales a los que se refiere la ley y no haya satisfecho adecuadamente tal requerimiento tenga mando y jurisdiccion en dos o mas provincias o en el ambito de toda la Republica

2 13 7 Formalidades para Promover la Acción de Habeas Data

Por la importancia que implica el tener acceso a los archivos registros o bancos de datos por el significado que para el sistema democrático tiene el conocimiento por parte de todos los que integran o componen la comunidad el manejo de la administración publica en su caracter amplio o general por lo que para la persona humana representa el tener control de la información o dato que sobre ella se haya recabado se parte del principio que para el ejercicio de la accion de Habeas Data, no se requiera para su

presentación de mayores formalidades. Se le da en cuanto a esto un tratamiento similar al del Amparo de Garantías Constitucionales.

Se establece en ese sentido en la primera parte del artículo 19 de la Ley 6 de 2002 que la acción de Habeas Data se promoverá sin formalidades y sin necesidad de abogado (esto lo reitera la Constitución Nacional en el artículo 44) lo que viene a simplificar su formulación ante los tribunales competentes para conocer de ésta, en procura de lograr un acceso rápido y sin mayores obstáculos a una tutela judicial efectiva en defensa de tan importantes derechos fundamentales como lo son el derecho a la información y el de la intimidad y dentro de éste el de la protección de los datos personales.

Por lo demás, esta concepción es consona con lo que en el artículo 212 de la Constitución se establece al disponer que las leyes procesales que se aprueben se inspirarán entre otros principios en el de la ausencia de formalismos y que el objeto del proceso es el reconocimiento de los derechos consignados en la Ley sustancial.

2.13.8 El Procedimiento de la Acción de Habeas Data

En el copiado artículo 19 de la ley en mención se deja consignado que la acción de Habeas Data se tramitara mediante procedimiento sumario y en lo que respecta a la sustanciación, impedimentos, notificaciones y apelaciones se aplicaran las normas que

para estas materias se regulan en el ejercicio de la acción de Amparo de Garantías Constitucionales

Significa lo anterior que serán aplicables las disposiciones que sobre cada uno de los aspectos a los que se aluden en el artículo 19 de la Ley 6 de 2002 tiene previsto el Código judicial para la acción de amparo garantía constitucional que regulada en el artículo 50 de la Constitución es desarrollada en el Título III del Libro IV del Código Judicial. Hay que entender que lo que tiene que ver con las normas que en materia de sustanciación impedimentos notificaciones y apelaciones que previstas con respecto al amparo han de aplicarse durante el trámite de la acción de Habeas Data, habrán de hacer consono con la concepción propia de este nuevo mecanismo de protección del derecho a la información y de los datos personales que no es otra que la de brindar la mayor eficacia en la tutela de dichos derechos particularidad de la que también está revestida, por lo demás la acción de amparo

Para el profesor RAMIRO ESQUIVEL (2004 Pág 159 a 166) el procedimiento para la acción de Habeas Data es como sigue la demanda únicamente podría ser declarada no admisible si la misma es manifiestamente improcedente o no estuviera debidamente formulada que en el caso de la acción de Habeas Data, dada su informalidad debe limitarse únicamente a observar los requisitos de legitimidad del actor en los que casos de que la información requerida sea de carácter confidencial restringido o reservado así como la facultad de representación en caso de que se este actuando en

nombre de una persona jurídica (moral) o a nombre de otro o que haya transcurrido el término de ley o se hubiere recibido una respuesta negativa o insatisfactoria (Art 2620 C J)

Una vez admitida la acción de Habeas Data, se requerirá al responsable del registro o base de datos que envíe la actuación o un informe acerca de los hechos que son materia de la acción quien deberá cumplir con la orden dentro de las dos (2) horas siguientes al recibo del requerimiento del Tribunal (Art 2621 C 3)

Cuando el demandado no resida en la sede del Tribunal enviará la actuación por el correo más inmediato o si fuere el caso enviará el informe vía telegráfica Asimismo si el demandante no reside en la sede del Tribunal podrá proponer la demanda por telégrafo y la confirmará por correo en el término de tres días (Art 2622 C J) Esta disposición debe ser interpretada en consonancia con lo dispuesto en el artículo 480 del Código Judicial que dispone que los escritos memoriales y peticiones pueden ser presentados por vía telegráfica o por cualquier medio moderno de comunicación siempre que pueda corroborarse la autenticidad de la firma del remitente lo que se hará a través de la presentación del documento original en la secretaría del Tribunal dentro de los tres días siguientes a la recepción del escrito transmitido

Si el demandado no cumple con la orden del Tribunal dentro del término legal el Tribunal practicará las pruebas que considere conducentes para aclarar los hechos lo que

incluye solicitar el envío de la información requerida y la resolución a través de la cual determina la clasificación de la información para determinar si la respuesta de la persona demandada, y si la resolución y determinación de la clasificación es conforme a derecho. Atendiendo a las pruebas aportadas y recabadas el Tribunal dictará su decisión prescindiendo de la actuación o del informe del demandado (Art 2623 C J)

Notese que del procedimiento hasta aquí descrito según debe interpretarse al ser aplicado a la acción de Habeas Data, he omitido lo referente a la suspensión de la orden atacada o acusada, toda vez que ésta se trata de una característica propia de la acción de Amparo que no comulga con la naturaleza del acto atacado con la acción de Habeas Data ya que si bien la decisión del demandado negando el acceso a la información conlleva una orden de no hacer mandamiento que no necesariamente ocurriría en caso de que la respuesta sea insatisfactoria, la acción de Habeas Data no contempla un procedimiento cautelar que conlleve la suspensión del acto para evitar que se produzca un daño grave e inminente o que producido siga perpetuándose y agravándose con el transcurrir del tiempo por lo que estas disposiciones no le son aplicables.

Ello es así porque si se aplicare el procedimiento cautelar implicaría la suspensión de la orden atacada (si la hubiere) por lo que el titular o responsable del registro o base de datos ante la suspensión de su decisión tendría que entregar la información y una vez entregada no tendría sentido continuar con la acción de Habeas Data, con los evidentes perjuicios que conllevaría si la información resulta ser de carácter

confidencial o restringido y fue entregada a un actor que no es el titular o legalmente autorizado para ello. Por tal razón, estas disposiciones no le son aplicables.

La única excepción que podría presentarse que justificare la aplicación del procedimiento cautelar y remota por cierto, ya que además de que constituiría, por lo menos, una falta administrativa, y seguramente un delito, es que el encargado del registro o base de datos decidiera destruir o eliminar la información o existiere temor justificado de que ello podría ocurrir. Por lo que comunicado el tribunal de esta situación, tendría la facultad de ordenar suspender provisionalmente dicha acción.

El Capítulo IV norma que una vez el demandado cumpla con el requerimiento, el Tribunal fallará dentro de los dos (2) días siguientes, denegando o concediendo la acción de Habeas Data (Art. 2624 C. 3).

Dictado el fallo, la decisión será notificada a las partes por edicto, que es fijado por el término de cinco (5) días (Art. 1001 C. 3), pudiendo cualquiera de estos apelar. Si la decisión la dictó un Tribunal Superior, ya que las decisiones del Pleno de la Corte Suprema de Justicia son irrecurribles, para lo cual disponen del término de un (1) día a partir de la notificación, recurso que será concedido en el efecto devolutivo si la decisión del Tribunal revoca la decisión tomada por el funcionario y en el efecto suspensivo si la confirma. Esta apelación podrá ser sustentada, es decir, queda a discreción del apelante sustentar el recurso, debiendo ser enviado el proceso al superior Corte Suprema de

Justicia, aun cuando no hubiere sido sustentada (Art 2625 C J) Recibido el proceso en segunda instancia, por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, sin mas trámites resolvera el asunto dentro del término de 3 dias con vista en lo actuado (Art 2626 C J)

Del Capitulo Quinto solamente son aplicables al procedimiento de Habeas Data, los articulos 2628 al 2630 delCodigo Judicial ya que las otras normas los articulos 2627 2631 y 2632 se refieren a sanciones contra el funcionario demandado en caso de que su decision sea revocada o actue en rebeldia, situaciones que se encuentran reguladas en los articulos 20 al 23 de la Ley de Transparencia

Las aludidas normas del Código Judicial establecen que los Magistrados que conozcan la acción de Habeas Data se manifestaran impedidos cuando sean parientes dentro del segundo gado de consanguinidad y primero de afinidad de alguna de las partes o de sus apoderados o haya participado en la expedición del acto (Art 2628 C J) pudiendo interponerse unicamente dentro del proceso de Habeas Data incidentes de recusación por las causales de impedimentos señaladas (Art 2629 C J)

Por ultimo las providencias que se dicten del proceso Habeas Data son inimpugnables salvo la resolucio n que no admita la accio n Tampoco se pueden admitir de Habeas Data contra el mismo demandado y contra la misma resolucio n o respuesta a lo solicitado aunque se propongan ante tribunales distintos produciendo la sentencia de cosa juzgada (Art 2630)

Ahora bien la controversia en cuanto a la aplicación del procedimiento de la acción de Amparo de Garantías a la acción de Habeas Data, se origina al aplicarse algunos principios del primero sean que se encuentren fundamentados en la ley o tengan un desarrollo jurisprudencial que por su naturaleza no le son aplicables a la acción de Habeas Data ya que terminarían por desnaturalizar esta institución procesal

Un ejemplo de esto es la aplicación del principio de preferencia de la vía Administrativa, creado por la jurisprudencia en una especie de ampliación del principio de agotamiento de los medios de impugnación este último si fue recogido en el procedimiento de Amparo en el artículo 2617 del Código Judicial Así el principio de preferencia de la vía Administrativa, establece que al tratarse de un acto administrativo la orden atacada, deben optarse por dirigir la disconformidad a la jurisdicción Contenciosa Administrativa, y no utilizar la vía de la acción de Amparo

2.13.9 Sanciones

El Capítulo VI de la Ley No. 6 del 22 de enero de 2002 establece las sanciones que deberán ser impuestas al responsable del registro que incurra en algunos de los supuestos previstos en la ley las cuales se dividen según ante quien incurra el responsable en la conducta activa u omisiva, ya sea ante el solicitante obstaculizar suprimir destruir y alterar o ante el tribunal de Habeas Data desacato las cuales consisten en multas elevadas sin descartar otras sanciones administrativas y reclamaciones civiles y dependiendo del caso ser sujeto de responsabilidad penal

Las multas a sanciones a imponer a los infractores de la Ley dependeran en cuál de los supuestos ha incurrido el funcionario o persona a quien se le ha requerido la informacion oscilando entre una multa equivalente al doble del salario mensual que devenga a una multa minima equivalente al doble del salario mensual es decir que en el primer supuesto la norma no deja a discrecion del juzgador determinar cuánto será la multa, al haberse fijado en dos veces el salario mensual mientras que en el segundo caso la multa puede superar el doble del salario mensual nunca menor pero partiendo de la base de dos veces el salario

Con la finalidad de promocionar concienciar y educar sobre la importancia de la participacion ciudadana el monto de las multas impuestas por las sanciones será remitido a una cuenta especial de la Defensoria del Pueblo incluida dentro de su presupuesto para destinarla a los programas de participación ciudadana (Art 23 de la Ley de Transparencia)

El articulo 22 de la mencionada ley dispone que el funcionario que obstaculice el acceso a la información destruya o altere un documento o registro sin perjuicio de las responsabilidades administrativas y penales derivadas del hecho sera sancionado con multa equivalente a dos veces el salario mensual que devenga

El citado articulo 22 en referencia recoge varias conductas o acciones en las que puede incurrir el funcionario o responsable del registro archivo o base de datos siendo

una mas amplia el obstaculizar el acceso a la información y otras mas especificas como lo son el destituir o alterar los documentos o registros

Se entiende por obstaculizar cualquier impedimento dificultad o inconveniente que para acceder a la informacion de carácter publica o aquella de caracter confidencial o reservado presente ejecute realice o permita que ocurra, el funcionario o responsable del registro frente al solicitante

El concepto de destruir comprende la de hacer desaparecer estropear dañar reducir a pedazos cenizas inutilizar el soporte y ocasionarle un grave dano al registro base de dato o documento que ha sido solicitado por la persona, por lo que conlleva una intencion del funcionario o responsable del registro de hacer desaparecer la informacion requerida

Así mismo por alterar se entiende la acción desplegada por el funcionario publico o responsable del registro de variar modificar o cambiar ya sea el contenido de la información el formato o la formalidad con la cual fue originalmente

Esta conducta atenta directamente contra el principio de veracidad que se deriva del derecho de acceso a la información toda vez que la entrega de una informacion alterada o falsa además de constituir una negativa a acceder a la información veridica constituye un engaño al solicitante quien confía en la fe publica que por presuncion se

encuentra depositada en los actos documentos e informaciones emitidas por los funcionarios publicos o en la autenticidad del documento entregado por el particular

El desacato se encuentra regulado en el articulo 20 de la Ley de Transparencia estipulando la norma que el funcionario requerido por el Tribunal que conoce del Recurso de Habeas Data, el cual incumpla con la obligación de suministrar la informacion incurrirá en desacato y será sancionado con multa mínima al doble del salario mensual que devenga

La norma es clara en definir el desacato como el incumplimiento del funcionario ante el requerimiento del Tribunal de Habeas Data, de suministrarle la informacion que le ha sido solicitada, a proposito de poder resolver la accion promovida, y a partir de la misma, determinar si la información solicitada es de carácter publico es de acceso limitado o restringido

El desacato al Tribunal puede darse en dos momentos distintos al ser requerido el funcionario o responsable de los registros que conteste el informe y remita la documentación pertinente para poder resolver el fondo de la pretensión formulada a traves de la accion de Habeas Data, desconociendo este mandamiento o luego de haberse concedido la accion a favor del solicitante ordenándosele entregar la información a este pero incumple con la orden girada

La Ley No 6 del 22 de enero de 2002 no regula el procedimiento a seguir para la imposición de la sanción por desacato vacío legal que deberá ser suplido con las disposiciones del Código Judicial que en su Capítulo XVII del Libro II regula lo concerniente al desacato a los tribunales sanción que de acuerdo al artículo 1936 del Código Judicial será impuesta a solicitud de parte interesada por querrela, previa presentación de prueba sumaria del hecho que constituye desacato

2.14 Consideraciones Finales del Habeas Data en Panama

Con la Constitución de 1904 en el caso del Habeas Corpus y a partir de la Constitución de 1941 en el de la acción de amparo de las garantías constitucionales nuestro ordenamiento jurídico contaba con los mecanismos idóneos para la tutela judicial de los derechos fundamentales. Por ello en el evento en que se privara a una persona de su libertad corporal en forma arbitraria, con abuso de parte de quien hubiera dispuesto tal medida cautelar personal la detención que se sufría podía ser objeto de cuestionamiento por medio del habeas data y en consecuencia recuperar la libertad corporal una vez verificado que la detención preventiva se haya emitido no conforme ni a la Constitución ni a la ley

Esta garantía constitucional de defensa de tan importante derecho fundamental como lo es la libertad corporal vino a reforzarse cuando a partir de sentencia de 18 de noviembre de 1991 mediante una interpretación extensiva y de protección de la libertad personal se incorpora una de las modalidades del habeas corpus ya reconocida en la

doctrina y en otras legislaciones por la cual lo que se busca es proteger la libertad física de una persona, cuando contra esta se ha girado una orden de detención preventiva y ésta no se ha concretado o ejecutado todavía

Al respecto el Pleno de la Corte Suprema de justicia en el fallo citado señaló que pese al aparente estancamiento de nuestra legislación en la regulación de los derechos fundamentales la Corte Suprema de Justicia, considere que el mandamiento de habeas corpus constituye la vía procesal idónea para enervar las órdenes de detención arbitrarias o ilegales aun en los supuestos en que la referida orden no se haya hecho efectiva (REGISTRO JUDICIAL Noviembre 1991 Pág 31) introduciéndose con tal posición el llamado habeas corpus preventivo

Similar criterio siguió dicha corporación de justicia, cuando por medio de los fallos de 11 de agosto de 1993 y del 24 de agosto de 1994 como por el 6 de noviembre de 1995 entre otros ha dado cabida al habeas corpus correctivo por el cual lo que se pretende es dar protección a quien estando privado de su libertad personal es objeto de tratos lesivos a su dignidad o a su integridad física o cuando el centro carcelario en el que se encuentra, le impide el ejercicio de su derecho a la defensa Tanto en un caso como en el otro al haberse incorporado tales modalidades del habeas corpus vía la jurisprudencia, se hizo respondiendo a una posición o actitud consona con la doctrina y filosofía propia del Estado Constitucional de Derecho

El reconocimiento y consiguiente incorporación de estas modalidades del habeas corpus ha sido posible al tenerse en cuenta al interpretarse la Constitución, el principio de interpretación constitucional del favor libertatis adoptado por la Corte Suprema de Justicia en ejercicio de su función constitucional como guardiana de la supremacía de la Constitución concretamente cuando de la protección de los derechos fundamentales o constitucionales se ha tratado principio que entraña que en el caso de los derechos fundamentales y sus garantías estos o estas al ser previstos en la Constitución tienen un contenido mínimo que puede ser expandido por la interpretación constitucional (HOYOS 1993 Pag 23)

Con relación al principio de interpretación constitucional en mención señalaba o sostenía el Pleno de la Corte Suprema de Justicia que

de conformidad con el principio de interpretación constitucional favorecedor de los derechos fundamentales y de sus garantías (favor libertatis) que tanto los derechos como las garantías de los mismos previstas en la Constitución son mínimos y que pueden ser ampliados por la Ley o por la interpretación constitucional de la Corte Suprema (REGISTRO JUDICIAL Febrero 1998 Pág 87)

Pues bien dentro de esa línea de evolución y perfeccionamiento es la que ha venido a dar como resultado que haya sido posible regular a través de la Ley No 6 de 22 de enero del 2002 y la reforma a la Constitución mediante el Acto Legislativo No 1 del 27 de julio del 2004 en su artículo 44 la Acción de Habeas Data con la cual como se ha indicado se viene a fortalecer y ampliar los mecanismos de protección de los derechos

fundamentales al ser esta una garantía prevista específicamente para tutelar el derecho a la información de toda persona y el de la protección de la información o datos personales de cada persona en particular

2.15 Jurisprudencia

A continuación tenemos a bien presentar algunos extractos de los fallos emitidos por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia

Por considerarlos de importancia debemos dejar constancia que en la parte de anexos presentamos fallos completos en que se han dado salvamentos de votos de los magistrados que no están de acuerdo con la decisión escogida por la mayoría

Estos extractos los hemos recogidos de los Registros Judiciales esperamos que los mismos sean de gran ayuda

ACCIÓN DE HABEAS DATA DESDE LA PERSPECTIVA DOCTRINAL M P CESAR PEREIRA BURGOS CORTE SUPREMA DE JUSTICIA PLENO 23 DE ABRIL DE 2002

En términos sencillos se puede colegir que la acción de habeas data, desde la perspectiva doctrinal se proyecta como un instrumento protector de defensa o tutela, a

un derecho fundamental específico el derecho a la intimidad que surge como consecuencia del avance de las nuevas técnicas de recopilación almacenamiento y procesamiento de información Su ámbito de protección abarca concretos propósitos

1) el libre acceso a la información que implica acceder a bancos o archivos de datos a objeto de conocer lo que en ellos se lleva y la finalidad de su recopilación 2) la confidencialidad de la información personal que implica impedir que cualquiera persona pueda acceder a datos personales sin causa justificada 3) la exhibición de registros en los que estén incluidos datos personales que implica el conocimiento de información que les concierne para requerir su corrección restricción supresión o actualización y 4) garantizar que los datos se mantengan tal como se encuentran registrados es decir que no sean interconectados con otros o sometidos a operaciones de transformación sin que medie motivación justificada

La solicitud hecha a la autoridad acusada esta en copia simple y no cotejada como el original (Artículo 479 del Código Judicial) Que la persona que ha impuesto la acción está solicitando una información que no es personal no ha aportado medio probatorio que indique que posee interés en la información que pide tampoco documentos que evidencie que representa alguna organización o institución que se tenga el mencionado interés

ACREDITAR INTERES LEGITIMO
M P ROGELIO A FÁBREGA ZARAK CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
PLENO
06 DE SEPTIEMBRE DE 2002

El artículo 2 de la Ley 6 de 2001 establece en el Capítulo II denominado

Libertad y acceso a la Información que toda persona tiene derecho a solicitar sin necesidad de sustentar justificación o motivación alguna la información de acceso público en poder o conocimiento de las instituciones indicadas en la presente Ley

La información de acceso público es definida como todo tipo de información en manos de agentes del Estado o de cualquier institución pública que no tenga restricción es decir a la cual tiene derecho toda persona a solicitar y recibir

De otra parte el artículo 11 del Capítulo III denominado Obligación de Informar por Parte del Estado establece que

Será de carácter público y de libre acceso a las personas interesadas la información relativa a la contratación y designación de funcionarios planillas gastos de representación costos de viajes emolumentos o pagos en concepto de viáticos y otros de los funcionarios del nivel que sea y/o de otras personas que desempeñan funciones públicas (Destaca la Corte)

El Pleno llega a la conclusión de que la información solicitada por el Licenciado Cochez se refiere a materias señaladas en el artículo II de la citada Ley 6^{ta} de 2001 y en estos casos se requiere como expresamente lo señala la ley acreditar un interés legítimo respecto de la información solicitada, circunstancia que reitera el Decreto Ejecutivo No 124 de 21 de mayo de 2002 singularmente su artículo 8^o

CONCEPTO DE INTERÉS LEGÍTIMO
M P ROGELIO FÁBREGA ZARAK. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
PLENO
07 DE ABRIL DE 2003

En dicha sentencia se manifiesta que de acuerdo a M Sánchez Morón el interés legítimo es una situación jurídica activa que se ostenta por relación a la actuación de un tercero y que no supone a diferencia del derecho subjetivo una obligación correlativa de dar hacer o no hacer exigible de otra persona, pero si comporta la facultad del interesado de exigir el respeto del ordenamiento jurídico y en su caso de exigir una reparación de los perjuicios antijurídicos que de esa actuación se deriven. En otras palabras existe interés legítimo en concreto el Derecho administrativo cuando una conducta administrativa determinada es susceptible de causar un perjuicio o generar un beneficio en la situación fáctica del interesado tutelada por el Derecho siendo así que este no tiene un derecho subjetivo a impedir esa conducta o a imponer otra distinta, pero si exigir a la Administración y a reclamar de los Tribunales la observancia de las normas jurídicas cuya infracción pueda perjudicarlo (voz Interés legítimo en Enciclopedia Jurídica Básica, Tomo III Editorial Civitas 1995 Pág. 3661). Esta concepción ha sido incorporada a la Ley N° 38 de 2000. Constituye un título de legitimación que porta un petitorio al lado del derecho subjetivo (Art. 66 de la Ley 38 de 2000) de promover procedimientos administrativos a quien se puede ver beneficiado o afectado un interés legítimo con el acto reclamado.

**DEBIDO PROCESO PARTE INTERESADA PUEDE
SOLICITAR INFORMACIÓN CONFIDENCIAL
P JOSE A TROYANO CORTE SUPREMA DE JUSTICIA PLENO
30 DE JUNIO DE 2003**

Finalizando el análisis de esta acción la Corte considera importante destacar el hecho de que al negársele al señor Aguilar las copias autenticadas del expediente que en su contra se sustancia ante la Dirección Nacional de Ingresos de la Caja de Seguro Social no solo se conculco el derecho de éste de acceder a su información contenido en la Ley No 6 de 22 de enero de 2002 sino que también se actuó en contra del principio constitucional del debido proceso ya que este hecho ha imposibilitado que el mismo pueda desarrollar una adecuada defensa en el proceso debido a que desconoce el contenido del expediente dicha actuación pugna evidentemente con toda garantía constitucional y principios legales que conforman nuestro sistema de derecho hecho por el cual el Pleno de la Corte Suprema de justicia considera que este recurso es procedente

**DECLARACIÓN JURADA PATRIMONIAL ES MATERIA
CONFIDENCIAL
M P ROGELIO FABREGA ZARAK. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA PLENO
14 DE MAYO DE 2002**

El solicitante promueve acción de habeas data Contra el Contrato General de la Republica para dicho funcionario le entregue copia de la declaración jurada de la declaración patrimonial del legislador Enrique Garrido pasado 30 días el funcionario no hizo la entrega de la documentación solicitada

Este pleno arriba a la conclusion que el objeto sobre el que recae la acción que nos ocupa constituye materia confidencial por tratarse de información contenida en los registros individuales o expedientes de personal o de recursos humanos de los funcionarios (artículo No 1 numeral 5 de la Ley 6 de 2002) cuyas copias reposan a la Contraloría General de la República (Artículo No 3 de la Ley 59 de 1999) Destinada a las investigaciones sobre enriquecimiento injustificado (artículo No 5) que regula la ante dicha ley

CAPITULO TERCERO
MARCO METODOLÓGICO

3 1 Tipo de Investigación

La palabra investigación es definida como averiguamiento indagacion busqueda o inquisición de un hecho desconocido o de algo que se quiere inventar Pero existen varios tipos de investigacion pero nuestro trabajo será realizado en investigaciones de tipo juridico y social

3 1 1 Investigacion en Ciencias Sociales

Enriqueta Davis nos define la investigación en ciencias sociales como ‘toda actividad que va dirigida a aumentar nuestra capacidad para entender predecir y controlar acontecimientos de una clase determinada de los fenomenos sociales

En esta investigación utilizaremos un estudio descriptivo donde describiremos los aspectos más relevantes del tema respecto a su origen aplicacion y evolución Tambien procederemos a analizar la incorporación de la accion del Habeas Data en nuestra legislación para determinar si esta constituye un mecanismo eficaz de proteccion del derecho a la intimidad y la libertad de información

3 1 2 Investigación en Ciencias Juridicas

La ciencia juridica es aquella que se encarga de la normatividad y actividad del Derecho o sea que busca el analisis o interpretación de las normas así como tambien la aplicacion de las normas juridicas textos legales y jurisprudencia, pues busca adecuar la norma juridica a la realidad social

Nuestro Código Civil contiene en un Título Preliminar ciertas reglas de interpretación jurídica bajo el nombre de Interpretación y Aplicación de la Ley

La interpretación de las leyes no es más que la aclaración fundada de la letra y del espíritu de las normas legales para conocer su verdadero sentido y determinar su alcance o eficacia general o en un caso particular La hermenéutica legal es la ciencia que interpreta los textos legales y fija su verdadero sentido

Según la hermenéutica legal las normas que establece el Código Civil panameño para la interpretación de las leyes se aplica a las otras ramas del derecho

Nuestra investigación se centrará en la aplicación de la Ley N° 6 del 22 de enero de 2002 de la cual podemos saber cuáles son los tipos de información a la que se tiene acceso y que lo que se pretende tutelar con esta acción

3.2 Fuentes y Sujetos de Información

Son los hechos, documentos o medios a los que acude el investigador y que le permiten obtener información que le facilitara la comprobación o no de la hipótesis planteada

3.2.1 Fuentes Materiales

La constituyen los libros, registros judiciales, revistas, folletos, legislación nacional e internet

3 2 1 1 Fuentes Primarias

Es la información oral o escrita que es recopilada directamente por el investigador a través de relatos escritos transmitidos por los participantes en un suceso o acontecimiento

3 2 1 2 Fuentes Secundarias

Es la información escrita que ha sido recopilada y transcrita por personas que han recibido tal información a través de otras fuentes escritas

Haremos referencia a la Constitución Política de la Republica de Panamá de 1972 y a la Ley N 6 de 2002 la cual dicta las normas sobre la transparencia y establece la Accion de Habeas Data Además utilizaremos los fallos más relevantes proferidos por la Corte Suprema de Justicia en relación a la acción de Habeas Data

3 2 1 2 1 Contenido Bibliográfico

Lo constituyen los libros revistas y folletos a revisar que nos dan a conocer los criterios doctrinales que nos plantean los autores nacionales como extranjeros en materia de Habeas Data

3 2 2 Sujetos de la Información

Para estudiar la acción de Habeas Data y el procedimiento utilizado en nuestra legislación a fin de interponer la acción se hace necesario delimitar los sujetos que

participan dentro del sistema de justicia a nivel nacional para ello nuestra población muestra se compondría de los agentes que interactúan dentro del sistema de justicia como Magistrados de Tribunales Superiores Jueces de Circuito Fiscales de Circuito y Abogados

3 3 Variables

Variable es una propiedad que puede variar y cuya variación es susceptible de medirse

Las variables adquieren valor para la investigación cuando pueden ser relacionadas con otras o formar parte de una hipótesis o una teoría

3 3 1 Variable Independiente

Son los factores que en virtud de la teoría, se supone son los causantes directos de un determinado fenómeno o sea aquellas que se utilizan en la investigación con el objeto de explicar el grado o nivel en que actúa una variable dependiente Tiene una función explicativa y se comportan como estímulos o preguntas

Nuestra variable independiente sería la acción de Habeas Data como mecanismo eficaz de protección al derecho a la intimidad y el derecho a la libertad de información

3 3 1 1 Definición Conceptual

La definición conceptual es la que define el término o variable con otros términos

La acción de Habeas Data es la que se utiliza para solicitar judicialmente la exhibición de los registros (públicos o privados) en los cuales están incluidos sus datos personales o los de su grupo familiar para tomar conocimiento de su exactitud al requerir la rectificación la supresión de datos inexactos u obsoletos o que impliquen discriminación

3.3.1.2 Definición Instrumental

Esta es la definición que tiene como finalidad establecer los medios a utilizarse para recolectar toda la información requerida

Nuestros instrumentos serían la Constitución Política de la República de Panamá de 1972 (Artículo 44) y la Ley N° 6 del 22 de enero de 2002 que se refiere al reconocimiento del derecho de acceso a la información ya sea esta de carácter público como a los datos personales la obligación que tiene el Estado de informar en cuanto a su gestión la información que es de carácter confidencial y la de acceso restringido entre otras materias así como el derecho a la intimidad en lo que a datos confidenciales o personales se trata

3.3.1.3 Definición Operacional

Esta definición constituye el conjunto de procedimientos que describe las actividades que un observador debe realizar para recibir las impresiones sensoriales las cuales indican la existencia de un concepto teórico en mayor o menor grado. En otras

palabras específica que actividades u operaciones deben realizarse para medir una variable

Para verificar la efectividad de la acción de Habeas Data, como mecanismo de protección del derecho a la intimidad y el derecho a la información se realizarán encuestas las cuales se analizarán para con la información obtenida medir las variables de nuestra hipótesis

3 3 1 3 1 Indicadores

Los indicadores son el medio utilizado para realizar un desglose de las variables en forma lógica y que la misma permitirá en un momento dado conocer todas sus partes en forma separada

<i>VARIABLE</i>	<i>INDICADORES</i>
La Acción de Habeas Data	Conocimiento del Habeas Data Requisitos para la interposición Habeas Data Propio e Impropio Funcionario Público y Particular Tribunal Competente Procedimiento de la acción Regulación de Acción de Amparo Formalidades de la Acción

3 3 2 Variable Dependiente

A la variable dependiente se le identifica como el factor que en virtud de la teoría, es condicionada por otro factor. Son indicativas y se comportan como efectos o resultados de aquella que se indaga.

Nuestra variable dependiente es el derecho a la intimidad y el derecho a la información. Derechos que se supone el Habeas Data protege.

3 3 2 1 Definición Conceptual

La definición conceptual de nuestras variables dependientes es:

- **Derecho a la Intimidad** Es el derecho de la persona a mantener intacta la esfera de vida íntima en una sociedad como es la tecnología, en la cual todo se convierte en objeto de información.
- **Derecho de Libertad de Información** Es aquel que tiene cualquier persona de obtener información sobre asuntos en trámite en curso, archivos, expedientes, documentos, registros, decisión administrativa o constancia de cualquier naturaleza en poder de las instituciones.

3 3 2 2 Definición Instrumental

Realizaremos un estudio de la jurisprudencia panameña sobre los fallos emitidos por la Corte Suprema de Justicia en casos donde se presenta la acción de Habeas Data, la forma de presentarla, lo que se pide, etc. Además, un estudio del por qué o cuáles son los

motivos por los que muchas personas desconocen el procedimiento y aplicación del Habeas Data

3 3 2 3 Definicion Operacional

Consiste en poder medir cuales son los datos personales o confidenciales a los cuales se tiene acceso y a cual no con el derecho a la libertad de informacion sin violentar el derecho a la intimidad de los datos personales de estas personas

3 3 2 3 1 Indicadores

Los indicadores de dicha variable son

VARIABLE	INDICADORES
a Derecho a la Intimidad	1 Protección de datos personales a) Informacion de acceso libre
b Derecho de libertad de informacion	b) Información confidencial c) Informacion de acceso restringido

3 4 Descripción de Instrumentos

Los instrumentos a utilizar en nuestra investigacion para medir las variables van a ser encuestas con cuestionario o preguntas abiertas o cerradas en relación así la acción es un mecanismo eficaz de protección del derecho a la intimidad y la libertad de información Así como entrevistas a jueces magistrados etc

Entre las preguntas que se haran en el cuestionario o encuesta estan

- ¿Conoce usted la Ley que dicta las normas para la transparencia en la gestion publica y establece la accion de Habeas Data?
- ¿Nuestro ordenamiento juridico establece los requisitos para la interposición de la accion de Habeas Data?
- ¿Sabe usted contra quien puede promoverse el Habeas Data?
- Considera usted que el Habeas Data es una garantia eficaz de proteccion de datos

Se procederá a la recolección de datos para revisarlos clasificarlos y realizar la tabulación de los datos dónde se obtendran los resultados en porcentajes estimados a través del computador para finalmente presentarlos en sus respectivas graficas circulares

3 5 Diseño de la Investigación

El término diseno se refiere al plan o estrategia concebida para responder a las preguntas de investigacion El diseño senala al investigador lo que debe hacer para alcanzar sus objetivos de estudio contestar las interrogantes que se ha planteado y analizar la certeza de las hipotesis formuladas en un contexto en particular

Nuestra investigación es holistico inductiva de campo ya que la investigación o recopilacion de datos se hará por medio de encuestas para así poder estudiar si de verdad el Habeas Data es eficaz o efectivo en la protección del derecho de libertad y el derecho a la intimidad

CAPITULO IV

**ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
DE LOS RESULTADOS**

4.1 Presentación de Resultados

La muestra que respondió las preguntas de la encuesta estuvo conformada por cuatro estratos: Abogados Fiscales de Circuito, Jueces de Circuito Penales y Magistrados del Tribunal Superior.

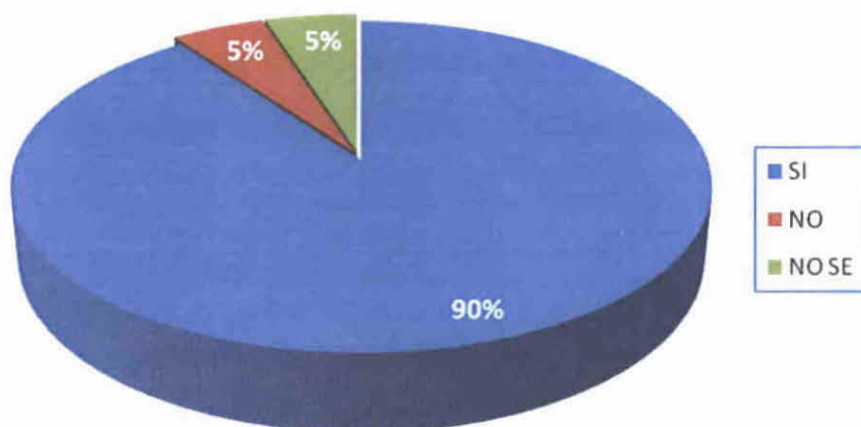
CUADRO No 1

FUNCIONARIOS	TOTAL	%	¿Conoce usted la ley que dicta normas para la transparencia en la gestión pública y establece la acción de Habeas Data?							
			SÍ	%	NO	%	NO SE	%	S/R	/
Abogados	20	13	18	90	1	5	1	5		
Fiscales de Circuito	6	100	6	100	0	0	0	0		
Jueces de Circuito	9	100	9	100	0	0	0	0		
Magistrados del Tribunal Superior	4	67	4	100	0	0	0	0		
Total	39		37	98	1	1	1	1		

En relación a esta pregunta sobre el conocimiento de la acción de Habeas Data, el instrumento se aplicó a veinte (20) Abogados en la cual dieciocho (18) manifestaron que sí conocían la acción de Habeas Data, lo que representa el 90% de los encuestados, uno (1) no la conocía presentando el 5% y uno (1) respondió no sé o que representa el 5% de los encuestados. Se le aplicó a seis (6) Fiscales de Circuito en la cual los seis (6) manifestaron conocer acción de habeas data, lo que representa el 100% de los encuestados. Se le aplicó a nueve (9) Jueces de Circuito en la que los nueve (9) expresaron conocerle lo que representa el 100% de los encuestados. Se le aplicó a cuatro (4) Magistrados del Tribunal Superior la cual los cuatro (4) manifestaron conocer lo que representa el 100% de los encuestados.

CONOCIMIENTO DEL HABEAS DATA

GRÁFICA No. 1
Conocimiento del Habeas Data

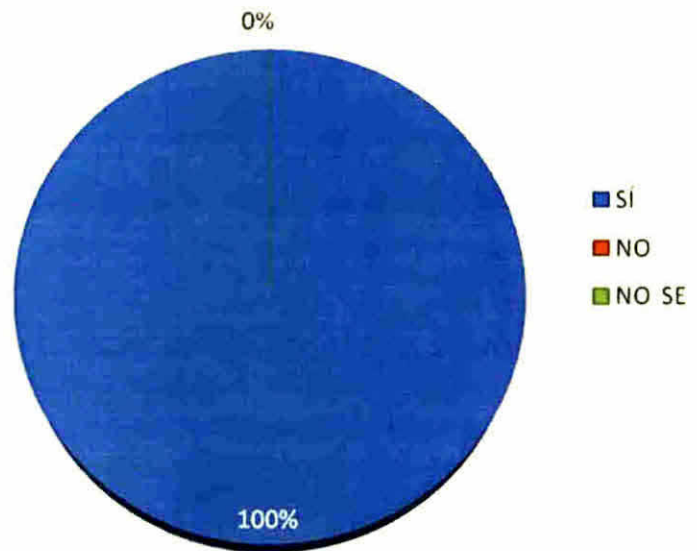


Fuente: Instrumento aplicado a Abogados

RESPUESTA	CANTIDAD	TOTAL (%)
SÍ	18	90
NO	1	5
NO SE	1	5

CONOCIMIENTO DEL HABEAS DATA

GRÁFICA No. 2
Conocimiento del Habeas Data

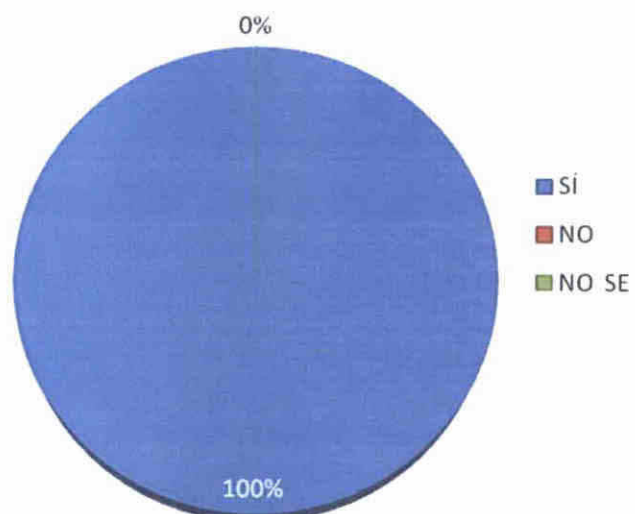


Fuente: Instrumento aplicado a Fiscales de Circuito

RESPUESTA	CANTIDAD	TOTAL (%)
SÍ	6	100
NO	0	0
NO SE	0	0

CONOCIMIENTO DEL HABEAS DATA

GRÁFICA No. 3
Conocimiento del Habeas Data

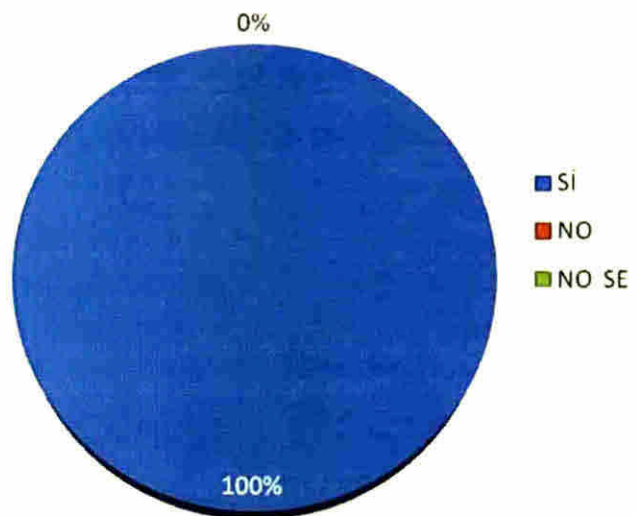


Fuente: Instrumento aplicado a Jueces

RESPUESTA	CANTIDAD	TOTAL (%)
SÍ	9	100
NO	0	0
NO SE	0	0

CONOCIMIENTO DEL HABEAS DATA

GRÁFICA No. 4
Conocimiento del Habeas Data



Fuente: Instrumento aplicado a Magistrados

RESPUESTA	CANTIDAD	TOTAL (%)
SÍ	4	100
NO	0	0
NO SE	0	0

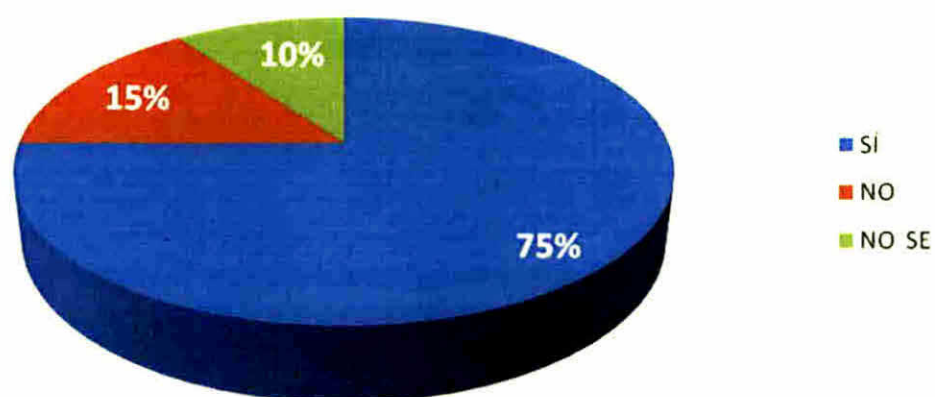
CUADRO No 2

FUNCIONARIOS	TOTAL	%	¿Establece nuestro ordenamiento jurídico de manera taxativa los requisitos para la interposición de la acción de Habeas Data?							
			SÍ	/	NO	%	NO SE	/	S/R	/
Abogados	20	13	15	75	3	15	2	10		
Fiscales de Circuito	6	100	5	83	1	17	0	0		
Jueces de Circuito	9	100	6	67	3	33	0	0		
Magistrados del Tribunal Superior	4	67	2	50	2	50	0	0		
Total	39		28	69	9	29	2	2		

Sobre los requisitos que establece nuestro ordenamiento jurídico para la interposición de la acción de Habeas Data el instrumento se aplico a veinte (20) Abogados quince (15) manifestaron que si establece tentativamente los requisitos lo que representa el 75% tres (3) manifestaron que no lo que representa el 15% dos (2) señalaron no se lo que representa el 10% de los encuestados se le aplico a seis (6) Fiscales de Circuito cinco (5) respondieron que si lo que representa el 83% uno (1) manifestó que no lo que representa el 17% de los encuestados se le aplico a nueve (9) Jueces de Circuito seis (6) respondieron que si lo que representa el 67% tres (3) respondieron que no lo que representa el 33% de los encuestados se le aplico a cuatro (4) Magistrados del Tribunal Superior dos (2) respondieron que si lo que representa el 50% y dos (2) respondieron que si lo que representa el 50% de los encuestados

REQUISITOS PARA LA INTERPOSICIÓN DE LA ACCIÓN DE HABEAS DATA

GRÁFICA No. 5
REQUISITOS PARA LA INTERPOSICIÓN
DE LA ACCIÓN DE HABEAS DATA

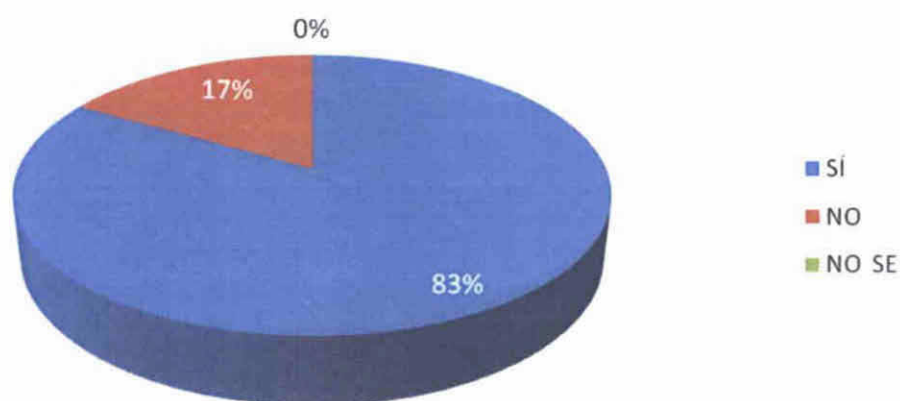


Fuente: Instrumento aplicado a Abogados

RESPUESTA	CANTIDAD	TOTAL (%)
SÍ	15	75
NO	3	15
NO SE	2	10

REQUISITOS PARA LA INTERPOSICIÓN DE LA ACCIÓN DE HABEAS DATA

GRÁFICA No. 6
REQUISITOS PARA LA INTERPOSICIÓN
DE LA ACCIÓN DE HABEAS DATA

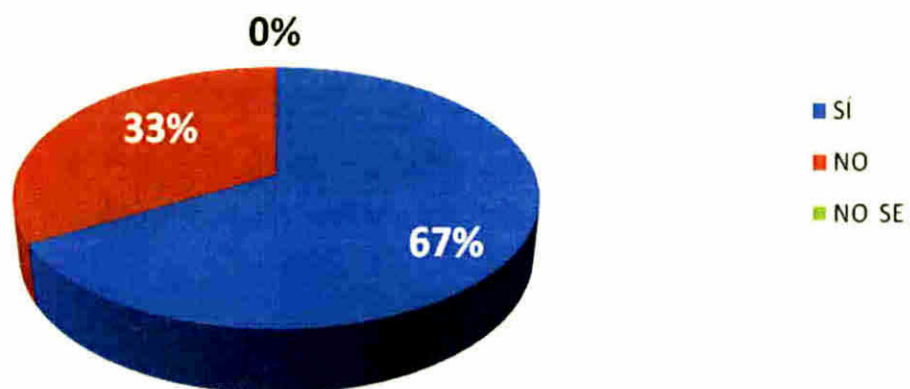


Fuente: Instrumento aplicado a Fiscales de Circuito

RESPUESTA	CANTIDAD	TOTAL (%)
SÍ	5	83
NO	1	17
NO SE	0	0

REQUISITOS PARA LA INTERPOSICIÓN DE LA ACCIÓN DE HABEAS DATA

GRÁFICA No. 7
REQUISITOS PARA LA INTERPOSICIÓN
DE LA ACCIÓN DE HABEAS DATA

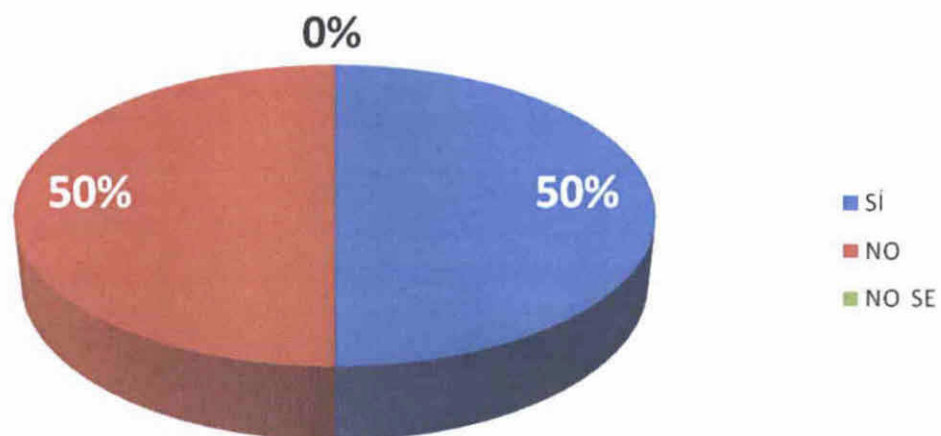


Fuente: Instrumento aplicado a Jueces

RESPUESTA	CANTIDAD	TOTAL (%)
SÍ	6	67
NO	3	33
NO SE	0	0

REQUISITOS PARA LA INTERPOSICIÓN DE LA ACCIÓN DE HABEAS DATA

GRÁFICA No. 7
REQUISITOS PARA LA INTERPOSICIÓN
DE LA ACCIÓN DE HABEAS DATA



FUENTE: Instrumento aplicado a Magistrados.

RESPUESTA	CANTIDAD	TOTAL (%)
SÍ	2	50
NO	2	50
NO SE	0	0

CUADRO No 3

FUNCIONARIOS	TOTAL	%	¿Considera usted que el Habeas Data propio garantiza el acceso a la información o dato personal de quien lo reclama y por ser de su incumbencia?							
			SI	%	NO	%	NO SE	%	S/R	%
Abogados	20	13	14	75	4	20	1	5		
Fiscales de Circuito	6	100	5	83	1	17	0	0		
Jueces de Circuito	9	100	7	78	2	22	0	0		
Magistrados del Tribunal Superior	4	67	3	75	1	25	0	0		
Total	39		29	78	8	21	1	1		

En relacion a esta pregunta sobre si el Habeas Data propio garantiza el acceso a la informacion o dato personal es de quien reclama, el instrumento se aplicó a veinte (20) abogados catorce (14) respondieron si representando el 75% cuatro (4) respondieron no lo que representa el 20% y uno (1) respondió no sé lo que representa en 5% de los encuestados se le aplicó a seis (6) Fiscales de Circuito cinco (5) respondieron si representando el 83% uno (1) respondio no lo que representa el 17% de los encuestados se le aplicó a nueve (9) Jueces de Circuito siete (7) respondieron si lo que representa d 78% dos (2) respondieron no lo que representa el 22% de los encuestados se le aplico a cuatro (4) Magistrados del Tribunal Superior tres (3) respondieron si lo que representa el 75% y uno (1) respondió no lo que representa el 25% de los encuestados

CUADRO No 4

FUNCIONARIOS	TOTAL	%	¿Con el Habeas Data impropio se persigue dotar a toda persona del acceso a las fuentes de información de carácter publico?							
			SI	/	NO	%	NO SE	/	S/R	%
Abogados	20	13	14	70	4	20	2	10		
Fiscales de Circuito	6	100	5	83	1	17	0	0		
Jueces de Circuito	9	100	7	78	0	0	2	22		
Magistrados del Tribunal Superior	4	67	4	100	0	0	0	0		
Total	39		30	76	5	12	4	12		

En relacion a esta pregunta sobre si con el Habeas Data impropio se persigue dotar a toda persona del acceso de fuentes de informacion de caracter publico el instrumento se aplicó a veinte (20) abogados catorce (14) respondieron sí representando el 70% cuatro (4) respondieron no lo que representa el 20% y uno (1) respondio no sé lo que representa en 10% de los encuestados se le aplicó a seis (6) Fiscales de Circuito cinco (5) respondieron si representando el 83% uno (1) respondió no lo que representa el 17% de los encuestados se le aplico a nueve (9) Jueces de Circuito siete (7) respondieron si lo que representa el 78% dos (2) respondieron no lo que representa el 22% de los encuestados se le aplicó a cuatro (4) Magistrados del Tribunal Superior los cuales los cuatro (4) respondieron si lo que representa el 100% de los encuestados

CUADRO No 5

FUNCIONARIOS	TOTAL	%	¿Existe la posibilidad de interponer una acción de Habeas Data cuando la información o dato personal no se le haya suministrado a quien la requirió o se suministro en forma insuficiente o de manera inexacta?							
			SI	%	NO	%	NO SE	%	S/R	%
Abogados	20	13	18	90	2	10	0	0		
Fiscales de Circuito	6	100	5	83	1	17	0	0		
Jueces de Circuito	9	100	9	100	0	0	0	0		
Magistrados del Tribunal Superior	4	67	4	100	0	0	0	0		
Total	39		36	93	3	7	0	0		

En relacion a esta pregunta sobre si el Habeas Data propio garantiza el acceso a la informacion o dato personal de quien reclama, el instrumento se aplicó a veinte (20) abogados dieciocho (18) respondieron si representando el 90% dos (2) respondieron no lo que representa el 10% de los encuestados se le aplicó a seis (6) Fiscales de Circuito cinco (5) respondieron si representando el 83% uno (1) respondió no lo que representa el 17% de los encuestados se le aplico a nueve (9) Jueces de Circuito los cuales los nueve (9) respondieron si lo que representa el 100% de los encuestados se le aplico a cuatro (4) Magistrados del Tribunal Superior los cuales los cuatro (4) respondieron si lo que representa el 100% de los encuestados

CUADRO No 6

FUNCIONARIOS	TOTAL	%	¿Cabe la acción de Habeas Data contra funcionarios públicos responsables del registro archivo o banco de datos?							
			SÍ	%	NO	%	NO SE	%	S/R	%
Abogados	20	13	13	65	5	25	2	10		
Fiscales de Circuito	6	100	6	100	0	0	0	0		
Jueces de Circuito	9	100	8	89	1	11	0	0		
Magistrados del Tribunal Superior	4	67	2	50	2	50	0	0		
Total	39		29	74	8	21	2	5		

En relación a esta pregunta sobre si el Habeas Data cabe contra funcionarios públicos responsables de registro archivo o banco de datos el instrumento se aplico a veinte (20) abogados trece (13) respondieron si representando el 65% cinco (5) respondieron no lo que representa el 25% y dos (2) respondió no se lo que representa en 10% de los encuestados se le aplico a seis (6) Fiscales de Circuito los seis (6) respondieron si representando el 100% de los encuestados se le aplicó a nueve (9) Jueces de Circuito ocho (8) respondieron si lo que representa el 89% uno 1 respondieron no lo que representa el 1% de los encuestados se le aplicó a cuatro (4) Magistrados del Tribunal Superior dos respondieron si lo que representa el 50% y dos respondieron no lo que representa el 50% de los encuestados

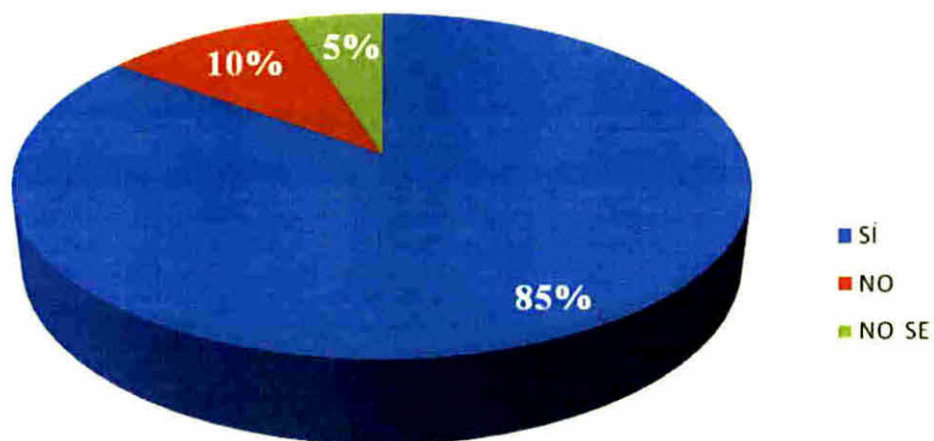
CUADRO No 7

FUNCIONARIOS	TOTAL	%	¿Puede promoverse en contra de empresa privadas y particulares?							
			SI	%	NO	%	NO SE	%	S/R	%
Abogados	20	13	4	20	15	75	1	5		
Fiscales de Circuito	6	100	1	17	4	66	1	17		
Jueces de Circuito	9	100	1	13	7	87	0	0		
Magistrados del Tribunal Superior	4	67	0	0	4	100	0	0		
Total	39		6	12	30	82	2	6		

En relación a esta pregunta sobre si el Habeas Data se puede promover en contra de empresas privadas y particulares el instrumento se aplico a veinte (20) abogados cuatro (4) respondieron si representando el 20% quince (15) respondieron no o que representa el 75% y uno (1) respondio no se lo que representa en 5% de los encuestados se le aplico a seis (6) Fiscales de Circuito un (1) respondió si representando el 17% cuatro (4) respondieron no lo que representa el 66% y uno (1) respondió no sé lo que representa el 17% de los encuestados se le aplicó a nueve (9) Jueces de Circuito uno (1) respondió si lo que representa el 13% siete (7) respondieron no lo que representa el 87% de los encuestados se le aplico a cuatro (4) Magistrados del Tribunal Superior los cuales los cuatro (4) respondieron no lo que representa el 100% de los encuestados

TRIBUNAL COMPETENTE

GRÁFICA No. 9
TRIBUNAL COMPETENTE

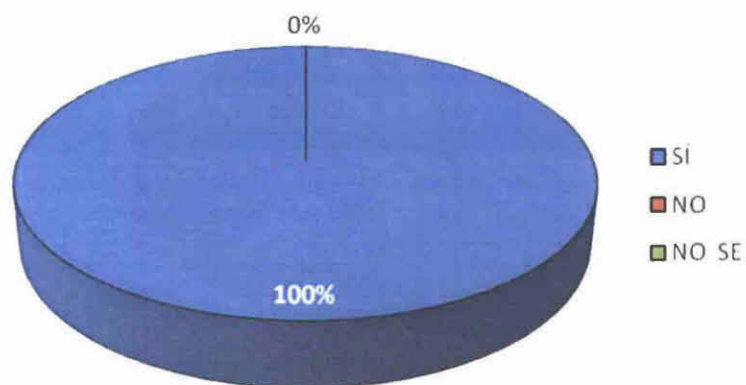


Fuente: Instrumento aplicado a Abogados

RESPUESTA	CANTIDAD	TOTAL (%)
SÍ	17	85
NO	2	10
NO SE	1	5

TRIBUNAL COMPETENTE

GRÁFICA No. 10
TRIBUNAL COMPETENTE

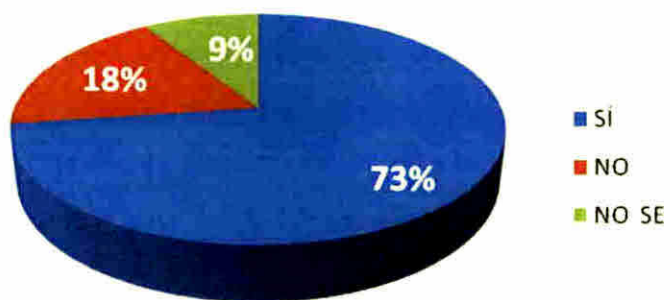


Fuente: Instrumento aplicado a Fiscales

RESPUESTA	CANTIDAD	TOTAL (%)
SÍ	6	100
NO	0	0
NO SE	0	0

TRIBUNAL COMPETENTE

GRÁFICA No.11
TRIBUNAL COMPETENTE



Fuente: Instrumento aplicado a Jueces

RESPUESTA	CANTIDAD	TOTAL (%)
SÍ	8	67
NO	2	22
NO SE	1	11

TRIBUNAL COMPETENTE



RESPUESTA	CANTIDAD	TOTAL (%)
SÍ	4	100
NO	0	0
NO SE	0	0

CUADRO No 9

FUNCIONARIOS	TOTAL	%	¿Una vez interpuesta 1a acción se tramitará mediante procedimiento, sumario?							
			SI	%	NO	/	NO SE	/	S/R	%
Abogados	20	13	13	61	6	29	1	10		
Fiscales de Circuito	6	100	6	100	0	0	0	0		
Jueces de Circuito	9	100	6	67	1	11	2	22		
Magistrados del Tribunal Superior	4	67	3	75	0	0	1	25		
Total	39		28	76	7	10	4	14		

En relacion a esta pregunta sobre una vez interpuesta la acción se tramitara mediante procedimiento sumario el instrumento se aplicó a veinte (20) abogados trece (13) respondieron si representando el 61% seis (6) respondieron no lo que representa el 29% y uno (1) respondio no sé lo que representa en 10% de los encuestados se le aplicó a seis (6) Fiscales de Circuito los cuales los seis (6) respondieron si lo que representa el 100% de los encuestados se le aplicó a nueve (9) Jueces de Circuito seis (6) respondieron si lo que representa el 67% uno respondió no lo que representa el 11% y dos (2) respondieron no se lo que representa el 22% de los encuestados se le aplicó a cuatro (4) Magistrados del Tribunal Superior los cuales tres (3) respondieron si lo que representa el 75% y uno (1) respondio no sé lo que representa el 25% de los encuestados

CUADRO No 10

FUNCIONARIOS	TOTAL	/	¿En cuanto a sustanciación impedimentos notificaciones y apelaciones se aplicarán las normas que regula la acción de amparo de garantías constitucionales?							
			SI	%	NO	/	NO SE	%	S/R	%
Abogados	20	13	13	65	3	15	4	20		
Fiscales de Circuito	6	100	4	67	2	33	0	0		
Jueces de Circuito	9	100	6	67	0	0	3	33		
Magistrados del Tribunal Superior	4	67	3	75	0	0	1	25		
Total	39		26	69	5	12	8	20		

En relación a esta pregunta en cuanto a sustanciación impedimentos notificaciones y apelaciones se aplicaran las normas que regula la acción de amparo de garantías constitucionales el instrumento se aplicó a veinte (20) abogados trece (13) respondieron si representando el 65% tres (3) respondieron no lo que representa el 15% y cuatro (4) respondieron no se lo que representa en 20% de los encuestados se le aplicó a seis (6) Fiscales de Circuito cuatro (4) respondieron si representando el 67% dos (2) respondieron no lo que representa el 33% de los encuestados se le aplicó a nueve (9) Jueces de Circuito seis (6) respondieron si lo que representa el 67% tres (3) respondieron no se lo que representa el 33% de los encuestados se le aplicó a cuatro (4) Magistrados del Tribunal Superior tres (3) respondieron si lo que representa el 75% y uno (1) respondió no se, lo que representa el 25% de los encuestados

CUADRO No 11

FUNCIONARIOS	TOTAL	/	¿Requiere de formalidades la acción de Habeas Data?							
			SI	%	NO	/	NO SE	%	S/R	%
Abogados	20	13	10	50	9	45	1	5		
Fiscales de Circuito	6	100	2	33	4	67	0	0		
Jueces de Circuito	9	100	4	44	5	56	0	0		
Magistrados del Tribunal Superior	4	67	1	25	3	75	0	0		
Total	39		17	43	21	53	1	4		

En relacion a esta pregunta sobre si la acción Habeas Data requiere formalidades el instrumento se aplico a veinte (20) abogados diez (10) respondieron si representando el 50% nueve (9) respondieron no lo que representa el 45% y uno (1) respondió no sé lo que representa en 5% de los encuestados se le aplico a seis (6) Fiscales de Circuito dos (2) respondieron si representando el 33% cuatro (4) respondio no lo que representa el 67% de los encuestados se le aplicó a nueve (9) Jueces de Circuito cuatro (4) respondieron si lo que representa el 44% cinco (5) respondieron no lo que representa el 56% de los encuestados se le aplico a cuatro (4) Magistrados del Tribunal Superior uno (1) respondio si lo que representa el 25% y tres (3) respondieron no lo que representa el 75% de los encuestados

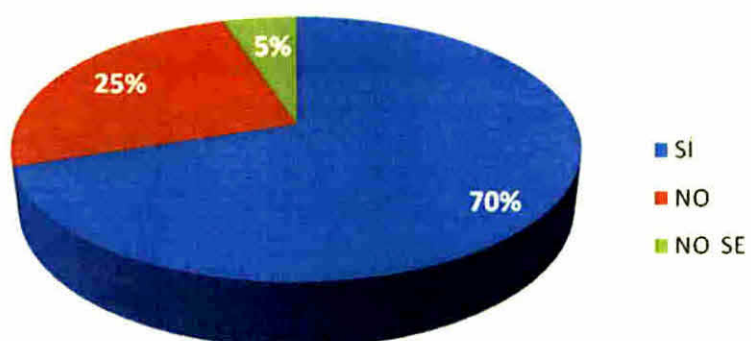
CUADRO No 12

FUNCIONARIOS	TOTAL	%	¿Considera usted que el Habeas Data es una garantía eficaz de protección de datos?							
			SI	%	NO	%	NO SE	%	S/R	/
Abogados	20	13	14	70	5	25	1	5		
Fiscales de Circuito	6	100	3	50	3	50	0	0		
Jueces de Circuito	9	100	5	56	3	33	1	11		
Magistrados del Tribunal Superior	4	100	2	50	2	50	0	0		
Total	39		24	56.5	13	39.5	2	4		

En esta pregunta si el Habeas Data es una garantía eficaz de protección de datos el instrumento se le aplicó a veinte (20) Abogados catorce (14) respondieron que si lo que representa el 70% cinco (5) que no lo que representa el 25% y uno (1) no se lo que representa el 5% de los encuestados se le aplicó a seis (6) Fiscales de Circuito en la cual tres (3) respondieron que si lo que representa el 50% tres (3) que no lo que representa el 50% de los encuestados se le aplicó a nueve (9) Jueces de Circuito en la cual cinco (5) respondieron que si lo que representa el 56% tres (3) que no lo que representa el 33% y uno (1) no se lo que representa el 11% de los encuestados se le aplicó a cuatro (4) Magistrados en la cual dos (2) respondieron que si lo que representa el 50% dos (2) que no lo que representa el 50% de los encuestados

GARANTÍA EFICAZ DE PROTECCIÓN DE DATOS

GRÁFICA No. 13
Garantía Eficaz de Protección de Datos

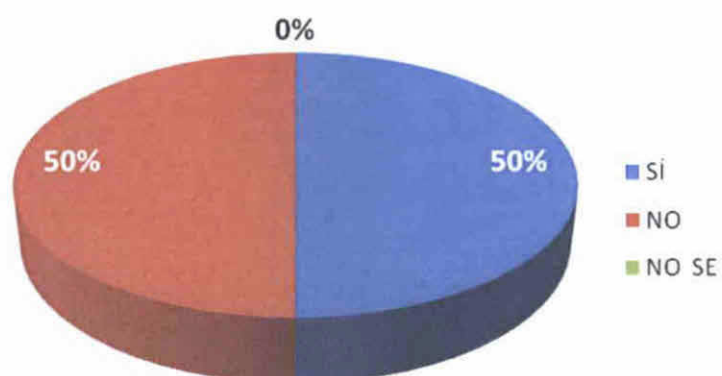


Fuente: Instrumento aplicado a Abogados

RESPUESTA	CANTIDAD	TOTAL (%)
SÍ	14	70
NO	5	25
NO SE	1	5

GARANTÍA EFICAZ DE PROTECCIÓN DE DATOS

GRÁFICA No. 14
Garantía Eficaz de Protección de Datos

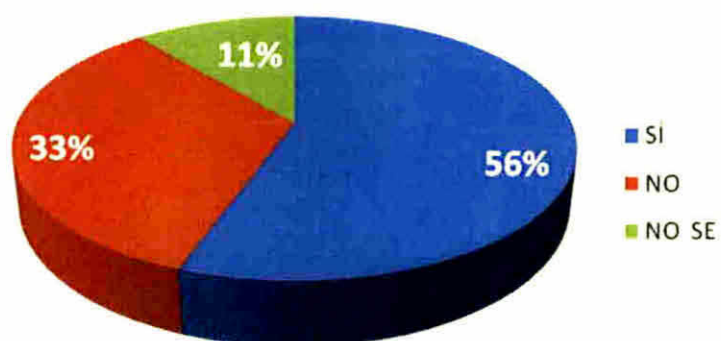


Fuente: Instrumento aplicado a Fiscales

RESPUESTA	CANTIDAD	TOTAL (%)
SÍ	3	50
NO	3	50
NO SE	0	0

GARANTÍA EFICAZ DE PROTECCIÓN DE DATOS

GRÁFICA No. 15
Garantía Eficaz de Protección de Datos

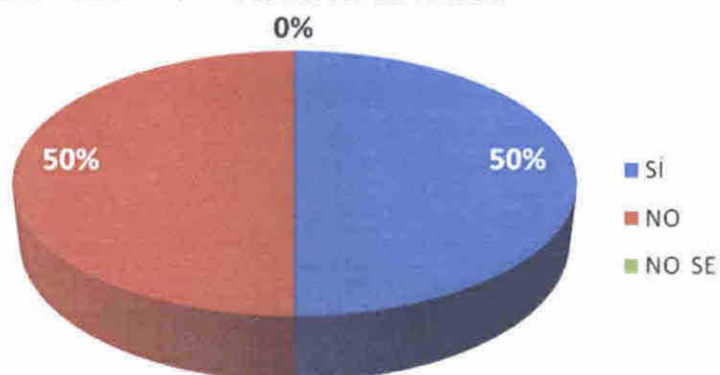


Fuente: Instrumento aplicado a Jueces

RESPUESTA	CANTIDAD	TOTAL (%)
SÍ	5	56
NO	3	33
NO SE	1	11

GARANTÍA EFICAZ DE PROTECCIÓN DE DATOS

GRÁFICA No. 16
Garantía Eficaz de Protección de Datos



Fuente: Instrumento aplicado a Magistrados

RESPUESTA	CANTIDAD	TOTAL (%)
SÍ	2	50
NO	2	50
NO SE	0	0

CUADRO No 13

FUNCIONARIOS	TOTAL	/	¿Cualquier persona está legitimada para solicitar información de acceso libre?							
			SÍ	%	NO	%	NO SE	%	S/R	/
Abogados	20	13	15	75	4	20	1	5		
Fiscales de Circuito	6	100	5	83	1	17	0	0		
Jueces de Circuito	9	100	6	67	3	33	0	0		
Magistrados del Tribunal Superior	4	67	3	75	1	25	0	0		
Total	39		29	75	9	24	1	1		

En relacion a esta pregunta sobre si cualquier persona está legitimada para solicitar informacion de acceso libre el instrumento se aplico a veinte (20) abogados quince (15) respondieron si representando el 75% cuatro (4) respondieron no lo que representa el 20% y uno (1) respondió no sé lo que representa en 5% de los encuestados se le aplicó a seis (6) Fiscales de Circuito cinco (5) respondieron si representando el 83% y uno (1) respondió no lo que representa el 17% de los encuestados se le aplicó a nueve (9) Jueces de Circuito seis (6) respondieron si lo que representa el 67% tres (3) respondieron no lo que representa el 33% de los encuestados se le aplicó a cuatro (4) Magistrados del Tribunal Superior tres (3) respondieron si lo que representa el 75% y uno (1) respondio no lo que representa el uno (1) de los encuestados

CUADRO No 14

FUNCIONARIOS	TOTAL	%	¿Pueden los Agentes del Estado divulgar información confidencial a las partes en un proceso judicial?							
			SÍ	%	NO	/	NO SE	/	S/R	/
Abogados	20	13	6	30	13	65	1	5		
Fiscales de Circuito	6	100	2	33	4	67	0	0		
Jueces de Circuito	9	100	2	22	6	67	1	11		
Magistrados del Tribunal Superior	4	67	0	0	3	75	1	25		
Total	39		10	21	26	69	3	10		

En relacion a esta pregunta sobre si pueden los agentes del Estado divulgar informacion confidencial a las partes involucradas en un proceso judicial el instrumento se aplicó a veinte (20) abogados seis (6) respondieron si representando el 30% trece (13) respondieron no o que representa el 65% y uno (1) respondio no sé lo que representa en 5% de los encuestados se le aplicó a seis (6) Fiscales de Circuito dos (2) respondieron si representando el 33% cuatro (4) respondieron no lo que representa el 67% de los encuestados se le aplicó a nueve (9) Jueces de Circuito dos (2) respondieron si lo que representa el 22% seis (6) respondieron no lo que representa el 67% y uno (1) respondió no se lo que representa el 1 % de los encuestados se le aplico a cuatro (4) Magistrados del Tribunal Superior tres (3) respondieron no lo que representa el 75% y uno (1) respondio no sé lo que representa el 25% de los encuestados

CUADRO No 15

FUNCIONARIOS	TOTAL	%	¿Se considera información de acceso restringido cuando así sea declarada por el funcionario competente?							
			SI	%	NO	%	NO SE	%	S/R	/
Abogados	20	13	11	55	8	40	1	5		
Fiscales de Circuito	6	100	2	33	4	67	0	0		
Jueces de Circuito	9	100	5	56	3	33	1	11		
Magistrados del Tribunal Superior	4	67	3	75	0	0	1	25		
Total	39		21	55	15	35	3	10		

En relacion a esta pregunta sobre si el Habeas Data se considera información de acceso restringido cuando así sea declarada por el funcionario competente el instrumento se aplico a veinte (20) abogados once (6) respondieron si representando el 55% ocho (8) respondieron no lo que representa el 40% y uno (1) respondió no se lo que representa el 5% de los encuestados se le aplico a seis (6) Fiscales de Circuito dos (2) respondieron si representando el 33% cuatro (4) respondieron no lo que representa el 67% de los encuestados se le aplicó a (9) Jueces de Circuito cinco (5) respondieron si lo que representa el 56% tres (3) respondieron no lo que representa el 33% y uno (1) respondió no se lo que representa el 11% de los encuestados se le aplicó a cuatro (4) Magistrados del Tribunal Superior tres (3) respondieron si lo que representa el 75% y uno (1) respondió no sé lo que representa el 25% de los encuestados

CAPITULO V
PROPUESTA

5 1 JUSTIFICACIÓN

Nuestro sistema juridico ante el avance de la ciencia y la tecnologia, se encuentra precisado en establecer reformas en las normas procesales que de alguna manera, afectan aquellas garantias fundamentales reconocidas en la Constitucion Tales reformas deben estar dirigidas a acatar aquellas disposiciones que protegen los derechos esenciales de todo ser humano

En este sentido se hace necesario que tales normas brinden con su tecnica legislativa suficiente claridad para que los operadores de justicia puedan interpretarlas y aplicarlas al tomar las decisiones que afecten las garantias individuales

5 2 OBJETIVOS

- Modificar la Ley No 6 del 22 de enero del 2002 para que la acción de Habeas Data sea de competencia de los jueces de Circuito Civiles si el funcionario tiene mando a nivel Municipal

5 3 CUERPO DEL TRABAJO

La importancia y el significado que viene a tener en nuestro pais la incorporación de un instrumento procesal de proteccion del derecho a la intimidad concretamente en cuanto al manejo de los datos personales como lo es el Habeas Data

Al igual que otros países *Panamá* tomó conciencia de la necesidad de protección de datos a sus ciudadanos o a toda persona que se vea afectada en sus derechos de una garantía a través de la cual reciba una tutela efectiva a su privacidad cuando ésta se vea menoscabada, afectada o lesionada por el uso indiscriminado inadecuado o sin su consentimiento de los datos que sobre su persona o entorno se lleven en registros archivos o bancos de datos

Se pretende con la incorporación de esta garantía a nivel constitucional establecer los límites en el almacenamiento en la recopilación y en el uso que de la información de una persona se lleva en los registros o archivos pero sobre todo en los bancos de datos informatizados para preservar esa esfera de libertad o ámbito personal y familiar que debe quedar ajeno o marginado de injerencias innecesarias

Con la expedición de la Ley No. 6 del 22 de enero del 2010 y la incorporación de la Acción de Habeas Data en el artículo 44 de la Constitución Nacional nuestro país se une a las Naciones que protegen jurídicamente los datos personales de sus ciudadanos y otorgan a estos tanto el acceso a la información personal como pública, así como el instrumento para hacer efectivo tales derechos

En tal sentido lo recomendable sería que se introduzcan reformas a la Carta Magna, con el fin de que la acción de Habeas Data sea también procedente en contra de empresas privadas sin la necesidad que solo establece cuando se trate de empresas que

prestan un servicio al Publico o se dediquen a suministrar información tal como esta prevista en diferentes legislaciones de otros paises

Proponemos la reforma al articulo 44 de la Constitución Nacional en los siguientes terminos

Articulo 44 Toda persona podrá promover accion de habeas data con miras a garantizar el derecho de acceso a la información personal recabada en bancos de datos o registros oficiales o particulares (**entidades publicas o privadas, así como conocer el uso que se haga de ellos y su finalidad**) cuando estos ultimos traten de empresas que prestan un servicio al publico o se dediquen a suministrar informacion

Esta acción se podra interponer de igual forma, para hacer valer el derecho de acceso a la información publica o acceso libre de conformidad con lo establecido en esta Constitucion

Mediante la accion de habeas data se podrá solicitar que se corrija, actualice rectifique suprima o se mantenga en confidencialidad la informacion o datos que tengan de caracter personal

La Ley reglamentará lo referente a los tribunales competentes para conocer del habeas data, que se sustanciara mediante proceso sumario u sin necesidad de apoderado judicial

Las negritas es nuestra propuesta de reforma a la Constitucion

Por otra parte consideramos que debe modificarse el articulo 8 de la Ley No 6 del 22 de enero de 2002 en cuanto a la competencia, toda vez que la Ley le atribuye esta facultad al Pleno de la Corte Suprema de Justicia, y a los Tribunales Superiores que

conocen de la accion de Amparo de Garantias Constitucionales por lo que sugerimos la modificación de este articulo en los terminos siguientes

Articulo 18 La Acción de Habeas Data sera de competencia de los Tribunales Superiores que conocen de la accion de Amparo de Garantias Constitucionales cuando el funcionario publico titular o responsable del registro archivo o banco de datos tenga mando y jurisdiccion a nivel provincial **y a los Juzgados de Circuito cuando el funcionario titular tenga mando y jurisdicción a nivel municipal**

Cuando el titular o responsable del registro archivo o banco de datos tenga mando y jurisdicción en dos o mas provincias o en toda la Republica, sera de competencia del Pleno de la Corte Suprema de Justicia

Las negritas es nuestra propuesta de modificación

CONCLUSIONES

La informacion es un derecho de doble aspecto informar y ser informado

La privacidad o intimidad se le considera, tanto en la doctrina en la legislacion como un derecho de rango constitucional es decir el derecho que tiene toda persona a que sea respetada su vida privada La acción de Habeas Data está regulada en unos paises constitucionalmente y por otros legalmente

El Derecho a la protección de datos es un derecho de reciente consagración y existe consenso general en la doctrina, al ubicarlo dentro de los conjuntos de los derechos de tercera generacion

En el derecho comparado existen diferencias respecto a la naturaleza juridica del Habeas Data

Conforme a la mayoria de la doctrina estudiada, el bien juridico tutelado es el derecho a la intimidad

- Los derechos que tienen que ver con el derecho a la intimidad van ha ser el de inviolabilidad de domicilio o residencia el cual está previsto en los articulos 26 y 29 de la Constitucion Nacional

El Habeas Data persigue tanto la proteccion de los datos propios recogidos o almacenados por terceros sean ente publico o privado como a posibilidad de acceder a información publica

Con la aprobacion de la Ley No 6 de 22 de enero de 2002 y el articulo 44 de la Constitución Nacional reformada por el Acto Legislativo No 1 del 97 de julio del 2004 se vino a establecer o a incorporar a nuestro ordenamiento juridico la acción de

Habeas Data, por lo cual se ha venido a actualizar y a la vez reforzar el sistema de garantías para la protección efectiva de los derechos fundamentales en Panamá.

En el Habeas Data propio se garantiza el proceso a la información o dato personal de quien la reclama, mientras que Habeas Data impropio lo que se persigue es dotar a toda persona que así lo haya solicitado el acceso a las fuentes de información de carácter público.

El conocimiento de la acción de Habeas Data se atribuye a los Tribunales Superiores de Justicia de los Distritos Judiciales y al Pleno de la Corte Suprema, Pleno.

- La acción de Habeas Data se tramitará mediante procedimiento sumario sin formalidades ni necesidad de abogados.

La ley establece sanciones y responsabilidades personales para los funcionarios que se nieguen a suministrar la información solicitada o los que obstaculicen el acceso a la información.

RECOMENDACIONES

- Recomendamos que la acción de Habeas Data debe proceder también contra entidades privadas y no sólo para aquellos entes privados que prestan un servicio público o suministran información por lo que entonces el legislador patrio debe reformar la Constitución sobre este aspecto tal como ha sido regido en otros países
- A atribuir competencia a los Jueces de Circuito Civiles conocer de la acción de Habeas Data cuando el Funcionario Público titular o responsable del registro archivo o banco de datos tenga mando jurisdicción a nivel Municipal
- Se recomienda al Pleno de la Corte Suprema de Justicia sancionar ejemplarmente a los infractores de la Ley de Transparencia en los supuestos en que haya incurrido cuando se le ha requerido la información
- Recomendamos a los gobernantes de este país promocionar concienciar y educar sobre la importancia de la participación ciudadana en el manejo de la gestión pública, por parte de los administradores a fin de que tengan conocimiento y se vigile la función gubernamental

ANEXOS

MODELOS DE FORMULARIOS PARA HABEAS DATA

FORMULARIO (MODELO) SOLICITUD DE CORRECCIÓN O ELIMINACIÓN DE INFORMACIÓN

Panamá, ____ (fecha) ____

Señor (a)

(Nombre del funcionario)

(Cargo del funcionario)

(Institucion del Estado)

Presente

Señor (a) __ (Apellido del funcionario) __

Yo __ (nombre del solicitante y generales del mismo) __ con cedula de identidad personal _____ residente en (o con oficinas en) _____ y numero de teléfono _____ soy del conocimiento que en los __ (archivos registros o expedientes) __ a su cargo se mantiene informacion concerniente a mi persona, la cual es __ (incorrecta, irrelevante incompleta o desfasada) __ siendo la misma del siguiente tenor

(Detalle o descripción de la información)

La aludida informacion resulta __ (incorrecta, irrelevante incompleta o desfasada) __ tal y como lo comprueban los documentos que acompañan la presente por lo que en virtud del principio de acceso publico solicito que la misma sea __ (corregida o eliminada) __

Atentamente

Nombre de la persona

Cedula

FORMULARIO (MODELO)
SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN

Panama, ____ (fecha) ____

Senor (a)

(Nombre del funcionario)

(Cargo del funcionario)

(Institucion del Estado)

Presente

Senor (a) __ (Apellido del funcionario) __

Yo __ (nombre del solicitante y generales del mismo) __, con cedula de identidad personal ____ residente en (o con oficinas en) _____ y numero de teléfono _____ ejerciendo el derecho de libertad de informacion y el principio de acceso publico solicito que me de (acceso o copia) __ de __ (detalle o descripcion de la información solicitada) __ misma que se encuentra ubicada en los __ (archivos registros o expedientes) __ a su cargo

Atentamente

Nombre de la persona

Cedula

**FORMULARIO
(MODELO)
HÁBEAS DATA**

HONORABLES MAGISTRADOS DEL PRIMER TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DE PANAMÁ

Yo _(nombre del solicitante y generales del mismo)_ con cedula de identidad personal N _____ residente en (o con oficinas en) _____ y numero de teléfono _____ comparezco ante ustedes con la finalidad de promover acción de

Hábeas Data, contra _____(nombre del funcionario)_____ (cargo del funcionario e Institucion del Estado donde labora)_____, con el proposito de que me sea garantizado el derecho de acceso a la información derecho que me ha sido negado

I HECHOS

PRIMERO En ejercicio del principio de acceso publico solicité a _____(nombre del funcionario)_____ (cargo del funcionario e Institucion del Estado donde labora)____ que me fuese extendida copia de _____(detalle o descripcion de la información solicitada)____, misma que se encuentra ubicada en los _____(archivos registros o expedientes)____ a su cargo

SEGUNDO Segun consta, la solicitud fue recibida el _____(fecha)_____, y hasta la fecha la solicitud no ha sido resuelta, excediendose el funcionario con creces el término de treinta (30) días calendario que le confiere la Ley

TERCERO Por lo anterior solicito que se me conceda la accion de Hábeas Data, y se le requiera a _____(nombre del funcionario)_____ (cargo del funcionario e Institución del Estado donde labora)_____, o quien esté a cargo de resolver la solicitud presentada, a fin de que cumpla con su obligación de resolver nuestra petición y en caso de desacato se le apliquen las sanciones previstas en la Ley

II PRUEBAS

Presento como prueba, copia de la solicitud formulada ante _____(nombre del funcionario)_____ (cargo del funcionario e Institución del Estado donde labora)____ con fecha de recibido que acredita el incumplimiento de su obligacion de responder nuestra petición en el término de treinta (30) dias calendario

Panama, _____(fecha)____ de 2011

Nombre de la persona

Cédula

JURISPRUDENCIA

ACCIÓN DE HÁBEAS DATA PRESENTADA POR MAYÍN CORREA CONTRA LA SECRETARIA GENERAL DEL MUNICIPIO DE PANAMÁ (CERTIFICAR LA CANTIDAD DE VEHÍCULOS Y MOTOS QUE SE HAN COMPRADO DESDE SEPTIEMBRE DE 1999 HASTA LA FECHA) (APELACIÓN) PONENTE ROGELIO A FABREGA Z PANAMA DIECISIETE (17) DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL TRES (2003)

Tribunal Corte Suprema de Justicia Panama

Sala Pleno

Ponente Rogelio A Fabrega Zarak

Fecha 17 de septiembre de 2003

Materia Habeas Data

Apelacion

Expediente HD 736 2002

VISTOS

Conoce el Pleno de la Corte Suprema de Justicia del recurso de apelación interpuesto por la Secretaria General del Municipio de Panamá, NORBERTA A TEJADA CANO contra la sentencia de 13 de agosto de 2002 proferida por el Primer Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial de Panamá, la cual concedió la acción de habeas data presentada por la señora MAYIN CORREA ordenando que en el término de cinco (5) días siguientes a la notificación de la mencionada resolución la funcionaria apelante suministre la siguiente información

1) Certificar la cantidad de vehículos y motos que se han comprado desde septiembre de 1999 hasta la fecha e indicar a que empresas le fueron comprados y la cuantía de la compra en forma individualizada por vehículo

La apelante en su escrito visible a fojas 24 27 sostiene lo que a continuación se transcribe

PRIMERO Sobre la información a que se hace referencia y otras que también solicitó la señora Correa, éstas fueron atendidas y la respuesta a la misma se consideró dada en la nota de fecha 26 de marzo en la que se le indicó que toda la información solicitada se encontraba publicada en el sitio Web de la Alcaldía en la Internet además de su inserción en una publicación del diario El Universal e igualmente en el NODO de Transparencia en la Gestión Publica de la Defensoría del Pueblo de la Republica de Panamá

SEGUNDO Como ya se indicó a pesar de que se le había brindado la información requerida, a la solicitud sin fecha, recibida en el mes de abril de 2002 se le dio respuesta mediante Nota No S G 524 de 6 de junio del presente año en el sentido de que la petición era improcedente por no ajustarse a las exigencias establecidas en el Decreto Ejecutivo No 124 de 21 de mayo de 2002 reglamentario de la Ley No 6 de 22 de enero de 2002 Ello en virtud de que dentro del término de los 30 días a que se refiere el

Artículo 7 de la Ley antes mencionada, entró en vigencia el precitado Decreto Ejecutivo que señala en su Artículo 4 que toda solicitud debe ser dirigida al titular de la institución publica respectiva o a su representante legal

En el Artículo 8 del referido Decreto se establece que Para los efectos del artículo 11 de la Ley No 6 de 22 de enero de 2002 es persona interesada aquella que tiene relación directa con la información que solicita (lo resaltado es de la recurrente)

TERCERO Si se analiza el contenido de la solicitud ultimamente formulada por la señora Mayín Correa, se puede observar que guarda relación con las informaciones sobre las cuales ya se le había indicado el sitio o lugar donde podía accederla, pero como indiqué en el punto anterior al entrar en vigencia el Decreto Ejecutivo No 124 de 21 de mayo de 2002 ésta tenía el carácter de reservada y sólo podía ser suministrada a quien acredite ser parte interesada en la misma

CUARTO Por otro lado el párrafo del artículo 4 de la Ley No 6 de 22 de enero de 2002 así como el artículo 13 del Decreto Ejecutivo No 124 de 21 de mayo del año en curso establecen respectivamente

Artículo 4

Parágrafo En caso de que la información solicitada sea requerida de manera certificada, el peticionario deberá cumplir para los efectos de las formalidades y de los costos con la disposiciones legales que rigen la materia

Artículo 13 En caso de que la información solicitada sea requerida de manera certificada, el peticionario deberá cumplir con las formalidades y costos establecidos en las disposiciones legales que rigen la materia

En este sentido en cuanto a las formalidades se aplicará lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 960 del Código Fiscal y en lo relativo a los costos en el numeral 1 del artículo 341 y numeral 2 del artículo 960 del Código Fiscal

Como puede observarse dicha solicitud igualmente no se ajusta a lo normado en los citados preceptos legales es decir ni en lo establecido en la precitada Ley ni en el Decreto reglamentario de la misma

QUINTO Por otro lado al entrar en vigencia el mencionado Decreto me vi en la obligación de acogerme a lo que en él se establece en especial el mandato del artículo 3 ya que como funcionaria pública sólo puedo hacer lo que la ley me autoriza, y como lo he manifestado a la demandante se le suministró en la nota de 26 de marzo del presente año el lugar al que puede acceder para obtener toda la información que requería, la que se encuentra disponible para su acceso desde enero de 2002 en el sitio Web www.municipio.gob.pa

SEXTO Sobre los razonamientos que se recogen en los párrafos segundo y tercero de la página 4 y continuación de la 5 de la resolución recurrida, se estima que es completamente cierto lo que allí se expone al afirmar el Tribunal lo siguiente y copio

Esta Colegiatura, pese a disentir con la señora MAYIN CORREA cuando sostiene que el Decreto Ejecutivo No 124 de fecha 21 de

mayo de 2002 (Por el cual se reglamente (sic) la ley 6 de 22 de enero de 2002) no le resulta aplicable a su petición arriba a la conclusión que debe accederse a la pretensión de dicha accionante. Al tratar de explicar su justificación el Tribunal admite que el Decreto Ejecutivo en cuestión (que aparece publicado en la Gaceta Oficial No 24 557 de fecha 22 de mayo de 2002) tiene perfecta y obligada aplicación para el caso en discusión si se toma en cuenta que para la fecha en que fue promulgado el mismo la Secretaría General del Municipio de Panamá aun no se había pronunciado en torno a la petición que le presentó la señora MAYIN CORREA.

SÉPTIMO. Aparte de lo arriba expuesto no comparto el criterio externado por el Tribunal en los párrafos primero y segundo de la página cinco de la resolución que apelamos pues no es cierto que me haya negado a dar la información requerida, sino que la misma al entrar en vigencia el Decreto Ejecutivo No 124 de 21 de mayo de 2002 y de conformidad con lo normado en el artículo 8 de dicho Decreto en concordancia con el 11 de la Ley 6 de 22 de enero de 2002 la información solicitada por la demandante revistió la característica de reservada, y a la luz de los citados preceptos legales sólo puede ser dada a quien demuestre tener relación directa con la misma como persona interesada. Al respecto considero oportuno transcribir en analogía, lo que sobre este aspecto señaló el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial de Panamá en resolución de fecha 1 de agosto de 2002 al decidir Acción de Hábeas Data propuesto por Mayín Correa en mi contra y bajo la ponencia del Magistrado Suplente Fernando A. Solórzano A.

En ese sentido este Tribunal observa que la solicitud interpuesta requirió información sobre las planillas con nombre cédula cargo y gastos de representación de todos los servidores públicos que laboran en el Municipio al igual que el nombre cargo y salario de aquellos que laboraron por contrato y las funciones que realizan y si los mismos han recibido viáticos indicar las sumas recibidas y la razón por la cual les fue girado dichos pagos.

A este respecto el artículo 11 de la Ley señala que será de carácter público y de libre acceso a las personas interesadas la información relativa a la contratación y designación de funcionarios planillas gastos de representación costos de viajes, emolumentos o pagos en concepto de viáticos y otros, de los funcionarios del nivel que sean y/o de otras personas que desempeñen funciones públicas (Lo subrayado es el Tribunal).

Sin embargo el artículo 8 del Decreto 124 de 21 de mayo de 2002 señala claramente que para los efectos del artículo 11 de la Ley No 6 es persona interesada aquella que tienen relación directa con la información que solicita (Lo subrayado es del Tribunal).

En consecuencia, este Tribunal estima que a la luz del Decreto Ejecutivo en mención la señora Correa no está legitimada para solicitar esta información por lo que la presente acción de hábeas data debe ser denegada.

OCTAVO Sobre lo expuesto en los hechos precedentes traemos a colación el criterio externado por el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial en auto de fecha 8 de junio de 2002 bajo la ponencia de la Magistrada Elitza Cedeño al resolver acción de Habeas Data (Entrada No 02HD 006) el cual reza así

Observa el Tribunal que el artículo 7 de la Ley 6 de 22 de enero de 2002 en su parte pertinente dice así En caso de que la información solicitada por la persona ya esté disponible al público en medios impresos tales como libros compendios trípticos archivos públicos de la administración así como también en formatos electrónicos disponibles en Internet o en cualquier otro medio se le hará saber la fuente el lugar y la forma en que puede tener acceso a dicha información previamente publicada

Siendo entonces que hay constancia en el expediente que la funcionaria demandada contestó en el tiempo la solicitud que le formulara y que cumplió con la parte transcrita del artículo 7 de la mencionada Ley 6 de 22 de enero de 2002 considera este Tribunal que la acción de hábeas data que se interpone resulta manifiestamente improcedente y por ende no debe ser admitida

Conocidos los argumentos de la recurrente procede el Pleno de la Corte Suprema a resolver lo que en derecho corresponda En ese sentido conviene precisar si la solicitud de la peticionaria señora MAYÍN CORREA es viable de conformidad con la Ley No 6 de 22 de enero de 2002 Que dicta normas para la transparencia de la gestión pública, establece la acción de Hábeas Data y dicta otras disposiciones reglamentado por el Decreto Ejecutivo No 124 de 21 de mayo de 2002 toda vez que la información solicitada a la funcionaria administrativa (Secretaria General del Municipio de Panamá) fue negada por ésta como improcedente por no ajustarse a las exigencias establecidas en los cuerpos legales citados (véase foja 5)

En ese orden de ideas el Pleno observa primeramente que la señora MAYIN CORREA con fundamento en el artículo 2 de la Ley 6 de 22 de enero de 2002 solicitó a la servidora pública acusada, mediante nota sin fecha recibida el 30 de abril de 2002 (fs 4) información referente a la compra de vehículos y motos hecha desde el mes de septiembre de 1999 a la fecha, siendo contestada la misma en Nota No S G 524 de fecha 6 de junio del presente año (fs 5) por lo que se desprende que la funcionaria municipal ha infringido el artículo 7 de la Ley de Transparencia de Gestión Pública al contestar la petición de la parte actora en un plazo mayor de treinta (30) días calendario sin que informara a la peticionaria su decisión de acogerse a una prórroga

De la lectura de la petición solicitada se desprende sin esfuerzo que la información solicitada en parte es nominativa o individualizada y en parte no La información no individualizada o no revista la condición de información sobre actuaciones públicas que no sean nominativas está amparada por la información a que está obligada toda entidad pública con fundamento en los artículos 8 y 10 de la Ley n 6 de 2002 Este no es el caso de la información individualizada, nominativa u ofrecida en forma consolidada, en cuyo caso se encuentra protegida, en principio por el derecho a la intimidad cuyo contenido ha sido reiteradamente expuesto por la doctrina de este Pleno Veamos

El derecho a la autodeterminación informativa surge como un derecho humano de tercera generación (como emanación o consecuencia del derecho a la privacidad) encaminada a la protección de la persona con respecto a la información contenida en registros informatizados o bancos de datos que le conciernan sobre su acceso y corrección (el *habeas data* propio) y su denominación fue acuñada como consecuencia de su reconocimiento por el Tribunal Constitucional alemán en su sentencia de 15 de diciembre de 1983 y que ubicaba ese derecho en el derecho a la autodeterminación del ser humano y el

control de la información suya en archivos informáticos o bancos de datos y su utilización por el titular de la información con respecto a datos archivados que le conciernan

Su fundamento se deriva de la protección al derecho a la intimidad, que tiene fundamento constitucional como destaca la doctrina y el Derecho Comparado y los expositores nacionales que han estudiado el tema (véase las monografías de RIGOBERTO GONZÁLEZ HERIBERTO CASTILLO y EDGARDO VILLALOBOS)

De lo anterior se desprende que los datos personales o informaciones individualizadas acerca de ella le corresponde obtenerlas a su titular para utilizarlas o corregirlas o a terceros con respecto a éstos para el ejercicio de un derecho previa acreditación del interés que ostenta, siempre que no se trate de información confidencial o restrictiva como aparece definida en la ley a reserva, naturalmente del consentimiento del afectado (cfr sentencia de 26 de noviembre de 2002) salvo que se trate de información que se ha convertido en anónima o que se brinde en forma global es decir no nominativa

Para el Pleno sin perjuicio de analizar cada supuesto dentro del principio de ponderación y de concretización a nivel de principio en caso de conflicto constitucional de dos bienes o derechos fundamentales para determinar cuál debe tener preferencia en el caso concreto parece difícil articular el habeas data impropio con la naturaleza de interés público o general con respecto a erogaciones que tienen su fundamento en actos de contratación o de nombramiento para una entidad pública determinada, si tal información es individualizada o nominativa, es decir si no es consolidada o anónima, perdiendo el carácter de información individualizada

La información nominativa de información almacenada en registros informáticos o base de datos requiere que como se dijo acreditar un interés aparece regulado en el artículo 11 y sobre el concepto de interés se ha pronunciado la sentencia de este Pleno de 26 de noviembre de 2002 No obstante bien puede el peticionario circunscribir su petición a gastos realizados y contrataciones realizadas globalmente pues lo que protege esta acción es la protección de la intimidad de las personas con respecto a sus datos que aparezcan almacenados o registrados es decir información individualizada, personal o nominativa, con fundamento en las normas que se han dejado reproducidas singularmente los artículos 8 y 10 de la Ley 6 de 2002

Sin embargo a juicio de esta Superioridad existe una falta de interés en la acción de habeas data por parte de la señora MAYIN CORREA con respecto a la información nominativa o individualizada en efecto el Pleno observa que no puede concederse la acción formulada por no haberse acreditado por parte de la peticionaria un interés legítimo respecto de la información requerida tal como lo dispone el artículo 11 de la Ley No 6 de 22 de enero de 2002 en concordancia con el artículo 8 del Decreto Ejecutivo No 124 de 21 de mayo de 2002 reglamentario de la aludida Ley que hace referencia que es persona interesada aquella que tiene relación directa con la información que solicita

Sobre la necesidad de interés legítimo en estas acciones ya la Corte se ha referido a este tópico en sentencia de 14 de mayo de 2002 de la siguiente manera

En apreciación de este Pleno la novísima acción ha de tener un control de admisibilidad para determinar si cumple con los presupuestos que para su admisión a trámite requiere la ley dentro de la libertad de formas que instituye su ley de creación Si bien es cierto que cualquier persona que tenga interés puede promoverla, entendiendo por interés aquella situación personal o individual que le concierne de manera inmediata, actual y cierta por el acto

solicitado circunstancia que evidentemente ha de acreditarse por el accionante

El artículo 11 de la Ley 6 de 2002 dispone

Será de carácter publico y de libre acceso a las personas interesadas la información relativa a la contratación y designación de funcionarios planillas gastos de representación costos de viajes emolumentos o pagos en concepto de viáticos y otros de los funcionarios del nivel que sea y/o de otras personas que desempeñen funciones publicas

(Subraya el Pleno)

Se desprende de la lectura de la disposición reproducida, que para los casos previstos en dicho artículo se requiere interés como lo ha definido este Pleno y lo reitera el artículo 8 del Decreto Ejecutivo No 124 de 21 de mayo de 2002

Es obvio entender que el suministro de información almacenada en archivos del estado debe concederse a las personas interesadas en esa información criterio interpretativo que viene a reforzar el numeral 10 del artículo 1 de la Ley 6 de 2002 (definiciones) que al definir el principio de acceso publico cuando concluye en especial tratándose de su información personal Esta posibilidad está en armonía con el fundamento del habeas data como mecanismo de protección de la información de personas registradas en las oficinas publicas y también privadas (Véase Ley N 24 de 22 de mayo de 2002 Que regula el servicio de información sobre el historial de crédito de los consumidores o clientes) Esta modalidad de habeas data concuerda con la que el publicista argentino denomina el habeas data informativo y cuya finalidad es garantizar el ejercicio de aquellos que se encuentren potencialmente afectados (Véase O Puccinelli El habeas data en Iberoamérica Editorial Temis 1999 pág 221) y que tiene su fundamento constitucional en el derecho a la intimidad que el Pleno de esta Corte ha incorporado al artículo 29 de nuestra Constitución Política

En el habeas data como ha expresado reiteradamente este Pleno se distinguen en ella dos modalidades que son aceptadas por la doctrina y el Derecho Comparado el habeas data propio que tiene como objeto la tutela del derecho a la autodeterminación informativa y el impropio que persigue la obtención de información publica como un mecanismo inherente a los principios republicanos de gobierno de publicidad de los actos de gobierno y la información de esos actos de manera generalizada, y con ello el fortalecimiento del sistema democrático

La doctrina y el derecho comparado ubican la información individualizada o personalizada (que denomina nominativa) al habeas data propio y lo mismo hace el artículo 2 de la Ley 6 de 2002 y a la necesidad para requerir la información que le concierne al peticionario de ostentar un interés legítimo al amparo del artículo 11 de la citada Ley

Caso totalmente distinto es si la información requerida no es individualizada, personal o nominativa, o anónima, sino dice relación por ejemplo con los gastos que en general realice una entidad publica sin esa connotación nominativa en cuyo caso los artículos 8 y 10 de la mencionada Ley lo permiten sin requerir el interés legítimo que exige el artículo 11 de la mencionada Ley y que se ubica en la modalidad del habeas data impropio Este el impropio se refiere al derecho que tiene toda persona de informarse sobre asuntos gubernamentales que sean de interés publico o general y que como tales interesan *prima facie* a la colectividad

La doctrina y el derecho comparado reservan pues el acceso a esta información individualizada o personalizada (que denominan también nominativa) al habeas data propio y lo mismo hace el artículo 2 de la Ley 6 de 2002 y a la necesidad en ese supuesto de ostentar un interés legítimo viene requerido por

el artículo 11 de la citada Ley como ha venido señalándolo la doctrina mayoritaria de este Pleno de manera consistente y reiterada. Caso totalmente distinto es si la información requerida no es individualizada, personal o nominativa, o anónima, sino que se refiera a información almacenada por una entidad pública sin esa connotación nominativa, en cuyo caso los artículos 8 y 10 de la referida Ley permiten el acceso a la información a cualquiera, es decir coincide con el habeas data impropio.

Ante esta circunstancia y en virtud de que la señora MAYIN CORREA no ha acreditado con su acción que tenga legitimidad ya sea por no tener relación directa o personal con la información solicitada a la funcionaria municipal por lo que estima el Pleno que no es viable conceder la acción de habeas data y como consecuencia de ello negar el habeas data impetrado que conoce el Pleno en virtud de su apelación por la Secretaría General del Municipio de Panamá.

En base a las razones expuestas el Pleno considera oportuno conceder parcialmente la acción de habeas data, exclusivamente por la información que no se encuentra individualizada y que no es por ello nominativa, y no concederla con respecto a la información que tenga este último carácter.

En virtud de lo anteriormente expuesto el PLENO administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley CONCEDE PARCIALMENTE la acción de habeas data. SE ORDENA que se suministre la información con respecto a la cantidad de vehículos y motos que se han comprado desde septiembre de 1999 hasta la fecha por parte de la Alcaldía de Panamá y REVOCA la Sentencia de 13 de agosto de 2002 emitida por el PRIMER TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DE PANAMÁ en todo lo demás.

Notifíquese.

ROGELIO A. FÁBREGA ZARAK

ARTURO HOYOS CÉSAR PEREIRA BURGOS (Con Salvamento de Voto) ANÍBAL SALAS CÉSPEDES WINSTON SPADAFORA FRANCO JOSÉ A. TROYANO (Con Salvamento de Voto) ADÁN ARNULFO ARJONA L. (Con Salvamento de Voto) VIRGILIO TRUJILLO LOPEZ ROBERTO GONZALEZ R.

CARLOS H. CUESTAS G. (Secretario General)

SALVAMENTO DE VOTO DE CÉSAR PEREIRA BURGOS

Como quiera que mi criterio judicial resulta contrario a la fundamentación jurídica que generalmente emplean la mayoría de los Magistrados que integran el Pleno de esta Corporación de Justicia para decidir las acciones de habeas data, vuelvo a cumplir con la formalidad procesal de salvar mi voto en virtud de lo cual adelanto las siguientes consideraciones:

La presente resolución judicial tiene la peculiaridad de que concede parcialmente el habeas data propuesto por Mayín Correa contra la Secretaría General del Municipio de Panamá. En este sentido se pronuncia la medida jurisdiccional. SE ORDENA que se suministre la información con respecto a la cantidad de vehículos y motos que se han comprado desde septiembre de 1999 hasta la fecha por parte de la Alcaldía de Panamá. Hago énfasis en el término peculiaridad porque indudablemente que esta medida, para ser positivos de alguna manera varía el concepto restrictivo que imperaba en las acciones de habeas data, de pretender exigir un legítimo interés para todo tipo de información que se solicitara, sin distinguir el carácter del dato peticionado. Vemos que al menos en esta oportunidad existe un avance jurisprudencial cuando se admite que si la información no es individualizada sino dice relación por ejemplo con los gastos que en general realice una entidad pública sin esa connotación nominativa interesan prima facie a la colectividad.

No obstante lo anterior debo manifestar que aun persiste esa noción, a mi juicio equívoca, de insistir en la exigencia de que el actor acredite un interés cuando la información requerida guarda relación con los datos de manejo y funcionamiento de una institución pública que menciona el artículo 11 de la Ley N 6 de 22 de enero de 2002. Como lo he manifestado en innumerables salvamentos de voto tal argumentación fáctica contradice notablemente el objetivo fundamental propuesto por esa normativa legal cual es el de garantizar el derecho a que los asociados tengan la posibilidad de acceder sin necesidad de formalismos ni de acreditar legitimidad a las informaciones consideradas de acceso público. También entra en evidente conflicto con el mismo tenor literal del artículo 11 que establece que los datos allí mencionados son de carácter público.

Reitero mi posición de que el actor solamente debe acreditar un interés respecto a la información peticionada cuando el dato sea de carácter personal más cuando la información exigida sea otra diferente que se encuentre en manos de cualquier institución pública, únicamente debe atenderse el presupuesto de que no tenga restricción es decir que no esté calificada como confidencial o de acceso restringido tal como claramente establece nuestra legislación.

Noto con preocupación que la presente resolución judicial al igual que se ha hecho en otras decisiones jurisdiccionales apela a la elaboración de conceptos doctrinales que sólo son útiles para determinar la necesidad de demostrar un interés en casos de que la información sea de carácter personal lo cual ni es el tema que divide las opiniones en esta Superioridad, ni guarda relación con los datos que exige recibir la patente mediante el presente mecanismo procesal de habeas data, que son todos de carácter público y no personal.

Aunado a eso aprecio que la resolución contiene una clara contradicción cuando manifiesta primeramente que la acreditación de un interés sólo es exigible para informaciones personales o individualizadas sin embargo seguidamente se concluye concediendo el habeas data propuesto sólo de manera parcial cuando está claro que la información peticionada por Mayín Correa no tiene ningún rasgo que revele que lo que se pretende es invadir la privacidad o intimidad de alguna persona. Y es que lo solicitado por Correa concierne a la cantidad de vehículos y motos comprados desde septiembre de 1999 hasta la fecha la cuantía de la compra y la o las empresas a las que le fueron comprados. Como se aprecia, ninguno de estos datos tiene la cualidad de ser una información de carácter personal. Se tratan de informaciones sobre manejo y funcionamiento del Municipio de Panamá, que son de carácter público y por ende no debe ser exigible ningún formalismo como el de acreditar un interés para proporcionarla. Hay que recordar que en materia de contrataciones de las instituciones públicas rige el principio de transparencia, el cual alude entre otros supuestos a que la actuación de las autoridades sea pública de ahí que no guarde ninguna relación con los términos de privacidad el hecho de que se ofrezcan los nombres de las empresas que han realizado contratos en este caso con el Municipio de Panamá para proporcionarles o venderles vehículos y motos.

Asimismo debo precisar que la presente resolución hace uso inadecuado de la terminología o significación del principio de acceso público pilar fundamental de la Ley N 6 de 22 de enero de 2002. Sobre este particular aspecto observo que el fallo arriba a la consideración de que el suministro de información almacenada en archivos del estado debe concederse a las personas interesadas y señala que ese criterio interpretativo lo refuerza el numeral 10 del artículo 1 que contiene la definición del principio de acceso público y para tales efectos se cita la última línea de su texto que señala en especial tratándose de su información personal. A mi juicio este método de interpretación de la ley es incorrecto pues al referirse únicamente a la última línea del texto que define el principio de acceso público lo que ocasiona es que se aparta de su real significación y contenido. El citado numeral define el principio de acceso público como el Derecho que tiene toda persona para solicitar y recibir información veraz y oportuna, en poder de las autoridades gubernamentales y de cualquier institución a la que haga mención esta Ley en especial tratándose de su información personal. De este texto se desprende 1) la potestad que tiene cualquier ciudadano de peticionar y recibir las informaciones públicas en poder de las instituciones que menciona la ley y 2) la facultad que tiene la persona para obtener la información que le concierne.

Salta a la vista que contrario a lo que se expone en la presente resolución, legalmente se encuentra establecida la facultad de que cualquier persona, solicite y obtenga informaciones en manos del Estado (primer supuesto) No entiendo cómo se puede aludir al principio de acceso publico para insistir en la exigibilidad del requisito del interés cuando es precisamente ese principio el que le concede el derecho a cualquier ciudadano para solicitar y recibir los datos de carácter publico Reitero que tal requerimiento sólo debe ser procedente cuando la información es personal

Los operadores de justicia no debemos perder de vista que el ámbito de protección de la acción de habeas data en nuestro medio comprende la consecución de propósitos más genéricos que los consignados a nivel de interpretaciones doctrinarias A manera de ejemplo podemos consultar la regulación del habeas data en Argentina, que se concibe como un remedio urgente para que las personas puedan obtener a) el conocimiento de los datos a ellos referidos y de su finalidad que consten en registros o bancos de datos publicos o privados y b) en su caso para exigir la supresión rectificación confidencialidad o actualización de aquéllos (FALCON Enrique Hábeas Data (concepto y procedimiento) Editorial Abeledo Perrot Buenos Aires 1996 p 23)

La idea doctrinal en cita permite inferir que el marco de protección que ofrece la acción de habeas data, se circunscribe al amparo del derecho a la privacidad ante el desmedido avance de las tecnologías de la información para evitar que terceras personas hagan un uso indebido de la información de carácter personal que les concierne

Ahora bien es importante precisar que el texto legal que regula la acción de habeas data en nuestro medio no sólo se concibe para garantizar ese aludido respeto al derecho a la intimidad tal como se contempla a nivel de la doctrina También pretende la consecución de un objetivo particular y estimo es el que se ha obviado en todos los casos de habeas data cual es el de **garantizar la transparencia de las Instituciones del Estado en la administración pública**

El principio de transparencia se define en el numeral 13 del artículo 1 de la Ley N 6 de 22 de enero de 2002 y alude al Deber de la administracion publica de exponer y someter al escrutinio de la ciudadanía la informacion relativa a la gestion publica al manejo de los recursos que la sociedad le confia a los criterios que sustentan sus decisiones y a la conducta de los servidores publicos De allí se desprende no solo que los representantes de las instituciones publicas tienen el compromiso legal de declarar exhibir y explicar todos los datos que involucren manejo de los recursos y detalles de funcionamientos de las dependencias sino que finalmente las personas interesadas en obtener esos datos somos todos los asociados

Frente a un escenario legal tan claro como el que tenemos resulta sin sentido elaborar ideas doctrinales más que académicas confusas que pretenden atribuir requisitos procesales donde es evidente que la ley no lo exige Fallos como el presente no sólo obvian esa diáfana intención de ley sino que se tornan ilógicos e incomprensibles pues se insiste en manifestar que para obtener los datos descritos en el artículo 11 de la Ley N 6 que se refieren, entre otros a contrataciones y designación de funcionarios planillas gastos de representación costos de viajes emolumentos y pagos de viáticos se requiere acreditar un interés legítimo pero no se percibe que algunas de esas informaciones como de planillas y gastos de representación de las instituciones publicas se encuentran publicadas en la internet para la consulta de cualquier persona en el mundo

Reitero que mientras las informaciones solicitadas no sean calificadas de carácter restringido o confidenciales debe garantizarse el principio de acceso publico a la información que diáfamente consagra la Ley

Las consideraciones que se dejan expuestas nos conducen a salvar el voto en la presente resolución judicial

Fecha Ut S pra.

CÉSAR PEREIRA BURGOS

CARLOS H CUESTAS (Secretario General)

SALVAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO JOSÉ A TROYANO

Con todo respeto disiento de la decisión adoptada por la mayoría de los Magistrados que integran el Pleno de esta Corporación de Justicia dentro de la Acción de Hábeas Data propuesta por la señora MAYIN CORREA contra la Secretaría General del Municipio de Panamá, por lo que procedo a cumplir la formalidad de SALVAR EL VOTO con fundamento en las siguientes razones

En primer lugar el criterio mayoritario se inclina por CONCEDER PARCIALMENTE la acción de hábeas data para que se suministre la información solicitada por la señora MAYIN CORREA consistente en la cantidad de vehículos y motos que ha comprado la Alcaldía de Panamá, desde septiembre de 1999 hasta la fecha

En segundo lugar la mayoría del Pleno resuelve REVOCAR la Sentencia de 13 de agosto de 2002 emitida por el Primer Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial de Panamá en el sentido de no conceder aquella información consistente en indicar a qué empresas le fueron comprados dichos vehículos y motos la cuantía de la compra en forma individualizada por vehículo

Esta ultima decisión se fundamentó principalmente en el hecho de que la información requerida no se encuentra ubicada dentro de aquella que guarda relación con las actuaciones generalizadas del Estado (ya que la solicitada es nominativa o individualizada) y de la cual sí está obligada a proporcionar toda entidad publica, con fundamento en los artículos 8 y 10 de la Ley N 6 de 2002

Es decir que la sentencia mayoritaria le ha dado a parte de la información solicitada por la señora MAYIN CORREA la connotación de información nominativa o individualizada señalando que ésta no es más que aquella que se encuentra almacenada en registros informatizados o bancos de datos que sólo le corresponde obtenerla su titular siempre que no se trate de información confidencial o restringida y se acredite tener un interés legítimo tal como lo exige el artículo 11 de la Ley N 6 de 2002 en concordancia con el artículo 8 del Decreto Ejecutivo N 124 de 21 de mayo de 2002 que señala como persona interesada a aquella que tiene relación directa con la información que solicita

Con todo respeto debo manifestar como reiteradamente lo he venido haciendo en materia de Hábeas Data, que no estoy de acuerdo con este planteamiento por cuanto considero que toda persona tiene derecho no sólo a solicitar información sobre sus actuaciones personales sino como ciudadano tiene derecho a conocer sobre toda aquella información que guarde relación con las gestiones o actuaciones del Estado o de la Administración lo que incluye toda gestión o contratación publica que celebra la Administración con otros entes particulares sin que sea requisito necesario para el que solicite la información que demuestre tener un interés directo ya que basta y sobra, como expresara en líneas anteriores tener la condición de ciudadano para estar legitimado y tener acceso a la información cuando no se trata exclusivamente de asuntos íntimos o personalísimos de otro individuo

Es que no podemos soslayar que en contraposición al interés legítimo el carácter nominativo o individualizado que pueda existir entre la información solicitada y la persona que hace la petición tratándose de una información relativa a una actuación del Estado existe lo que en la esfera del Derecho Administrativo se conoce como el Interés Simple que es el que no pertenece a la esfera de las

necesidades o conveniencias particulares del titular sino solamente a la de las necesidades y conveniencias publicas Es el interés que tiene todo particular en que la ley sea cumplida (BROMI JOSE ROBERTO Derecho Subjetivo y Responsabilidad Publica 1980 pág 40)

Lo anterior es lo que de manera más concreta, y para el caso específico denomino el Interés Ciudadano el cual se encuentra inmerso en el Habeas Data Impropio el cual es claro que de acuerdo a nuestra legislación no persigue autorizar información respecto a la intimidad de una persona, sino en cuanto ésta trasciende o esté relacionada con una actividad publica sujeta a una ley que debe ser cumplida

De allí que tanto la doctrina como la jurisprudencia de diferentes países incluso la nuestra, haya reconocido que el Derecho a la Intimidad no es un derecho absoluto y que existen derechos preferentes frente a los cuales no puede subsistir como por ejemplo frente al derecho de control que tienen los administrados sobre las actuaciones del Estado cuando se persigue un fin publico aunque en estas actuaciones esté involucrado o participe un particular

En este sentido debo advertir que cuando los entes particulares contratan con el Estado lo hacen con el conocimiento de que por el sólo hecho de participar en estas actividades publicas en cierto grado renuncian a parte de su privacidad no a su intimidad en tanto y en cuanto su participación esté involucrada en la consecución de un fin publico Igualmente el particular tiene que reconocer que desde el momento en que se involucra en las actividades del Estado queda sometido al Derecho Publico en donde el interés general prima sobre el particular

De igual manera, debo advertir que no comparto lo afirmado en la sentencia respecto a la necesidad de ostentar un interés legítimo por parte de la señora MAYÍN CORREA en cuanto a la información requerida, fundamentado en lo que la doctrina conoce como hábeas data tradicional o propio y en el artículo 2 de la ley 6 de 2002 ya que en nuestro concepto la petición que se analiza no encaja dentro de este tipo de hábeas data De aceptarse esta tesis jamás se podría solicitar información relativa a una persona natural o jurídica, que alguna actuación haya tenido con un ente estatal lo que hace desaparecer toda la razón de ser de una Ley de Transparencia de la Gestión Publica, como lo es la Ley N 6 de 22 de enero de 2002

Por tanto en nuestro concepto el carácter de personal o individual de la información a que se refiere el artículo 3 de la Ley N 6 de 2002 es en relación con la información que de sí misma solicita el peticionario (Hábeas Data Propio o Tradicional) pero distinto supuesto es la información que se solicita de una persona involucrada en una gestión o actuación publica, siendo esta la situación contemplada en el artículo 2 de la mencionada Ley que se conoce como Habeas Data Tradicional o Impropio que es precisamente el caso que nos ocupa

A no dudarlo considero con todo respeto que la sentencia de la cual disentimos parece desconocer que el poder del Estado de la Administración ha crecido considerablemente y que asimismo debe no sólo crecer el control de parte de los administrados sino mantenerse como garantía para controlar los actos de la Administración y la forma de hacer efectiva su responsabilidad de salvaguardar la transparencia y legalidad como base fundamental de todo Estado de Derecho del que tanto se ha hablado y aspirado nuestro país

Es importante señalar que el texto legal que regula la acción de Hábeas Data en Panamá (Ley N 6 de 2002) no sólo se concibe para garantizar ese aludido respeto al derecho a la intimidad como se contempla a nivel de la doctrina sino que también pretende la consecución de un objetivo particular y que estimo es el que se ha obviado en el presente caso cual es el de garantizar la transparencia de las instituciones del Estado en la Administración Publica De allí que su operatividad responda a los presupuestos de requerir tanto información de carácter personal como aquella distinta que se encuentre en manos de agentes del

Estado o de cualquier institución pública que no tenga restricción y que no pertenezca a la esfera íntima o personalísima de otra persona

A nuestro entender y como corolario de lo antes dicho la Ley de Transparencia no es más que un arma adicional de control de las actuaciones del Estado (latus sensu) en poder de los ciudadanos control que no puede estar desligado del poder Estatal

De allí que nos permitamos dada la importancia de este control garantizante del manejo de la cosa pública, citar algunas interpretaciones y explicaciones sobre su contenido y finalidad trasplantando los conceptos vertidos a lo que debe ser nuestra Ley de Transparencia como representativa del Control Ciudadano

En el sentido expuesto JOSE ROBERTO DROMI (ob cit págs 65 66 67 y 73) nos comenta

La estructura política del Estado como fiel reflejo de la sociedad está integrada por los que mandan y los que obedecen equivalentes de gobernantes y gobernados poder y derecho prerrogativa y garantía autoridad y libertad respectivamente Las funciones y competencias públicas del Estado han crecido de manera notoria, tanto en el ámbito funcional (formal) como finalista (sustancial y material) Se impone como necesario para un equilibrio razonable y prudente de estas polaridades entre autoridad (libertad de los que mandan) y libertad (autoridad de los que obedecen) un sistema eficaz de control público Dada la autoridad, solo cabe pensar en controlarla Los Medios de control varían conforme a los estadios culturales de los países

El control público está enraizado como principio natural en la misma estructura del poder estatal, pues no hay poder sin control, o al menos, no debe haberlo Es un predicado republicano su instauración y regulación más aun en tiempos de un Estado providencial planificador y burocrático El control se impone para asegurar la sujeción del obrar público a reglas y principios del derecho y buena administración, en el que debe imperar inexcusablemente la perspectiva finalista del bien común (causa fin), a la que debe ajustarse el poder (causa medio) El control es el instrumento impuesto para verificar esa correspondencia entre medios y fines A mayor control, menor abuso Un deficiente procedimiento de fiscalización o estructura de contralor, además del riesgo político por las tentaciones que el ejercicio del poder ofrece, coadyuva a ensflorear la arbitrariedad y descomponer valores en desmedro del fin último y primero del Estado el bien común

Gobierno y control parece ser la fórmula orgánica de la estructura futura del poder para que a los que mandan no les falte poder y para que a los que obedezcan no les falte libertad resguardada con controles idóneos que aseguren calidad y eficacia Así pasaremos del mito y símbolo del control a la realidad, superando las contradicciones entre detractores y defensores del control, para asegurar la definitiva radicación e instauración de este valioso instrumento de protección ciudadana

Debemos recordar que además de la explicación de derecho positivo existe la explicación racional sin la cual aquella estaría desprovista de fundamentación lógica, puesto que administrar supone en sí subordinación Nos explicamos administrar adquiere relevancia para el derecho cuando se escinde esta actividad de la de disposición de algo confiriéndosela a otro sujeto distinto de aquel que conserva su disposición De allí que administrar sea siempre una actividad subordinada Es decir bajo las directivas u órdenes de otro de aquel que dispone las cosas como señor (dominus) con dominio De allí también que el que dispone el que conserva la disposición tenga la potestad de controlar al que administra Por su parte el que administra tiene el deber jurídico de dar cuenta a aquel de su administración, y de responder de sus actos En consecuencia, puede afirmarse que la administración como actividad subordinada lleva, implícita e ínsita, la idea

de control O sea, pedir cuenta por una parte y responder por la otraB Estas ideas, que constituyen verdaderos principios fundamentales de todo ordenamiento jurídico, son, obviamente, aplicables y de modo pleno a la administración de la cosa publica (res publica) Es decir, a la actividad administrativa estatal que realizan los órganos de la administración del Estado Ello viene a configurar el llamado principio de la juridicidad del actuar de la administración (Las subrayas y negrillas son del suscrito)

Finalmente y como un llamado a la reflexión me permito traer a colación los preocupantes comentarios vertidos por los autores PIERIVI LORENCES y TORNABENE cuando al referirse a una falta de control efectivo nos comentan

UNA GESTIÓN FUNCIONAL SIN CONTROL EFECTIVO EN SECRETO EN PENUMBRAS O CON OBSTACULOS INSALVABLES IMPLICA UNA ACTIVIDAD CEÑIDA CON LA ESCENCIA DEL ESTADO DEMOCRÁTICO Y DEJA LA PUERTA ABIERTA PARA TRANSGRESIONES Y ABUSOS INACEPTABLES (Hábeas Data Derecho a la Intimidad Editorial Universidad Buenos Aires 1998 pág 31)

Todo lo anterior correctamente interpretado nos lleva a las siguientes conclusiones

- 1) En todo Estado de Derecho debe existir en manos de los administrados un control de las actuaciones de la Administración
- 2) La Ley N 6 de 22 de enero de 2002 que dicta normas para la Transparencia en la Gestión Publica, es una forma de control de las actuaciones de la Administración y
- 3) En nuestro país está resultando un tanto inoperante esta forma de control por cuanto que en nuestro concepto en su interpretación y aplicación se desconocen claros principios que rigen el Derecho Administrativo lo que no permite a los ciudadanos el uso y disfrute de un derecho que como tal les corresponde

En consecuencia quiero señalar con todo respeto que por más esfuerzos que hagamos de nada valen las proclamaciones de Estado de Derecho si no se obtiene la sujeción de la administración al derecho y a la justicia y el convencimiento de que su realización depende de un efectivo autocontrol administrativo a través de normas y regulaciones adecuadas que se hagan valer pues de lo contrario se estaría dando paso al axioma de que Los principios dejan de ser tales si no se logra su aplicación práctica y eso es precisamente lo que está ocurriendo en el presente recurso de Hábeas Data en el que la mayoría del Pleno ha decidido negarle a la Señora MAYIN CORREA información de carácter publico relacionada con el manejo de la cosa publica, haciendo inoperante el pretendido control que se trató de introducir con la Ley de Transparencia de la Gestión Publica

Por ello debo reiterar que como mi criterio sustentado en las consideraciones antes señaladas es contrario al expuesto por la mayoría de los Magistrados que integran el Pleno de esta Corporación de Justicia, SALVO EL VOTO en la presente acción de Hábeas Data

F h Ur S p a

JOSE A TROYANO

CARLOS H CUESTAS G (S cretario General)

SALVAMENTO DE VOTO DE ADAN ARNULFO ARJONA L

Tal como he expresado en circunstancias similares me veo en la necesidad de exponer un criterio discrepante con la decisión adoptada por la mayoría, fundado en las siguientes razones

1 La decisión de mayoría acoge el criterio que exige la presencia de un interés para solicitar información que por su naturaleza es de carácter publica Este criterio descansa en la aplicación del artículo 8 del Decreto Ejecutivo No 124 de 2002 por el cual se reglamentó la Ley 6 de 2002

2 La Ley 6 de 22 de enero de 2002 favorece al acceso ciudadano a la información pública e instituye mecanismos procesales como el Hábeas Data para garantizar este propósito

3 En lo que atañe al requisito del interés que debe reunir el peticionario de la información considero que el artículo 8 del Decreto Reglamentario 124 de 21 de mayo de 2002 contiene una acepción que no se compadece con la tesis de las normas que en la Ley 6 procuran facilitar el acceso ciudadano a la información pública. Si el artículo 8 del Decreto concibe una visión restringida del interés para que una persona pueda tener acceso a la información pública, y ésta concepción contradice las normas de la Ley 6 concepto que bien puede inaplicarse dicho Decreto Reglamentario en la medida en que éste prima facie se aparta de la letra y espíritu de la Ley que busca reglamentar. La inaplicación de un Decreto aparentemente contrario a la Ley vendría justificada por la preocupación de no sacrificar o menoscabar los principios o postulados que inspiraron la adopción de la Ley los cuales no deben experimentar detrimento por dos razones básicas a saber a) Porque el ejercicio de la potestad reglamentaria de las Leyes tiene que desplegarse sin apartarse en ningún caso de su texto ni de su espíritu (artículo 179 numeral 14 de la Constitución Nacional) b) Porque la facultad reglamentaria está concebida para lograr el mejor cumplimiento de la Ley tal como proclama expresamente el numeral 14 de la disposición constitucional antes mencionada

La jurisprudencia de la Sala Tercera de ésta Corporación ha reconocido en un número plural de decisiones la posibilidad de inaplicar instrumentos normativos de jerarquía inferior a la Ley en la medida en que estos contradigan los propósitos perseguidos por ésta última. A este respecto pueden tenerse en cuenta los siguientes pronunciamientos

a Sentencia de 8 de febrero de 2002 dictada dentro del proceso Contencioso Administrativo de Plena Jurisdicción propuesto por Nitzia María Fernández vs Rector de la Universidad Tecnológica de la Universidad de Panamá en la que la Sala señaló

Un instrumento de jerarquía inferior a la Ley no puede conceder válidamente el derecho de estabilidad tal cual argumenta la parte actora. Sobre este particular la Sala ha dicho expresamente que no puede un reglamento interno con jerarquía inferior a una Ley conceder estabilidad a los servidores públicos como en éste caso se pretende. Ello tiene claro fundamento en lo previsto en el artículo 297 de la Constitución Nacional (Sentencia de 14 de septiembre de 2001 caso Carlos Landau vs Caja de Seguro Social. En igual sentido ver sentencia de 30 de agosto de 2001 caso Cristóbal González vs Ministerio de Desarrollo Agropecuario entre otras)

Cabe agregar al respecto que el artículo 15 del Código Civil dispone que las órdenes y demás actos ejecutivos del gobierno expedidos en ejercicio de la potestad reglamentaria, tienen fuerza obligatoria y serán aplicados mientras no sean contrarios a la Constitución o a las Leyes. En asuntos sub-lite no puede ser aplicado el artículo 93 del reglamento Interno del personal administrativo de la Universidad demandada ya que contraviene el precepto fundamental antes anotado

b Sentencia de 2 de febrero de 2000 proceso administrativo de Plena Jurisdicción Reynaldo Rodríguez vs Banco de Desarrollo Agropecuario

En definitiva, soy de la opinión que si el Decreto Reglamentario establece restricciones para acceder a la información pública éstas restricciones podrían dejarse de aplicar para los efectos de no sacrificar los postulados fundamentales que inspiran y justifican la Ley 6 de 2002

En consecuencia considero que la Sentencia de 13 de agosto del 2002 venida en apelación debió ser confirmada, concediendo el Hábeas Data en forma total y no parcial. Como desafortunadamente este criterio no ha sido acogido por la mayoría respetuosamente manifiesto que SALVO EL VOTO

Fecha: 15 de agosto de 2002.
ADAN ARNULFO ARJONA L.
(General)

CARLOS H. CUESTAS G. (Secretario)

ACCION DE HABEAS DATA PRESENTADA POR EL LICDO RICARDO SANTOS G EN REPRESENTACIÓN DE SONIA UJUETA (REPRESENTANTE DE MENOR STEFAN ALBERT TOLA) CONTRA LA DIRECTORA GENERAL DEL IPHE ALICIA FRANCO

Tribunal Corte Suprema de Justicia, Panamá

Sala Pleno

Ponente Adán Arnulfo Arjona L

Fecha 23 de Mayo de 2003

Materia Hábeas Data

Primera instancia

Expediente 199 03

VISTOS

El Pleno de la Corte Suprema de Justicia conoce de la acción de Habeas Data promovida por el licenciado RICARDO SANTOS en representación de SONIA UJUETA (en su calidad de representante del menor STEFAN ALBERT TOLA) contra la Directora General del Instituto Panameño de Habitación Especial (I P H E) profesora ALICIA FRANCO

La acción de habeas data fue admitida por el Magistrado Sustanciador por estimar que cumplía con los presupuestos formales que condicionan su admisión

I PRETENSIÓN DEL ACCIONANTE

Aduce el recurrente que el acto censurado consiste en la negativa de la Directora General del I P H E profesora ALICIA FRANCO de corregir o eliminar la información incorrecta que aparece en el archivo de la Escuela de Enseñanza Especial relacionada con su hijo STEFAN ALBERT TOLA

En este contexto la accionante ha señalado que las notas que aparecen en los boletines de los años 2001 y 2002 del menor STEFAN TOLA deben ser corregidas o eliminadas toda vez que no pueden corresponder a una persona que sufre enfermedad mental permanente (síndrome de down) y un retardo mental profundo y grave cual es el caso de su hijo

Añade que pese a lo anotado se le confeccionó al niño STEFAN TOLA un boletín escolar con notas y asignaturas que pertenecen a una educación regular lo cual no sólo constituye evidentemente un error sino que además le otorgaría un status que le impediría continuar recibiendo la enseñanza especializada que requiere por su condición mental

De esta manera la parte actora solicitó al Pleno de la Corte Suprema de Justicia que ordene a la Directora General del Instituto Panameño de Habitación Especial como custodio de los archivos en cuestión que corrija o elimine los datos incorrectos que constan en dichos archivos para los años 2001 y 2002 en relación al menor Stefan Tola

II CONTESTACIÓN DE LA FUNCIONARIA DEMANDADA

La Directora General del Instituto de Habitación Especial rindió su informe en relación a este caso solicitando al Tribunal que niegue la acción de habeas data, por considerar que en ningún momento se ha violado la normativa legal pertinente

En este contexto la funcionaria acusada ha explicado al Tribunal lo siguiente

Al respecto le comunicamos que el día 7 de febrero del año en curso se emitió la Nota No 127 03 D G en donde se daba respuesta a la señora Ujueta madre del menor basandonos en la Resolución Final expedida por la Defensoría del Pueblo de la República de Panamá bajo N 883d 01 de 13 de agosto de 2002 en la que concluyen las investigaciones relacionadas con la solicitud hecha por la Sra. Ujueta en representación de su hijo Albert Tola, y en donde no se señala que el IPHE tenga que eliminar el archivo escolar del menor Tola en los periodos 2001 y 2002

En la exposición de hechos que realiza la parte actora se manifiesta en el punto tercero que al menor Tola se le ha confeccionado un boletín escolar con notas y asignaturas que pertenecer a una educación regular con el único propósito de sacarlo de su escuela de Enseñanza Especial alegación que consideramos no tiene fundamentación legal y que vulnera el derecho que tienen las personas con discapacidad a educarse en igualdad de oportunidades

Señala la parte actora en el punto cuarto que en los 39 artículos del Decreto Ejecutivo No 1 de 4 de febrero de 2000 por ninguna parte se menciona que estos (sic) niños se les califique con notas de 1 a 5 al respecto el Artículo Noveno del mencionado Decreto manifiesta que los centros de educación especial utilizarán el currículo único nacional del Ministerio de Educación con las adecuaciones que respondan a las necesidades individuales de los alumnos En ese sentido el artículo 18 del mencionado Decreto señala que se utilizara la misma escala de calificación establecida en la normativa de educación del Ministerio de Educación acorde a las adecuaciones según las necesidades de cada estudiante por lo que consideramos se ha actuado bajo lo estipulado en el Decreto y no de manera antojadiza como pretende la Sra Ujueta que se haga cambiándole las calificaciones al menor

Al respecto podemos señalarle que antes de la interposición del Recurso de Habeas Data la parte actora tenía conocimiento de la respuesta por parte de la Institución según consta en la documentación que se adjunta respuesta que consideramos se apega estrictamente a lo estipulado en las Leyes por lo cual no podemos dar respuesta satisfactoria a la Sra Ujueta de eliminar del archivo de la Escuela de Enseñanza especial del IPHE las calificaciones que aparecen en los boletines del año 2001 y 2002

II DECISIÓN DEL TRIBUNAL DE HABEAS DATA

Una vez surtidos los trámites legales previstos para este tipo de procesos el Pleno de la Corte se apresta a resolver la litis previo las siguientes consideraciones

1 Naturaleza de la acción de habeas data

La acción de habeas data, recientemente incorporada a nuestro ordenamiento jurídico constituye un mecanismo procesal destinado por una parte a la protección y aseguramiento del derecho a la intimidad y concretamente del derecho a la privacidad que le asiste a las personas con respecto a los datos o información personal que le concierne Asimismo esta institución permite a toda persona que lo solicite el acceso a fuentes de información de carácter público

El jurista panameño Rigoberto González Montenegro se ha referido ampliamente al tema en su obra EL HABEAS DATA indicando

Se introduce y regula por tanto en nuestro sistema jurídico un Hábeas Data amplio al regularse este en sus dos modalidades y por los cuales tanto para la persona que solicita su información o dato personal como para quien la que requiere es de índole general se dota a uno y otro de un instrumento jurisdiccional que viene a poner freno y remedio a los caprichos y arbitrariedades de aquellos funcionarios públicos que desconociendo el derecho que se tiene a la información por parte de toda persona ya sea de acceso público o cuando lo sea de carácter particular se termina negando el conocimiento de la misma (GONZALEZ Rigoberto EL HABEAS DATA Segunda Edición. Lutho Editorial Chen S A Panama 2002 pág 77)

La acción de habeas data se encuentra jurídicamente regulada en el Capítulo V de la Ley 6 de 22 de enero de 2002. El artículo 17 de la citada ley establece claramente que toda persona a la que no se le haya suministrado la información o dato personal solicitado o cuando se haya suministrado de forma deficiente o *inexacta* podrá promover acción de habeas data.

Por otra parte, el artículo 3 de la Ley 6 de 2002 prevé que toda persona tiene derecho a obtener su información personal contenida en archivos, registros o expedientes que mantengan las instituciones del Estado *y a corregir o eliminar información que sea incorrecta*, irrelevante, incompleta o desfasada.

Resta por tanto examinar la acción de habeas data presentada por la señora SONIA UJUETA a la luz de las disposiciones legales que regulan esta garantía jurisdiccional a fin de determinar si lo pretendido se ubica dentro del marco tutelado por este mecanismo procesal.

2 La acción de habeas data presentada por Sonia Ujueta

En el negocio sub judice, la proponente de la acción de habeas data solicitó al Tribunal que se corrija o elimine la información relacionada con los boletines escolares de su hijo Stefan Tola (años 2001 y 2002) señalando que la Directora del Instituto Panameño de Habilitación Especial se negó a corregirla, pese a que la misma era incorrecta.

Una vez analizado detenidamente el fundamento de la acción ensayada, así como la documentación presentada tanto por el postulante como por la funcionaria demandada, el Tribunal arriba a la conclusión de que es procedente acceder a lo pedido. Esta decisión se explica como sigue:

El planteamiento medular de la señora UJUETA es que su hijo Stefan Tola, un niño con necesidades educativas especiales, pues padece de síndrome de Down y retraso mental severo, recibió durante los años 2001 y 2002 un boletín de evaluación escolar que lo calificó en la escala de uno (1) a cinco (5) es decir idéntica a la calificación que reciben los estudiantes de cualquier centro educativo regular. De allí que en su concepto las calificaciones de su hijo son *absurdas y una falacia*.

Al respecto, la madre del menor es enfática al explicar *a este niño se le ha calificado 3.5 en Español y esto es un absurdo pues todos sabemos que el español es hablado y escrito y el niño Stefan Tola no verbaliza (no habla ni sabe escribir). En matemáticas se le ha calificado con 3.0 y el niño Stefan no sabe contar del 1 al 5 ni mucho menos sabe sumar ni restar*.

En estas circunstancias, la madre del menor solicita que a través del mecanismo correctivo de la acción de habeas data se elimine del archivo escolar de la Escuela de Enseñanza Especial las calificaciones que aparecen en los boletines del año 2001 y 2002 del niño Stefan Tola.

El material que obra en autos acredita que el nivel de funcionamiento intelectual del niño Stefan Tola es deficiente mental grave según consta en el informe psicológico realizado por la Caja de Seguro Social el 9 de abril de 2002 (ver foja 8 del expediente). Tal comprobación pone de manifiesto que dada la condición mental del menor, las calificaciones registradas en los boletines de los años 2001 y 2002 no se compadece con la situación real del niño Tola.

Según ha expresado la Directora General del IPHE, tales evaluaciones se realizan de acuerdo a los lineamientos del Ministerio de Educación y de acuerdo a lo establecido en el Decreto Ejecutivo No. 1 de 4 de febrero de 2000, por la cual se establece la normativa para la educación inclusiva de la población con necesidades educativas especiales. Texto legal que establece en su artículo 18 que dentro del subsistema educativo regular (estudiantes con necesidades educativas especiales) se utilizará la misma escala de calificación establecida en la normativa de evaluación del Ministerio de Educación.

Es fundamental subrayar, sin embargo, que la parte final del citado artículo 18 deja consignado que se utilizará la misma escala de calificación establecida en la normativa de evaluación del Ministerio de Educación acorde a las adecuaciones según las necesidades de cada estudiante. El término adecuación curricular viene definido en el artículo 12 del mencionado Decreto Ejecutivo No. 1 de 2000 como el proceso de ajuste y modificación en uno o más componentes del currículo para dar respuesta a las diferencias de la población escolar.

De acuerdo a lo consta en autos, ninguna adecuación se realizó al momento de calificar al niño Stefan Tola, pese a que el artículo 9 del Decreto *ibídem* prevé que los centros de educación especial utilizarán el currículum único nacional del Ministerio de Educación con las adecuaciones que respondan a las necesidades individuales de los alumnos.

Es dable resaltar por otra parte que el boletín del año 2001 difería notablemente de los boletines de años anteriores en los cuales se calificaban con ponderaciones como *bien muy bien*, *aceptable*, etc. Aspectos tales como áreas especiales, hábitos y habilidades, asistencia, etc. Sin embargo, el boletín del año 2001 calificó al menor en materias tradicionales y en escala de 1 a 5, sin aparentemente realizar ninguna adecuación curricular. Aunque la accionante no presentó copia del boletín del año 2002, se infiere que los mismos criterios prevalecieron en dicho boletín, según se desprende de las afirmaciones y los documentos suscritos por la Directora General del Instituto Panameño de Rehabilitación Especial que obran en autos.

Conforme a lo anterior, esta Superioridad conceptúa viable la pretensión contenida en el presente habeas data, tomando en consideración tres circunstancias puntuales:

1. que las disposiciones legales correspondientes han contemplado de manera expresa, que para los estudiantes con necesidades especiales se utilizará la misma escala de calificación establecida en la normativa de evaluación del Ministerio de Educación acorde con las adecuaciones según las necesidades de cada estudiante, lo que no consta haya tenido lugar en el caso particular del niño Stefan Tola;
2. que el Estado organiza y dirige el servicio público de la educación nacional y garantiza a los padres de familia el derecho de participar en el proceso educativo, lo que ciertamente le otorgaba la posibilidad a los padres del menor de Stefan Tola de elevar su petición para que se eliminaran de los archivos escolares del IPHE los boletines correspondientes a los años 2001 y 2002 del mencionado niño por no ser consonos con la situación y condición especial del menor y

3 que tal como lo señaló la Defensoría del Pueblo la ley es clara en cuanto al derecho que le asiste a toda persona a entre otras cosas eliminar información que sea incorrecta o inexacta utilizando para ello los mecanismos correspondientes solicitud ante el funcionario custodio de la información y en caso de que tal gestión tenga resultados negativos a través de la acción de habeas data consagrada en el artículo 17 de la ley 6 de 2002

De tal instrumento se han servido los proponentes en este caso comprobando a satisfacción del Tribunal que es viable conceder la presente acción de habeas data mediante el cual la señora UJETA solicitó reiteradamente que se eliminara del archivo escolar del IPHE las calificaciones que aparecen en los boletines de su hijo STEFAN TOLA para los años 2001 y 2002 (ver fojas 3 y 4 del legajo)

Cabe recordar que la figura del habeas data no sólo permite corregir información incorrecta, incompleta, inexacta o desfasada, sino también la eliminación de este tipo de información Las palabras corregir y eliminar son definidas por el Diccionario de la Lengua Española de la siguiente manera

Corregir (del lat Corrigere) tr Enmendar lo errado

Eliminar Quitar separar una cosa prescindir de ella

En el negocio sub judice resulta claro para la Corte que la parte actora más que solicitar que se enmiende o rectifique una calificación contenida en el boletín escolar de su hijo lo que realmente ha solicitado es que las calificaciones en cuestión sean eliminadas (dejadas sin valor) por las razones ampliamente explicadas en los párrafos que preceden

De allí que en *estricta congruencia* con lo pedido por la postulante la Corte procede a disponer la eliminación de la información en cuestión no sin antes resaltar dos aspectos fundamentales

En primer lugar es preciso indicar que esta decisión encuentra sustento en la cuidadosa valoración que ha realizado el Tribunal de las *particulares circunstancias del caso* Son precisamente dichas particularidades las que han dado lugar a esta novedosa aplicación para la figura procesal del habeas data de acuerdo con los parámetros previstos en la propia Ley 6 de 2002 consistente en la eliminación de información incorrecta, incompleta, inexacta o desfasada

Resulta importante aclarar sin embargo que la eliminación de las calificaciones del niño TOLA consignadas en los boletines de los años 2001 y 2002 debe entenderse como el mecanismo para restarle eficacia o prescindir de tales calificaciones y no implica la desaparición o destrucción de todos los registros escolares del menor particularmente aquellos en que consta su asistencia al centro educativo durante los años cursados mismos que deberán conservarse para los efectos de que el niño TOLA pueda ser promovido de grado de acuerdo a sus avances o para otros fines escolares de naturaleza análoga

En consecuencia, la CORTE SUPREMA PLENO administrando justicia en nombre de la Republica y por autoridad de la Ley CONCEDE la acción de habeas data promovida por el licenciado RICARDO SANTOS en representación de SONIA UJUETA (en su calidad de representante del menor STEFAN ALBERT TOLA) y ORDENA a la Directora General del Instituto Panameño de Habilitación Especial (IPHE) profesora ALICIA FRANCO que de acuerdo a los parámetros fijados en esta resolución judicial ELIMINE de los archivos de dicho centro educativo las calificaciones de los boletines del niño Stefan Tola para los años 2001 y 2002

NOTIFÍQUESE Y CUMPLASE

ADAN ARNULFO ARJONA L

ALBERTO CIGARRUISTA CORTEZ -- GRACIELA J DIXON C -- ROGELIO A FÁBREGA ZARAK -- ARTURO
HOYOS -- CÉSAR PEREIRA BURGOS -- ANIBAL SALAS CESPEDES -- WINSTON SPADAFORA FRANCO -- JOSÉ
A. TROYANO

CARLOS H CUESTAS G (Secretario General)

**ACCIÓN DE HÁBEAS DATA PRESENTADA POR LA LICENCIADA GRETTEL VILLALAZ DE ALLEN
CONTRA LA DIRECCION GENERAL DE INGRESOS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PONENTE ALBERTO CIGARRUISTA C PANAMA DOCE (12) DE ABRIL DE DOS MIL SIETE
(2007)**

Tribunal Corte Suprema de Justicia, Panamá

Sala Pleno

Ponente Alberto Cigarruista Cortez

Fecha 12 de Abril de 2007

Materia Hábeas Data

Primera instancia

Expediente 1001 06

Vistos

Conoce el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, la acción de Hábeas Data presentada por la licenciada Grettel Villalaz de Allen en su propio nombre contra la Directora General de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas licenciada Gisela de Porras

Señala la recurrente que la información solicitada y no entregada que ha motivado la interposición de la presente acción de Hábeas Data, consiste en los *informes contables o de auditorias de los fondos recibidos por los clubes sin fines de lucro denominados Club Activo 20 30 de Panama y Club Activo 20 30 Internacional de Panama con motivo de los eventos denominados Teleton 20 30 para los años 2001 2002 2003 2004 y 2005*. Agrega que la solicitud de información, fue recibida en la entidad acusada el día 12 de octubre de 2006

De igual forma manifiesta que lo solicitado no es catalogado por nuestra legislación como de carácter confidencial o de acceso restringido en adición a que el Decreto Ejecutivo N1 524 de 31 de octubre de 2005 dispone que *los fondos que reciban las entidades con personería jurídica otorgada por el Ministerio de Gobierno y Justicia son considerados de naturaleza publica*

Consideraciones y Decisión del Pleno

Presentes en la etapa de admisibilidad, procede esta Corporación de Justicia a pronunciarse respecto a los requisitos formales de los cuales debe estar investida toda acción de Hábeas Data para posteriormente ser conocida y decidida en el fondo

Antes de iniciar el análisis sobre la admisibilidad que nos ocupa, conviene manifestar la necesidad de hacer alusión a ciertas figuras principios y alcance de normas sobre Hábeas Data, ya que el presente caso tiene connotaciones importantes que merecen ser aclaradas

Al tenor de lo anterior recordemos que la información solicitada, versa sobre los *informes contables o de auditorias de los fondos recibidos por los clubes sin fines de lucro denominados Club Activo 20 30 de Panamá y Club Activo 20 30 Internacional de Panamá con motivo de los eventos denominados Telétón 20 30 para los años 2001 2002 2003 2004 y 2005*

Como primer punto a aclarar lo constituye el hecho que las agrupaciones sin fines de lucro como el Club Activo 20 30 no persiguen el enriquecimiento de sus miembros razón por la cual a ninguno de los mismos se les reparten los ingresos adquiridos por la organización. Se trata pues de una entidad de carácter privado cuyos miembros no son considerados funcionarios publicos y por tanto no realizan ninguna actividad relacionada a la gestión publica, ya que si bien es cierto deben presentar informes sobre sus estados contables al Ministerio de Economía y Finanzas no es menos cierto que la recaudación

administración destino y ejecución de los fondos que reciben son actividades realizadas por la propia agrupación. Por otro lado resulta innegable que esta agrupación recibe aportes por parte de entidades del Estado sin embargo estas aportaciones no se hacen de manera habitual y mucho menos constituye la principal fuente de ingreso de dicha entidad.

Hacemos hincapié en ello porque bajo la tesis de que esta agrupación recibe fondos de instituciones del Estado es que se solicita la información sobre los estados contables de un ente privado. Situación que no es permitida por la Ley de Hábeas Data, ya que ello se permite excepcionalmente respecto a las empresas privadas que presten servicios públicos o son de capital mixto cuyo servicio lo presten con carácter de exclusividad.

En virtud de lo anterior resulta de imperiosa necesidad establecer el verdadero sentido y alcance de las normas que sobre Hábeas Data rigen en Panamá, para poder determinar sobre qué y quiénes recaen las mismas así como las excepciones que para ello existen. En ese sentido si nos remitimos a la exposición de motivos del texto de la Ley 6 de 2002 se observa claramente el alcance y campo de acción de la misma. Así tenemos:

La necesidad que nuestro país tiene de una legislación clara y precisa sobre el tema del acceso público a la información como herramienta idónea y eficaz que nos permita a los ciudadanos estar mejor informados sobre las decisiones que nos afectan en forma directa o indirecta y que a su vez provienen de funcionarios gubernamentales que ejecutan una función pública es vital y urgente para el mejor desarrollo de nuestra sociedad democrática.

La afirmación anterior es un hecho público y es evidente que surge del acontecer cotidiano en el que se pone de manifiesto la enorme duda que tiene la ciudadanía sobre la falta de transparencia en la administración pública (Ley N16 de 22 de enero de 2002. Publicada por la Defensoría del Pueblo. Pág 5).

Respecto a este tópico el artículo 1 de la Ley 6 de 2002 establece:

Artículo 1. Para efectos de la aplicación e interpretación de esta Ley los siguientes términos se entenderán así:

8 *Institución*. Toda agencia o dependencia del Estado incluyendo las pertenecientes a los Órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial, el Ministerio Público, las entidades descentralizadas, autónomas y semiautónomas, la Autoridad del Canal de Panamá, los municipios, los gobiernos locales, las juntas comunales, las empresas de capital mixto, las cooperativas, las fundaciones, los patronatos y los organismos no gubernamentales que hayan recibido o reciban fondos, capital o bienes del Estado.

11 *Principio de publicidad*. Toda la información que emana de la administración pública es de carácter público por lo cual el Estado deberá garantizar una organización interna que sistematice la información, para brindar acceso a los ciudadanos y también para su divulgación a través de los distintos medios de comunicación social y/o de Internet.

13 *Transparencia*. Deber de la administración pública de exponer y someter al escrutinio de la ciudadanía la información relativa a la gestión pública, al manejo de los recursos que la

sociedad le confía, a los criterios que sustentan sus decisiones y a la conducta de los servidores públicos

De las citas anteriores se pueden arribar a diversas conclusiones

1 En esencia, en Panamá la acción de Hábeas Data ha sido instituida para solicitar a una entidad o funcionarios públicos sobre la gestión manejo y demás aspectos de otro organismo del Estado. Con excepción de las entidades de capital mixto las privadas que presten servicios públicos con carácter de exclusivo y lo relativo a la información personal contenida en archivos de organismos estatales. Por lo tanto se encuentran excluidos de la tutela de la acción de Hábeas Data, la información sobre entidades de carácter privado

Antes de continuar con el análisis que nos corresponde conviene manifestar y dejar claro que la definición que de institución nos brinda la Ley 6 de 2002 sirve no sólo para determinar las entidades que deben proporcionar información sino sobre las cuales se puede pedir. Criterio éste que debemos tener como norte para comprender los argumentos que a continuación exponemos. En ese sentido es claro que la Dirección General de Ingresos es una entidad gubernamental obligada a entregar información sin embargo lo que hay que determinar es si la información que se le solicita puede ser proporcionada por tratarse de datos sobre una entidad privada. Por ello es necesario que al revisar los aspectos formales de la acción de Hábeas Data se tome en consideración no sólo si el custodio de la información es una entidad del Estado sino que lo solicitado también sea sobre una dependencia gubernamental o aquellas entidades que la ley excepcionalmente ha permitido solicitar información

2 El principio de publicidad al que se ha hecho referencia, deja establecido que es información de carácter público aquella que emana de la administración pública. Tendríamos que preguntarnos entonces si el hecho que parte de las donaciones que recibe el Club Activo 20 30 por conducto de entidades del Estado lo convierte automáticamente como parte de la administración pública, y que por tanto su información deba ser considerada de carácter público y regida por la Ley N16 de 2002 aun cuando se trate de un organismo privado?

3 Por su parte el principio de transparencia alude a la obligación de la administración pública de *someter al escrutinio de la ciudadanía la información relativa a la gestión pública al manejo de los recursos que la sociedad le confía a los criterios que sustentan sus decisiones y a la conducta de los servidores públicos*. Sin embargo el Club Activo 20 30 no es parte de la administración pública, no realiza ninguna gestión pública y la conducta de sus miembros se ajustan a estatutos internos y privados de la organización. A ello podemos agregar que *como queda establecido en el numeral 13 del artículo 1 de la Ley 6 de 2002 lo que en éste se viene a reconocer es el principio de transparencia en la gestión pública. Dicho así lo que se persigue es que el ejercicio del poder que se lleva a cabo a través de la administración del Estado, debe estar abierta y ser de conocimiento de la ciudadanía*. Lo resaltado es de la Corte (GONZALEZ M Rigoberto y ESQUIVEL M Ramiro. El Derecho de Acceso a la Información y la Acción de Hábeas Data. Un Estudio Legislativo. Primera Edición 2004. Pág 26). 4 Refirámonos por último al numeral 8 del artículo 1 de la Ley 6 de 2002 que enumera no sólo las entidades que deben proporcionar información sino sobre las cuales puede solicitarse la misma. Incluyendo dentro de estas categorías aquellas fundaciones asociaciones u organizaciones que reciban o hayan recibido fondos del Estado. Al respecto se ha indicado *Aplicando las reglas de hermenéutica específicamente el principio de interpretación sistemática o integral de la Ley se comprende que el derecho de exigir información y por ende la obligación de entregarla se extiende a las empresas de capital mixto las cooperativas las fundaciones los patronatos y los organismos no gubernamentales que hayan recibido o reciban fondos capital o bienes del Estado* (GONZALEZ M Rigoberto y ESQUIVEL M Ramiro. El Derecho de Acceso a la Información y la Acción de Hábeas Data. Un Estudio Legislativo. Primera Edición 2004. Págs 194 195).

Podríamos indicar que lo citado constituye uno de los argumentos en los que se fundamenta la accionante para que su petición sea admitida. Sin embargo, esta Corporación de Justicia se ha pronunciado sobre el alcance de este principio y reconocimiento expuesto en la Ley 6 de 2002. En ese sentido, este tribunal colegiado considera, que no toda fundación u organización por el sólo hecho de recibir o haber recibido fondos del Estado automáticamente la convierte en una organización que deba o sobre la cual debe entregarse información. Para ello es necesario que la recepción y administración de fondos o bienes del Estado sea de manera principal y habitual, situación que evidentemente no ocurre con la agrupación en comento. En este sentido, existen dos pronunciamientos por parte de esta Corporación de Justicia, en los que se estableció y reiteró el alcance del numeral 8 del artículo 1 de la Ley 6 de 2002, indicándose lo siguiente:

La firma apoderada judicial de la parte actora fundamenta la acción en el hecho que mediante nota fechada 23 de septiembre de 2002 se le solicitó al señor Carlos Ramírez, Coordinador de Proyectos de la Fundación Mar del Sur, que le concediera a la accionante copia autenticada de las ofertas de precios que fueron presentadas para la inspección del nuevo Hospital José Domingo de Obaldía, y copia autenticada del contrato de inspección firmado para dicha obra. Posteriormente y a través de la Nota FMS 196 2002 CR, el señor Ramírez respondió que no podía acceder a la solicitud planteada en virtud de que la Fundación Mar del Sur no es una institución del Estado y por consiguiente no le es aplicable la Ley N1 6 de 2002.

Alega el accionante que la Fundación Mar del Sur es una fundación que administra fondos del Estado recibidos en calidad de donación y que la información solicitada es de carácter confidencial o de acceso restringido (SIC) por lo cual debe conminarse al demandado a que proporcione la información solicitada.

En atención a la definición antes transcrita, el Pleno de esta Corporación observa que ciertamente tal como lo manifestara el accionante en su escrito, las fundaciones están comprendidas dentro del término institución que usa la Ley N1 6 de 2002. Sin embargo, la propia Ley también agrega que dichas fundaciones deben haber recibido o recibir fondos, capital o bienes del Estado por lo que se concluye que no todas las fundaciones están comprendidas dentro del marco regulador de la citada Ley de Transparencia, sino sólo aquellas que reciben o administran principal y habitualmente fondos o bienes del Estado.

la fundación Mar del Sur es una fundación de interés privado cuyo patrimonio está compuesto por los aportes de dineros o bienes que a título de contribuciones, donaciones, herencias, legados, cuotas o bajo cualquier otro título reciba la fundación de terceras personas y que por consiguiente la misma no administra ni recibe fondos o bienes del Estado Panameño principal ni habitualmente de allí que sus documentos privados estén protegidos por el artículo 29 de la Constitución y el artículo 89 del Código de Comercio (Acción e Hábeas Data, 28 de febrero de 2003, Magistrado Arturo Hoyos).

No obstante, dichas fundaciones comprendidas dentro del término institución que usa la Ley No 6 de 2002, deben haber recibido o recibir fondos, capital o bienes del Estado por lo que se concluye que no todas las fundaciones están comprendidas dentro del marco regulador de la citada Ley de Transparencia, sino sólo aquellas que reciben o administran principal y habitualmente fondos o bienes del Estado y ya en la sentencia de habeas data presentada en acción de habeas data por el mismo pretensor se pronunció de manera expresa sobre la inaplicación de las normas contenidas en la Ley 6ta de 2002 a las fundaciones de interés privado que no reciben donaciones de parte del Estado.

Las asociaciones de naturaleza privada, las fundaciones y las organizaciones no gubernamentales en general pueden ser susceptibles del habeas data, siempre que se trate de entidades particulares que hayan recibido fondos capital o bienes del Estado extremos éstos que naturalmente han de venir acreditados sea en la petición de información o en el informe de conducta de la autoridad demandada, situación ésta que opera como supuesto de hecho de éstas entidades privadas para que la información requerida sea procedente. Este presupuesto no ha sido cumplido en el caso que ocupa al Pleno razón por la que debe declararse no viable por ser lo procedente (Acción de Hábeas Data 22 de julio de 2004 Magistrado Rogelio Fábrega)

Al tenor del análisis externado queda clara la improcedencia de la pretensión razón por la cual se procede a decretar la inadmisibilidad de la misma

En mérito de lo expuesto el Pleno de la Corte Suprema administrando justicia en nombre de la Republica y por autoridad de la Ley NO ADMITE la acción de Hábeas Data formulada por la licenciada Grettel Villalaz de Allen en su propio nombre contra la Directora General de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas licenciada Gisela de Porras

Notifíquese

ALBERTO CIGARRUISTA CORTEZ

ROBERTO GONZÁLEZ R HARLEY J MITCHELL D ANIBAL SALAS CESPEDES
WINSTON SPADAFORA FRANCO JOSE A TROYANO ADÁN ARNULFO ARJONA
L (Con Salvamento de Voto) ESMERALDA AROSEMENA DE TROITINO VICTOR L
BENAVIDES P

YANIXSA Y YUEN (Secretaria General)

SALVAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO ADAN ARNULFO ARJONA L

Con el mayor respeto y consideración debo manifestar mi desacuerdo con el fallo de mayoría por las razones que a continuación se precisan

I EL CARÁCTER PÚBLICO DE LA INFORMACIÓN QUE SE SOLICITA

Es un hecho que no remite a duda el que la información relativa a los fondos que reciban entidades no gubernamentales con personería jurídica otorgada por el Ministerio de Gobierno y Justicia, tienen naturaleza pública

Al respecto basta observar el contenido del artículo 13 del Decreto Ejecutivo N 524 de 31 de octubre de 2005 que señala

Los fondos que reciban las entidades con personería jurídica otorgadas por el Ministerio de Gobierno y Justicia, de gobiernos extranjeros Organismos Nacionales internacionales o de otras fuentes canalizadas a través de instituciones públicas serán considerados de naturaleza pública, por tanto su manejo, destino y funcionamiento estarán sujetos a la fiscalización del Ministerio de Gobierno y Justicia

de la Contraloría General de la Republica y a las Leyes vigentes sobre esta materia (El destacado es propio)

El artículo 14 del citado Decreto Ejecutivo dispone además que tales fondos al ser destinados para la realización de proyectos de interés publico, deberán ser depositados en cuentas bancarias en instituciones financieras del Estado

Por su lado la Ley 32 de 1984 orgánica de la Contraloría General de la Republica establece en su artículo segundo que esta entidad también podrá ejercer su acción respecto de aquellas personas o entidades que realicen colectas publicas, para fines publicos, pero tal acción será proporcional al grado de participación de dichos entes publicos

La información que pretende obtener por virtud del presente Habeas Data guarda directa relación con los fondos recibidos por organismos sin fines de lucro con motivo de la realización del evento anual denominado Teleton 20 30 Es un hecho ampliamente conocido que en esta actividad el Estado y sus distintas instituciones efectuan aportes sustanciales para el logro de las metas de interés publico que promueve el Club Activo 20 30 de Panamá

De los señalamientos que se dejan expuestos es incuestionable que la información atinente a los fondos recibidos por este Club cívico mediante la colecta publica denominada Teletón 20 30 constituye una información de naturaleza publica que la hace susceptible de ser conocida en virtud de las disposiciones de la Ley N 6 de 22 de enero de 2002

Estoy en completo desacuerdo con la afirmación que contiene el fallo en el sentido de que no toda fundación u organización por el sólo hecho de recibir o haber recibido fondos del Estado, automáticamente la convierte en una organización que deba o sobre la cual debe entregarse información. Para ello, es necesario que la recepción y administración de fondos de bienes del Estado, sea de manera PRINCIPAL Y HABITUAL, situación que evidentemente no ocurre con la agrupación en comentario (Véase página 5 y 6 del fallo)

Resulta por demás desconcertante la consideración que se deja planteada ya que un sencillo examen de las normas que integran la Ley N 6 de 2002 pone de manifiesto que en ningun momento se exige que el recibo de los fondos estatales tiene que ser PRINCIPAL Y HABITUAL. Esto no es más que un añadido producto de una desorientada aplicación de la Ley que lo unico que provoca es el sacrificio de los principios de publicidad y transparencia que justificaron la adopción de esta normativa

II LOS FALLOS DE 28 DE FEBRERO DE 2003 Y 22 DE JULIO DE 2004

La decisión de mayoría pretende encontrar apoyo a sus criterios en los fallos que expidió el Pleno el 28 de febrero de 2003 y 22 de julio de 2004 en relación con información solicitada respecto a la llamada Fundación Mar del Sur

Esos pronunciamientos no pueden servir de apoyo en el presente caso puesto que la situación de la denominada Fundación Mar del Sur es completamente distinta a la del Club Activo 20 30

La Fundación Mar del Sur fue una entidad creada con la participación de servidores publicos cuya Junta de Síndicos estaba integrada por el Ministro de Salud y demás Directores de esa dependencia estatal situación que en nada coincide con el carácter netamente particular y cívico del Club Activo 20 30

En mi concepto el Habeas Data propuesto cumplía las exigencias legales para su reconocimiento y como quiera que esta no ha sido la decisión de la mayoría, hago constar que SALVO EL VOTO

Fecha ut supra

ADAN ARNULFO ARJONA L

YANIXSA YUEN (Secretaria Genera

ACCIÓN DE HABEAS DATA PRESENTADA POR GUILLERMO ALBERTO COCHEZ FARRUGIA Y VÍCTOR MANUEL MARTÍNEZ CEDEÑO CONTRA CABLES AND WIRELESS PANAMÁ S A PONENTE HARLEY J MITCHELL D PANAMÁ DIECIOCHO (18) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL NUEVE (2009)

Tribunal Corte Suprema de Justicia, Panamá
Sala Pleno
Ponente Harley J Mitchell D
Fecha miércoles 18 de noviembre de 2009
Materia Hábeas Data
Primera instancia
Expediente 279 06

VISTOS

Los licenciados GUILLERMO ALBERTO COCHEZ FARRUGIA y VÍCTOR MANUEL MARTINEZ CEDENO ambos abogados y nacionales panameños han acudido ante el Pleno de la Corte Suprema de Justicia a objeto de promover acción constitucional de Habeas Data en contra de la empresa CABLES & WIRELESS PANAMÁ S A

A través de resolución de 18 de abril de 2006 (fs 14 15) el Pleno actuando a través del Magistrado Sustanciador decidió admitir la acción de defensa constitucional y requerir el informe de rigor de parte de la entidad demandada

Siendo así se han satisfecho las etapas que se desglosan a lo largo del itinerario procesal por el que debe transitar el remedio de garantía constitucional por lo que el Pleno se encuentra en condiciones de emitir la decisión de fondo

LA ACCIÓN

Los gestores de la herramienta de apología constitucional afirman que el 24 de febrero de 2006 acuden ante la Gerencia General de la empresa Cable & Wireless Panamá S A a objeto de solicitar con fundamento en lo dispuesto en la ley 6 de 2002 y el hecho que la empresa es una entidad de capital mixto en donde el Estado ejerce el dominio del cuarenta y nueve por ciento (49 /) del capital accionario que se le suministre la información relacionada con su promoción periodística y anuncios realizados en el año 2005 específicamente lo que concierne a

- 1 Monto invertido en cada medio de comunicación social local
- 2 Patrocinios otorgados a programas y a periodistas raciales televisivos y de prensa

LA RESPUESTA DE LA ENTIDAD DEMANDADA

Augusto Gerbaud de la Guardia, quien aduce ser Apoderado General de la empresa Cable & Wireless Panamá, S A manifiesta que la entidad es una empresa de capital mixto que no se encuentra obligada a suministrar cualquier información a particulares salvo que se trate de aquellos datos que conciernen directamente a la prestación de sus servicios y a requerimiento del propio usuario

Argumenta que la información requerida es confidencial y de acceso restringido por lo que no puede ser divulgada, toda vez que la misma contiene la estrategia y logística de mercadeo de la empresa lo que de ser revelado a un tercero les ocasionaría un grave perjuicio habida cuenta que la misma participa dentro de un régimen de competencia abierta en el mercado de las telecomunicaciones En ese sentido afirma que ninguno de los competidores privados se encuentra obligados a divulgar esos datos

Para el representante de la empresa, constituye un error que se pretenda, por la vía que el Estado es dueño de una parte de las acciones de la empresa otorgar a cualquier persona la capacidad para requerir información de ésta cuando precisamente el Estado mantiene representantes en la Junta Directiva a quienes se les suministra todos los datos de la operación cumpliendo así con la obligación de informar a la sociedad

Finalmente cuestiona la legitimidad de los promotores del remedio constitucional pues asegura que aquellos no han requerido información en calidad de usuarios ni mucho menos integran la junta directiva o son representantes del Estado

DECISIÓN DEL PLENO

El nudo gordiano que se pretende desatar con la presente acción reside en establecer si dos personas que habitan en el territorio de la Republica de Panamá y que además ostentan la calidad de ciudadanos panameños pueden invocar una herramienta de apología constitucional y a través de ella obtener cierta información de una entidad privada que suministra un servicio publico de telecomunicaciones dentro de la cual además el Estado panameño posee una considerable participación en el capital social

Previo a ello conviene establecer que dentro del Estado Constitucional y Democrático de Derecho la Constitución opera como el venero jurídico original que gobierna a todas las personas sometidas a la jurisdicción del Estado calidad que deriva tanto de la fuente misma de la norma la mas autorizada y genuina expresión de la soberanía popular sino además porque se dispone en el silo jurídico original donde se depositan los derechos fundamentales de las personas lo que en esta etapa de la vida contemporánea se ha convertido en la principal fuente de validación de la gestión publica

En ese contexto el acceso a información de carácter o interés publico se ha convertido en una demanda moralmente justificada en la pretensión de participar y escrutar la gestión de diversos actores sociales que tiene una marcada consecuencia en la satisfacción de aquellos derechos que acarrear no sólo que el Estado exhiba una actitud pasiva clásicas libertades individuales que imponen la obligación de abstención en el círculo vital de los individuos sino además en aquellos derechos de orden individual y social que reclaman que el Gobierno del Estado realice alguna prestación especial Además de lo dicho el acceso a información de acceso e interés publico cumple la función de suministrar a la persona de una valiosa herramienta crítica que contribuye a fortalecer el sistema democratico al reducir la posibilidad que pueda ser contaminado por cualquier forma de corrupción

Frente a lo dicho hay que tener presente además que la configuración del actual escenario económico ha llevado a que particulares entren a prestar servicios publicos que otrora eran administrados y suplidos por agencias oficiales del Estado lo que termina por condicionar la satisfacción de los derechos fundamentales hasta el punto de permitir que las clásicas garantías que se dirigían a escrutar la conducta y actos de servidores publicos se hayan ampliado para alcanzar la gestión de particulares que participan directamente en la satisfacción de derechos fundamentales sin que ello pueda equivaler a la supresión del deber oficial de fiscalizar la prestación de servicios publicos ofrecidos por particulares

En ese sentido la configuración constitucional del derecho fundamental de acceso a información publica o de interés publico revela que el constituyente panameño se esmeró en prohijar una construcción filosófica sintonizada con la realidad al permitir que ese derecho fuera exigible tanto a servidores publicos como a los particulares que prestan servicios publicos aunque en éste ultimo caso sin ningun condicionamiento especial respecto el tipo de servicio publico calidad del mismo o si este es prestado en condiciones de singularidad o en régimen de mercado abierto siendo que la unica limitación se produce cuando la información requerida tenga un carácter confidencial o clasificado

Artículo 43 Constitución Nacional

Toda persona tiene derecho a solicitar información de acceso publico o de interés colectivo que repose en bases de datos o registros a cargo de servidores publicos o de personas privadas que presten servicios publicos siempre que ese acceso no hay sido limitado por disposición escrita y por mandato de la Ley así como para exigir su tratamiento leal y rectificación

Artículo 44 Constitución Nacional

Toda persona podrá promover acción de hábeas data con miras a garantizar el derecho de acceso a su información personal recabada en bancos de datos o registros oficiales o particulares cuando éstos ultimos traten de empresas que prestan un servicio al publico o se dediquen a suministrar información

Esta acción se podrá interponer de igual forma, para hacer valer el derecho de acceso a la información publica o de acceso libre de conformidad con lo establecido en esta Constitución

Así mismo en la ley No 6 de 22 de enero de 2002 se indica que la acción de habeas data establece que toda persona tiene derecho a recabar información de acceso o interés colectivo en poder de las instituciones descritas en esa ley dentro de las que se incluye las empresa de capital mixto

Artículo 1 Para efectos de la aplicación e interpretación de esta Ley Los siguientes términos se definen así

8 Institución Toda agencia o dependencia del Estado incluyendo las pertenecientes a los Órganos Ejecutivos Legislativo y Judicial el Ministerio Publico las entidades descentralizadas autónomas y semiautónomas la Autoridad del Canal de Panamá, los municipios los gobiernos locales las juntas comunales las empresas de capital mixto las cooperativas las fundaciones los patronatos y los organismos no gubernamentales que hayan recibido o reciban fondos capital o bienes del Estado

Artículo 2 Toda persona tiene derecho a solicitar sin necesidad de sustentar justificación o motivación alguna, la información de acceso publico en poder o en conocimiento de las instituciones indicadas en la presente Ley

Las empresas privadas que suministren servicios publicos con carácter de exclusividad están obligadas a proporcionar la información que les sea solicitada por los usuarios del servicio respecto de éste

Es un hecho notable que la acción constitucional de habeas data fue introducida por vía legal para luego ser anexada al contexto constitucional Siendo así el carácter supremo de la constitución el contenido actualizado en lo que respecta al derecho fundamental y la garantía del habeas data dirige la inteligencia de la norma a lograr la interpretación que asegure de mejor manera la satisfacción de un derecho fundamental conforme las exigencias de dignificación de la persona humana Por esa razón aun cuando la ley No 6 de 22 de enero de 2002 señale que el habeas data es viable contra particulares que presten servicios publicos exclusivos lo cierto es que el constituyente no condicionó la acción contra particulares que prestan servicios publicos

En el caso que nos ocupa, el representante de la empresa demandada alega que aun cuando la misma constituya una entidad de capital mixto se encuentra organizada y gobernada por el derecho privado razón por la cual se encuentra limitada la capacidad para obtener de ésta cualquier tipo de información conforme el régimen de Habeas Data, limitándose únicamente al suministro de información en relación a lo requerido por un usuario directo de sus servicios

No obstante a ello el Pleno debe aclararle al representante de Cables & Wireless que muy a pesar de que se encuentre organizada como una típica persona de derecho privado lo cierto es que por mandato imperativo del legislador contra esta entidad es viable el ejercicio de la acción de garantía constitucional por su doble condición por un lado al ser una corporación mixta en donde el Estado ejerce dominio sobre un porcentaje considerable de su capital accionario y además porque esta presta un servicio publico como lo es el de la telecomunicaciones Por tanto el Pleno *no comparte la opinión esgrimida por CABLE & WIRELESS PANAMA S A toda vez que a la luz del Artículo 1 de la Ley 6 de 2002 numeral 8 las empresas mixtas son consideradas como instituciones del Estado* (cfr fallo de 6 de septiembre de 2005 M P Adán Arnulfo Arjona López) Así mismo que la información concerniente al manejo de Cables & Wireless sea suministrada a los representantes designados por el Gobierno del Estado no constituye una garantía suficiente para que la información de carácter publico o interés colectivo llegue a la sociedad panameña en su conjunto ni mucho menos puede restringir o enervar la posibilidad de hacer uso del derecho fundamental de acceso a información publica y a la garantía del Habeas Data

En cuanto a la legitimidad activa para invocar la acción de habeas es necesario aclarar que dentro del ejercicio autónomo del derecho fundamental así como la acción que le da seguridad y vigencia a la prerrogativa el constituyente acudió a la fórmula toda persona (cfr artículos 43 y 44 de la constitución antes citados) sin asociarla a ninguna otra circunstancia especial por lo que cualquier individuo que se encuentre sometido a la jurisdicción del Estado panameño puede invocar el derecho y ulteriormente su acción sin que tenga que exhibir algun título o condición especial para ello

Ahora bien la empresa demandada argumenta que la información solicitada tiene un carácter confidencial o reservada, pues a la luz del artículo 83 de la ley 35 de 1996 puede ser considerada como un secreto comercial que de ser revelado la colocaría en desventaja frente a sus competidores en un mercado abierto pues estaría revelando sus estrategias de mercadeo

No obstante el escrutinio sesudo y detallado de la solicitud hecha por los petentes revela que el interés de aquellos no consiste en que Cables & Wireless desglose detalladamente su estrategia o planes de mercadeo sino que simplemente suministre una cifra numérica, el monto invertido en publicidad durante el año 2005 estableciendo la cantidad que se gastó en cada medio de comunicación social local así como los patrocinios otorgados a programas y a periodistas radiales televisivos y de prensa A ello se debe sumar que la información que se solicitó en febrero de 2006 se refiere a actividades que se desarrollaron en el año 2005

Así las cosas se debe tener presente que a la luz de lo dispuesto en la legislación que gobierna la materia (ley 35/1996 y Decreto Ejecutivo No 7 de 17 de febrero de 1998) un secreto industrial o comercial es toda información que sea capaz de suministrar una ventaja competitiva en relación a otras personas que participan dentro del mercado sin embargo en el presente caso los gestores constitucionales lo que solicitan es que se les muestre información sobre los gastos en campañas publicitarias para un año que ya transcurrió razón por la cual es cuestionable que se abandere la condición de secreto comercial para no mostrar información respecto a la inversión en publicidad, que dicho sea de paso fue revelada, pero sobretudo porque lo que se ruega es el suministro de un dato numérico respecto la inversión en publicidad mas no el contenido de ésta. Situación contraria sería que los promotores de la acción requieran que se revelen los datos concernientes al contenido mismo de la estrategia de publicidad y mercadeo de la empresa a futuro pues en este caso podría colocarse en riesgo la misma frente a sus competidores

Siendo así y como quiera que se ha dicho que Cable & Wireless es una empresa de capital mixto donde el Estado conserva una elevada participación accionaria, es decir que existen fondos públicos pertenecientes a la sociedad panameña en su conjunto los cuales se encuentran involucrados y comprometidos en el manejo de la empresa y como quiera que se solicitó es una cifra respecto los gastos que hizo esta en publicidad durante el año 2005 la información solicitada puede y debe ser suministrada

El Pleno reitera una vez mas emulando los argumentos sostenidos por el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos que el acceso a información pública o interés colectivo constituye un eficiente medio de control democrático de la gestión pública (Cfr Caso Claude Reyes Vs Chile sentencia de 19 de septiembre de 2006 Corte Interamericana de Derechos Humanos) pues permite el debate abierto sobre los valores morales y sociales y facilita el discurso político central para los valores democráticos (cfr Caso Baruch Ivcher Vs Peru Sentencia de 6 de febrero de 2001 Corte Interamericana de Derechos Humanos) reduce el riesgo que las instituciones públicas sucumban ante el fenómeno de la corrupción asegura transparencia y pulcritud en el ejercicio público y permite verificar si el Estado logra satisfacer sus naturales obligaciones las cuales se derivan y justifican en el elenco de derechos fundamentales como patrones culturales vigentes en la sociedad panameña

PARTE RESOLUTIVA

En mérito a lo expuesto LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA PLENO administrando justicia en nombre de la Republica y por autoridad de la Ley CONCEDE HABEAS DATA a los licenciados GUILLERMO ALBERTO COCHEZ FARRUGIA y VÍCTOR MANUEL MARTINEZ y ordena a la empresa CABLE & WIRELESS PANAMÁ S A que suministre la información requerida en el término improrrogable de cinco (5) días contados a partir de la notificación de la presente resolución

Notifíquese

HARLEY J MITCHELL D

OYDÉN ORTEGA DURÁN ANIBAL SALAS CESPEDES WINSTON SPADAFORA
FRANCO ADÁN ARNULFO ARJONA (Con Salvamento de Voto) ESMERALDA
AROSEMENA DE TROITINO VÍCTOR L BENAVIDES P ALBERTO CIGARRUISTA
CORTEZ LUIS MARIO CARRASCO

YANIXSA Y YUEN C (Secretaria General)

SALVAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO ADAN ARNULFO ARJONA L

Con todo respeto debo expresar mi disenso con la decisión de mayoría en el aspecto concreto que expongo a continuación

- 1 El fallo mayoritario ordena que se suministre la información sobre los gastos de publicidad realizados en el año 2005 por la empresa CABLE & WIRELESS PANAMA S A en consideración a su carácter de empresa de capital mixto
- 2 En relación con la figura del Habeas Data es obligante no pasar por alto que el elemento determinante a estos propósitos es el de establecer si la información que se pide califica como información de interés colectivo o de acceso público
- 3 Aun cuando se partiera de la base de que CABLE & WIRELESS es una empresa de capital mixto no podría considerarse que ello la asimila a una institución del Estado en el tema concreto de la información que ella puede manejar CABLE & WIRELESS es una empresa de capital mixto que por razón del servicio público que desarrolla puede poseer información de interés colectivo

Pero esta circunstancia no elimina el hecho igualmente cierto de que el artículo 33 de la Ley 5 de 9 de febrero de 1995 dispuso que ella se regiría por las normas de Derecho Privado luego que el sector privado adquiriera acciones de la empresa INTEL S A

- 4 De lo anterior puede convenirse entonces que Cable & Wireless como empresa de capital mixto que presta servicio publico tiene obligación de permitir el acceso a información de interés colectivo que se relacione con ese servicio Pero como su actividad también se rige por el Derecho Privado tendría que reconocerse entonces que la información de carácter propiamente comercial está protegida por la garantía de inviolabilidad y reserva que consagra el artículo 29 de la Constitución situación que este tribunal constitucional ha reconocido como se observa en la Sentencia de 29 de agosto de 2003 La información que esta empresa está obligada a divulgar es la que corresponde al servicio publico que brinda a la comunidad, por lo que debe entenderse que a aquélla que no califique como tal le es aplicable el planteamiento antes señalado todo lo cual permite concluir entonces que en este aspecto definitivamente Cable & Wireless no puede ser asimilada a las instituciones del Estado porque el alcance de las obligaciones de publicidad que la Constitución y la Ley imponen a estas ultimas es distinta y no puede asimilarse como si fueran la misma cosa
- 5 En cuanto a la naturaleza de la información divulgable las empresas de capital mixto que desarrollen actividades comerciales no son necesariamente equiparables a las instituciones del Estado
- 6 La decisión pasa por alto el importante cambio introducido por la reforma constitucional de 2004 en el sentido que las empresas prestadoras de servicios publicos estarian obligadas a divulgar información de acceso publico o de interés colectivo, sin importar la naturaleza jurídica de su organización
- 7 El hecho de que Cable & Wireless sea una empresa prestadora de servicios publicos no es razón suficiente para calificar como de acceso publico o de interés colectivo toda la información que repose en dicha empresa Es más la participación accionaria del Estado tampoco lo implica Se necesita examinar caso por caso la naturaleza de la información solicitada, para determinar si la empresa prestadora de servicios publicos está en la obligación de darla por tratarse de información de acceso publico o de interés colectivo
- 8 Ello es así por cuanto tales empresas si bien prestan un servicio publico no dejan de ser empresas privadas
- 9 El fallo no está sentando parámetros orientadores para que se pueda conocer con claridad cuándo una información en manos de una empresa que presta servicios publicos califica para los efectos de ser de acceso publico o de interés colectivo Es importante que esos parámetros se establezcan porque no toda la información de una empresa que presta servicios publicos es de acceso publico o de interés colectivo
- 10 La pregunta es ¿son los gastos de publicidad de una empresa prestadora de servicios publicos información de acceso publico o de interés colectivo?
- 11 La reforma constitucional estableció que el hábeas data puede proponerse contra particulares que presten un servicio publico para conocer información de acceso publico o de interés colectivo siempre que ese acceso no haya sido limitado por disposición escrita y por mandato de la Ley así como para exigir su tratamiento leal y rectificación (art 43)
- 12 La Constitución no define cuándo estamos ante una información publica o de interés colectivo por lo que su precisión tenemos que encontrarla en la Ley
- 13 La Ley 6 de 2002 ofrece algunos elementos para identificar los contornos de los conceptos información publica acceso libre e interés colectivo

- ⇒ Toda la información que emana de la Administración Pública es de carácter público por la cual el Estado deberá garantizar una organización interna que sistematice la información para brindar acceso a los ciudadanos y también para su divulgación a través de los distintos medios de comunicación social y/o Internet (num 11 art 1)
- ⇒ Las instituciones del Estado están obligadas a brindar a cualquier persona que lo requiera información sobre el funcionamiento y las actividades que desarrollan exceptuando las de carácter confidencial y de acceso restringido
- ⇒ El Estado informará a quien lo requiera sobre funcionamiento de la institución decisiones adoptadas información de todos los proyectos que se manejen en la institución estructura y ejecución presupuestaria actos públicos relativos a las contrataciones públicas programas desarrollados por la institución (art 10)
- ⇒ Será de carácter público y de libre acceso a las personas interesadas la información relativa a la contratación y designación de funcionarios planillas gastos de representación costos de viajes emolumentos o pagos en concepto de viáticos y otros de los funcionarios del nivel que sea y/o de otras personas que desempeñen funciones públicas (art 11)
- ⇒ Es información confidencial la que se encuentre en manos de agentes del Estado o de cualquier institución pública que tenga relevancia con respecto a los datos médicos y psicológicos de las personas la vida íntima de los particulares su historial policivo y penal su correspondencia y conversaciones telefónicas así como la información pertinente a los menores de edad, y la contenida en los registros individuales o expedientes de personal o de recursos humanos de los funcionarios (art 1 num 5)
- ⇒ Lo anterior significa que la información que la Ley considera confidencial no puede divulgarse ni aun en el caso en que esté en manos del Estado o de particulares que prestan un servicio al público o se dediquen a suministrar información (art 44 de la Constitución)
- ⇒ Se considera información de acceso restringido aquella cuya divulgación haya sido circunscrita únicamente a los funcionarios que la deban conocer en razón de sus atribuciones de acuerdo con la Ley (art 1 num 7)
- ⇒ Es de acceso restringido cuando así sea declarado por el funcionario competente la información relativa a seguridad nacional secretos comerciales o de información comercial de carácter confidencial obtenida por el Estado como producto de la regulación de actividades económicas los asuntos relacionados con procesos adelantados por el Ministerio Público y el Órgano Judicial la información que versa sobre procesos investigativos realizados por el Ministerio Público Fuerza Pública Administración de Aduanas Consejo de Seguridad Pública y Defensa Nacional Tribunal de Cuentas Dirección de Análisis Financiero Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia Autoridad Nacional de los Servicios Públicos los datos sobre la existencia de yacimientos minerales y petrolíferos la correspondencia relacionada con negociaciones diplomáticas comerciales o internacionales los documentos archivos y transcripciones que naciones amigas proporcionen al país en investigaciones penales policivas o de otra naturaleza actas registros de las discusiones o actividades del Consejo de Gabinete del Presidente o Vicepresidente de la República, con excepción de aquellas correspondientes a discusiones sobre la aprobación de los contratos la transcripción de las reuniones o información obtenida por las Comisiones de la Asamblea Nacional cuando se reúnan en ejercicio de su función fiscalizadora para recabar información que podría estar incluida en las situaciones anteriores

Para negar el otorgamiento de información por su carácter confidencial o de acceso restringido las instituciones del Estado tienen que hacerlo a través de resolución motivada, estableciendo las razones en las que fundamentan la negación y que se sustenten en la Ley (art 16)

Aun cuando se reconociera que Cable & Wireless es una empresa mixta, ello no puede interpretarse al extremo de que toda la información de su actividad es de carácter público o de interés colectivo y que puede ser divulgada a través de un hábeas data

La información de acceso público o de interés colectivo debe entenderse que es la relativa al servicio público no a la actividad comercial que desarrolla, ya que ésta queda amparada por un régimen constitucional y legal distinto en el que para acceder al conocimiento de información comercial es necesario que se cumpla una serie de exigencias como las que menciona el artículo 29 de la Constitución que consagra la inviolabilidad de la información comercial

No todos los documentos ni correspondencia que genera CABLE & WIRELESS son de naturaleza pública por lo que aquella que sea de carácter comercial quedaría protegida por la inviolabilidad que le garantiza el artículo 29 de la Constitución y para que ella pueda ser conocida, es preciso que se cumplan los requerimientos de mandato de autoridad competente para fines específicos etc

CABLE & WIRELESS es un particular que presta servicios públicos y puede conservar por razón de esa actividad información de acceso público o de interés colectivo divulgable a través de un hábeas data Sin embargo no toda la información que genera esta empresa puede calificarse como de acceso público o de interés colectivo

Los datos relativos a los gastos de publicidad que haya invertido la empresa en su actividad comercial guardan relación con terceras personas las cuales tienen derecho a que se respete la inviolabilidad de la información comercial conforme lo dispone el artículo 29 de la Constitución

No se puede confundir las obligaciones que tienen las instituciones del Estado de proporcionar información sobre su funcionamiento y actividad con las obligaciones que podrían exigirse a los particulares que prestan servicios públicos

La información de acceso público o de interés colectivo tratándose de una empresa particular que presta servicio público no puede contener datos individualizados de terceros sino que tiene que tener un contenido general porque si se permitiera que a través del hábeas data se revelen contratos que la empresa tenga con terceros derivados de su actividad comercial se estaría vulnerando la inviolabilidad de la documentación que consagra el artículo 29 de la Constitución

La decisión no ha reparado en que si bien Cable & Wireless presta un servicio público ella desarrolla una actividad netamente comercial y por tanto no toda la información que ella genera por su actividad puede ser calificada como de interés colectivo o de acceso libre ya que si eso fuera así habría que considerar que a esta empresa no se le garantiza la inviolabilidad de su documentación como lo concibe el artículo 29 de la Constitución

El artículo 43 de la Constitución establece que para que una empresa prestadora de servicios públicos esté obligada a proveer información dicha información debe ser de acceso público o interés colectivo

Como quiera que esta posición no es compartida por el resto de los integrantes de esta Corporación tengo que manifestar que SALVO EL VOTO

Fecha ut supra

ADAN ARNULFO ARJONA L

YANIXSA YUEN

(SECRETARIA GENERAL

BIBLIOGRAFÍA

OBRAS

ARAUZ SANCHEZ Heriberto La Acción de Habeas Data Editorial Universal Books Panama, 2002

ARANGO DURLING Virginia Introducción a los Derechos Humanos Editorial Publipan Panamá, 1997

CAMPUZANO TOME Hermenia Vida privada y datos personales Edit Tecnos España, 2000

CEPEDA Manuel José Los derechos fundamentales en la Constitución 1991 Edit Temis Colombia 1992

EKMEKDJIAN Miguel Angel y PIZZOLO Calogero Habeas Data Edit Depalma Argentina, 1996

FROSINI Victorio Informática y Derecho Editorial Temis Primera Edición Bogotá Colombia 1988

GILS CARBO Alejandra M Régimen Legal de las bases de Datos y Habeas Data Edit La ley Argentina, 2001

GÓMEZ PAVÓN Pilar La Intimidad como objeto de la Protección Penal Ediciones Akal SA Madrid España 1989

GONZALEZ MONTENEGRO Rigoberto El Habeas Data Editorial Litho Chen SA Primera Edición Panamá, 1999

GONZALEZ MONTENEGRO Rigoberto El Habeas Data. Edición Especial para Programa de Educación para la Vida en Democracia de a Defensor del Pueblo Defensoria del Pueblo Panama, 2002

- GONZALEZ MONTENEGRO Rigoberto y ESQUIVEL MORALES Ramiro A **Derecho de Acceso a la Información y la Acción de Habeas Data Un Estudio Legislativo** Primera Edición fundación Konrad Adenauer Stiftung Panama 2004
- GONZALEZ TREVIJANO Pedro I **La Inviolabilidad del domicilio** Editorial Tecnos Espana, 1992
- GOZAINÉ, Osvaldo Alfredo **Derecho Procesal Constitucional Habeas Data. Protección de Datos Personales** Edil Rubinzal Culzoni Argentina, 2001
- HERRAN ORTIZ Ana Isabel **La Violación de la intimidad en la protección de datos personales** Edit Dykinson España, 1999
- HOYOS Arturo **La interpretación constitucional** Edit Temis Colombia, 1993
- LONDONO TORO Beatriz **Derecho a la Intimidad y Bancos de Datos Financieros Análisis Doctrinal y Jurisprudencial Revista Informatica y Derecho Informático** Colombia Agora Impresores Ltda 1994
- LUZ CLARA Biviana, **Manual De Derecho Informatico** Editorial Nova Tesis Argentina, 2001
- MEJAN Luis Manuel C **El derecho a la intimidad y la informática** Edit Porrúa, Mexico 1996
- PEREZ LUNO Antonio Enrique **Manual de informática y derecho** Edit Ariel España, 1996
- PIERINI Alicia y LORENCES Valentin **Derecho de acceso a la información** Edit Universidad Argentina, 1999
- PUCCINELI Oscar **El habeas data en Iberoamérica** Edit Temis Colombia, 1999

QUINTERO César **Derecho Constitucional** Tomo 1 Imprenta Lehmmann San Jose
Costa Rica, 1967

RENGIFO GARCIX Ernesto **Propiedad Intelectual** II Edición Editorial Sigma
Colombia, 1997

SAGUES Néstor Pedro El habeas data alcances y problemática, en la obra **El
Derecho Publico actual.** Edil Depalma, Argentina, 1994

SANCHEZ Ana SILVEIRA Hector y NAVARRO Mónica. **Tecnología, Intimidad
y sociedad democrática** Edit Icaria Espana, 2003

VILLALOBOS Edgardo A **Introducción a la Informática.** Informática Jurídica y
Derecho Informatico Panama 1997

VILLAVERDE MENENDEZ, Ignacio **Los derechos del publico** Edit Tecnos
España 1995

VILLANUEVA Ernesto **Derecho Comparado de la Información** 2 edición Mexico
D F Universidad Iberoamericana — Fundación Konrad Adenauer 2002

ZALDIVAR, Karla Maria **El Derecho a la Intimidad en la era de la información**
Divulgacion Juridica Año III 5 octubre de 1996

BOLETIN

- 1) ESPINO P Manuel Enrique **Boletin Informativo del Órgano Judicial** Instituto Abril
Junio 2000

DICCIONARIO

- 1) CABANELLAS DE TORRES Guillermo **Diccionario Jurídico** Editorial Heliasta
S R L Buenos Aires Argentina, 1993

INTERNET — PAGINAS WEB

WWW asambleagob pa

www defensoriadelpueblo gob pa

www organojudicial gob pa

LEGISLACIÓN

Constitución Política de 1972

Decreto Ejecutivo No 124 de 21 de mayo de 2002

Ley No 6 de 22 de enero de 2002

REGISTROS JUDICIALES

Registro Judicial de septiembre de (994

Registro Judicial de julio de 1997

Registros Judiciales de abril de 2008 a junio de 2009